



UNIVERSIDAD DE
ALCALÁ



La prisión permanente revisable en España

Trabajo de fin de Máster: Luis Pinedo Elizondo

Tutora: Raquel Roso Cañadillas
Doctora en Derecho y profesora titular
de la Universidad de Alcalá de Henares

Enero-Febrero 2017

*A mi abuelo,
que seguro que estaría orgulloso.*

Índice de abreviaturas

AdD	Anales de Derecho
ADPCP	Anuario de Derecho penal y Ciencias penales
AFDUC	Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña
APDHA	Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
APLO	Anteproyecto de Ley Orgánica
APRCP	Anteproyecto de reforma del Código Penal
Art.	Artículo
Arts.	Artículos
AP	Actualidad Penal
BVerfGE	Sentencia del Tribunal Constitucional Federal de Alemania
c.	Contra
CE	Constitución Española
CEDH	Convención Europea de Derechos Humanos
Cfr.	Confróntese
CJA	<i>Criminal Justice Act</i>
CGPJ	Consejo General del Poder Judicial
CGAE	Consejo General de la Abogacía Española
CIS	Centro de Investigaciones Sociológicas
Coord.	Coordinador
CP	Código Penal
CPC	Cuadernos de política criminal
CPI	Corte Penal Internacional
DDFF	Derechos Fundamentales
DDHH	Derechos Humanos
DGIP	Dirección General de Instituciones Penitenciarias
Diario LL	Diario La Ley

Dir.	Director
DPPGI	Derecho Penal Parte General. Tomo I
DUDDHH	Declaración Universal de los Derechos Humanos
EEUU	Estados Unidos
ETA	Euskadi Ta Askatasuna
<i>Et al.</i>	Y otros
FJ	Fundamento Jurídico
GRAPO	Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre
INE	Instituto Nacional de Estadística
IRA	<i>Irish Republican Army</i>
IU	Izquierda Unida
JVP	Juez Vigilancia Penitenciaria
LAPSO	<i>Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders</i>
LECrim	Ley de Enjuiciamiento Criminal
LL	La Ley
LL Penal	La Ley Penal
LO	Ley Orgánica
LOGP	Ley Orgánica General Penitenciaria
LOPJ	Ley Orgánica del Poder Judicial
MF	Ministerio Fiscal
pág.	Página
págs.	Páginas
PP	Partido Popular
PSOE	Partido Socialista Obrero Español
RAE	Real Academia Española
RDPC	Revista de Derecho penal y Criminología
ReCRIM	Revista Criminológica
ReDCE	Revista de Derecho comunitario europeo
REIC	Revista Española de Investigación Criminológica
RECPC	Revista Electrónica de Ciencia penal y Criminología

ReP	Revista penal
RP	Reglamento Penitenciario
STC	Sentencia del Tribunal Constitucional
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
STEDH	Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
SSTEDH	Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
StGB	Código Penal alemán
TC	Tribunal Constitucional
TEDH	Tribunal Europeo de Derechos Humanos
TS	Tribunal Supremo
UAH	Universidad de Alcalá de Henares
UE	Unión Europea
UNIR	Universidad Internacional de la Rioja
UPyD	Unión Progreso y Democracia
UPN	Unión del Pueblo Navarro
UV	Universidad de Valencia
Vol.	Volumen

Índice

CAPÍTULO I.....	9
1. INTRODUCCIÓN	9
CAPÍTULO II.....	14
1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CADENA PERPETUA EN ESPAÑA	14
2. PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE	18
2.1 Regulación actual	18
2.2 Supuestos de aplicación.....	20
2.3 Acceso al tercer grado y permisos de salida	22
2.4 Libertad condicional o suspensión de la pena	24
2.5 Concurrencia de condenas	26
3. DERECHO COMPARADO EUROPEO.	27
3.1 Cadena perpetua en la legislación alemana	28
3.2 Cadena perpetua en la legislación británica	31
3.3 Cadena perpetua en la legislación italiana.....	36
3.4 Cadena perpetua en la legislación francesa	38
CAPÍTULO III	41
1. ARGUMENTOS A FAVOR DE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE	41
1.1 Sensación general de impunidad y desconfianza en la Administración de Justicia	41
1.2 Es necesaria para la prevención de delitos por su efecto intimidatorio	44
1.3 No es una cadena perpetua por su carácter revisable	47
1.4 Existencia de normativa similar en países de nuestro entorno europeo	48
1.5 Jurisprudencia del TEDH que avala esta pena	50
2. ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE.....	53
2.1 Atenta contra la dignidad de las personas	53
2.2 Atenta contra la prohibición de penas inhumanas y tratos degradantes	55
2.3 Vulnera el mandato constitucional de reinserción social	58
2.4 Vulnera el principio de legalidad.....	63
2.5 Vulnera el principio de igualdad	65
2.6 Otras posibles consecuencias	67
CAPÍTULO IV.....	70
1. OPINIÓN DE LA SOCIEDAD	70
CAPÍTULO V	76
1. CONCLUSIONES FINALES	76
ANEXO.....	84
1. JURISPRUDENCIA CITADA	84
BIBLIOGRAFÍA	86

Resumen

Este trabajo trata de desarrollar la denominada “prisión permanente revisable”, desde un punto de vista legal y doctrinal. Tras introducir el contexto político-social del momento y repasar los antecedentes históricos de la cadena perpetua en nuestro país, pasaremos a analizar su regulación actual en la normativa española, comparándola también con los modelos similares de otros países europeos.

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se reforma la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, incorporó definitivamente esta novedosa medida en nuestra legislación. El Grupo Parlamentario Popular la justificó alegando la necesidad de garantizar la confianza en la Administración de justicia y para la prevención de los delitos más graves, aludiendo al Derecho comparado y a la jurisprudencia del TEDH que la avalaba.

Sin embargo, la doctrina española mayoritaria entiende que la prisión permanente revisable vulnera gran parte de los principios y valores recogidos en nuestra Constitución, como son la dignidad de las penas, la prohibición de tratos inhumanos y degradantes, el principio de legalidad, el principio de igualdad y sobre todo, el mandato constitucional del art. 25.2, que exige al legislador que las penas vayan orientadas a la resocialización del reo.

Palabras clave: cadena perpetua, libertad condicional, prevención, resocialización, revisable, tiempo mínimo de cumplimiento, tratos inhumanos o degradantes.

Abstract

This paper is about what is called “Life sentence subject to reconsideration” from a legal and scholarly point of view. After introducing the current political and social context and examining the history of life sentence in Spain, we will analyze the way it has been regulated in the Spanish law and with regard to similar regulations in other European countries.

The law 1/2015, March 30, that modified the law 10/1995, November 23, included this new penalty in our Penal Code. The parliamentary group of the Popular Party justified it on the grounds that it strengthens the public trust in the justice system

and that it prevents the most serious crimes, all in accordance with the comparative law and the jurisprudence of the European Court of Human Rights that supported it.

However, most Spanish legal scholars consider that a life sentence even subject to reconsideration infringes many constitutional principles and values such as human dignity, the prohibition of cruel and degrading punishments, the principles of legality, equality and above all the constitutional mandate (art. 25.2) that demands from the legislator that penalties be aimed at rehabilitation.

Key words: life sentence, on parole (on probation, conditional release), deterrence, rehabilitation, reviewable, minimum mandatory sentence, inhuman and degrading treatment, deterrence.

Capítulo I

1. Introducción

Una sociedad ideal sería aquella en la que no se cometiesen delitos y donde todo el mundo respetase las leyes, principios y valores que la rigen. Ahora bien, como sabemos, esto es una utopía que está lejos de conseguirse por lo que se hace necesario contar con un Derecho penal que actúe como última ratio, castigando aquellos actos que afecten gravemente al ordenamiento jurídico existente.

En nuestros días, las leyes penales viven en un continuo proceso de reforma que se pone de manifiesto cada vez que se produce un cambio político en el gobierno, lo que emprende una fuerte modificación legislativa manteniendo una arraigada creencia de que así se actúa en beneficio de la sociedad. Es especialmente en momentos de crisis donde se tiende a pensar que cualquier medida que se tome tiene que ser bien vista por la ciudadanía, con el objetivo de demostrar que los poderes públicos no se quedan de brazos cruzados ante las vicisitudes que surjan derivadas de la coyuntura socio-económica del momento.

En los últimos tiempos son muchos los especialistas en Derecho penal y penitenciario que manifiestan su preocupación por la escalada de punitivismo que asola nuestro país y la paulatina sobreexplotación de las cárceles.¹ Con ocasión de un nuevo crimen horrendo, nos volvemos a preguntar qué hacer para impedir su repetición, si se hubiese podido disuadir con penas más duras, o si al menos se puede reparar a la víctima en su sensación de injusticia castigando a su autor con una severidad paralela a la gravedad del hecho cometido.

Se puede observar que cuando se produce un acto de *terrorismo*², la tendencia de los Estados suele ser incrementar el rigor penal y en consecuencia, la duración de las penas. España es un buen ejemplo de ello, ya que goza de una amplia legislación anti-terrorista que se renueva con frecuencia ante la perpetración de cualquier tipo de atentado, ya sea a nivel nacional, o lo que viene siendo más habitual en los últimos tiempos, internacional.³ En estos casos, surge la disyuntiva para el legislador de tener

¹ JUANATEY DORADO, ADPCP, 65 (2012), 128.

² Según el criterio de CAPITA REMEZAL, *Legislación penal antiterrorista*, 2008, 364; se puede elaborar una definición de terrorismo que aglutine todos los elementos que el CP de 1995 requiere, que vendría a ser cualquier “hecho delictivo, organizado o individual, con finalidad política, consistente en la subversión del orden constitucional, que suele producir como resultado la alteración grave de la paz pública o la atemorización de los habitantes de una población o de los miembros de un colectivo social, político o profesional”.

³ LAMARCA PÉREZ, Azpilcueta, 20 (2008), 200, recoge que “las leyes antiterroristas forman parte de la propia lógica del terrorismo, y que, en cierto modo, expresan una autonegación del Estado de

que elegir entre aumentar la seguridad (o sensación de seguridad para algunos autores) o respetar las garantías constitucionales. Sin embargo, en opinión de NÚÑEZ CASTAÑO⁴, la seguridad es un derecho que no se puede asegurar de manera absoluta, por lo que no merece la pena restringir las libertades y DDFF de la sociedad en aras de un objetivo imposible de alcanzar.

Hay que recordar que nos encontramos en un mundo cada vez más globalizado y cambiante en el que los medios de comunicación realizan un fuerte seguimiento a los sucesos delictivos especialmente inquietantes para nuestra sociedad, lo que origina en muchas ocasiones, que la percepción social que se tenga de la criminalidad presente ciertas distorsiones con la realidad.⁵ Los llamados “programas espectáculo” han visto que todos los temas que tengan relación con el Derecho penal, especialmente aquellos casos de delitos más graves o violentos, tienen un alto índice de audiencia, lo que permite que muchos de estos programas televisivos traten este tipo de asuntos diariamente haciendo juicios paralelos con diversos fines, ya sean políticos, ideológicos o simplemente económicos. La consecuencia es evidente: una mayor preocupación y miedo de la sociedad, que demandará más garantías de seguridad y protección, lo que conllevará más reformas penales.⁶

En la actualidad existen al menos tres frentes a través de los cuales, los llamados *gestores atípicos de la moral*, influyen decisivamente en la estructuración de las respuestas penales pensadas para crear una emergencia o alarma social determinada: a) el frente mediático; b) el frente social; y c) el frente político.⁷ La doctrina contemporánea ha denominado a este fenómeno *estructura discursiva de las*

Derecho que es buscada de propósito por los propios practicantes de este tipo de acciones” creándose así una dialéctica agresión-legislación. En el mismo sentido, ASUA BATARRITA, Delitos de terrorismo, 2006, 246, añade que la mayor amenaza para el Estado de Derecho y los derechos y libertades inherentes al mismo no proviene de los terroristas, sino de la propia respuesta que Estados y gobiernos articulan contra ellos.

⁴ Cfr. NÚÑEZ CASTAÑO, ReP, 37 (2016), 112. MUÑOZ CONDE, Ciencia jurídica, 1 (2012), 115 ss., va más allá y niega incluso que haya que ponderar el principio de la seguridad con las garantías constitucionales, primando siempre la segunda puesto que representa el progreso del Estado de Derecho.

⁵ Conviene señalar que, en la mayoría de los casos, las cadenas de televisión son entidades privadas que cuentan las noticias informativas que voluntariamente consideran oportuno y que, aparte de no disponer de la información necesaria para juzgarla con objetividad, utilizan titulares polémicos o morbosos para captar la atención del público, que poco o nada tiene que ver con el desarrollo real del suceso.

⁶ Cfr. PASCUAL MATELLÁN, Clivatge, 3 (2014), 60. Esta autora manifiesta que los españoles mantienen la confianza en la pena privativa de libertad, pero como instrumento para inocuizar al delincuente y no como medio para la resocializador que exige la Constitución.

⁷ En este sentido, ARMAZA ARMAZA, El tratamiento penal, 2013, 35-38. Este autor comenta que tanto los nuevos medios de comunicación, como diversas organizaciones, *lobbies* o grupos sociales, así como los propios partidos políticos quienes, a través del voto ciudadano dirigen su política criminal hacia su propio beneficio, influyen de manera decisiva en la mentalidad de la población, llegando a forzar al legislador a establecer medidas político-criminales contrarias a la mayoría de la doctrina penal.

emergencias, que constituye “una herramienta idónea para conseguir, eventualmente, un incremento –cuantitativo y cualitativo– de la respuesta penal por medio de la difusión y posterior internalización por parte de los miembros de la sociedad de la idea de que el peligro que corren los bienes jurídicos importantes para los miembros de la sociedad es tan grave, que por sí sólo, justifica una reacción excepcional y, por tanto, extraordinaria”.⁸ De esta manera se ha conseguido convencer tanto a la sociedad como a la propia clase política, de que la actuación de los delincuentes habituales más violentos supone un peligro tan aterrador para el bienestar de la nación que justifican el incremento del rigor penal.

No hay que remontarse mucho tiempo atrás para entender cómo funciona este proceso. Sin ir mas lejos, el día 8 de agosto de 2008 el terrorista De Juana Chaos fue puesto en libertad tras pasar “apenas” 21 años en prisión por haber matado a 25 personas, y poco tiempo después se produce el famoso “caso Mari Luz”.⁹ Es ahí, y precisamente por la presión mediática, social y política de la que venimos hablando, cuando renace una ola de simpatizantes de la cadena perpetua que desemboca en la última reforma de 2015 del CP y en su implantación definitiva en nuestra legislación por el Gobierno del PP.

No son pocos los juristas que critican que en estos casos se actúe bajo la “razón visceral” y que sean por tanto los ciudadanos legos en Derecho los que de alguna forma, a través de sus demandas hacia los poderes públicos, eligiesen la pena a imponer en los sucesos más terribles. Como indica HIDALGO BLANCO¹⁰, esto conllevaría dos situaciones problemáticas según la perspectiva que se tome. Por un lado, porque si el juzgador fuese familiar directo o amigo íntimo de la víctima, la pena que pediría en la gran mayoría de los casos sería la más grave punitivamente (cadena perpetua o incluso pena de muerte), o se pediría la antigua “Ley del Talió”.¹¹ Mientras que por otro, si quien juzgase el delito tuviese algún tipo de vinculación personal o familiar con el

⁸ ARMAZA ARMAZA, El tratamiento penal, 2013, 31-32. También en la misma línea doctrinal, ZAFFARONI *et al.*, Manual de Derecho, 2006, 197 ss.

⁹ Tras aparecer el cadáver de Mari Luz en mayo de 2008, los padres de la víctima iniciaron una campaña de recogidas de firmas en la que solicitaban la cadena perpetua para los pederastas, e incluso llegaron a entrevistarse con el Presidente del Gobierno en ese momento, José Luis Rodríguez Zapatero.

¹⁰ Cfr. HIDALGO BLANCO, La Toga, 187 (2013), 19. Sin embargo, también hay juristas contrarios a la opinión mayoritaria como NISTAL BURÓN, LL Penal, 68 (2010), 37, quien no comparte las críticas negativas a lo que se conoce como legislar “en caliente”, ya que lamentablemente la realidad muestra que una vez pasada la noticia sobre el hecho controvertido, éste pasa al olvido para los poderes públicos, quien terminan sin adoptar ninguna medida para prevenir un futuro caso similar.

¹¹ La Ley del Talió o la célebre frase “ojo por ojo diente por diente” se refiere a un principio jurídico de justicia retributiva en el que se inspiraron numerosos ordenamientos jurídicos en la Edad Antigua y en la Edad Media, en el que la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido. A pesar de lo primitiva que nos parece hoy en día, la Ley del Talió supuso un gran avance en comparación con la venganza ilimitada existente anteriormente, ya que al menos estableció un principio de proporcionalidad entre el daño inferido y la represalia de la víctima.

infractor, normalmente optaría por una pena razonable al delito y orientada más hacia su futura reinserción que a su carácter retributivo.

La reciente inclusión de la prisión permanente revisable en nuestro sistema penal conlleva preguntarnos en qué situación se encontraba España en relación a su delincuencia, para entender un poco más su justificación. Como breve repaso de la evolución de la delincuencia en nuestro país, fue en la década de los ochenta cuando se produjo un crecimiento fuerte y sostenido de la misma, para una posterior estabilización a mediados de los noventa. A continuación y a principios del siglo actual se inició un moderado incremento que se ha reducido en los últimos cinco años. Cabe destacar que mientras las conductas más graves han seguido generalmente este patrón y hoy en día se mantienen en niveles bajos, las faltas (que han pasado a denominarse delitos leves desde la última reforma del CP en el año 2015) no han dejado de crecer sustancialmente hasta la actualidad.

Con los últimos datos disponibles del Consejo de Europa se puede observar que España tiene una de las tasas de criminalidad más bajas de entre los países del entorno europeo, como Alemania, Francia, Reino Unido o Italia, entre otros, con unos 44 delitos por cada 1.000 habitantes en el año 2015, dato que viene decreciendo en los últimos años.¹² Si se ahonda en el asunto y se descomponen estas cifras según las diferentes clases de delito, nuestro país presenta unos niveles reducidos en delitos de gran transcendencia social como los asesinatos, homicidios y agresiones sexuales, y en menor medida, en delitos relativos al consumo y tráfico de droga. No obstante, seguimos estando por encima de la media de la Unión Europea en cuanto a los delitos patrimoniales.

Teniendo en cuenta los datos anteriores, llama la atención que a pesar de tener unos niveles de criminalidad bajos, España ostenta una tasa de encarcelamiento relativamente alta, muy cercana a la media del conjunto de Europa, siendo Reino Unido el único país occidental de la Unión Europea que tiene una tasa superior.¹³ En el año 2013 los 70 centros penitenciarios que teníamos en nuestro país albergaban 60.025 reclusos, a los que hay que sumar los 10.488 presos que se encontraban encerrados en las 14 prisiones que dependen de la Administración de Cataluña. Como recoge Díez RIPOLLÉS¹⁴, desde 1996 se viene produciendo un incremento incesante de la población

¹² Fuente: Eurostat. Solo Grecia y Portugal, con una tasa de criminalidad de 17,5 y de 38,2, están por debajo de España, mientras que Suecia y Bélgica encabezan la lista con un índice de criminalidad de 147,9 y 96,8 infracciones por cada 1.000 habitantes respectivamente.

¹³ Hay que tener en cuenta que la reciente presencia de países del Europa oriental aumenta notablemente esta media.

¹⁴ Díez RIPOLLÉS, Delitos y penas, 2015, 98-99. La otra cara de la moneda la podemos encontrar en Holanda, que debido a su sistema penal basado en técnicas alternativas y orientadas hacia la reinserción de los criminales, en los últimos años ha tenido que cerrar 19 centros penitenciarios por falta

penitenciaria española, siendo el 77% de los penados castigados por delitos patrimoniales, principalmente hurtos, robos y relativos a la droga.

Además, si atendemos a índices estadísticos oficiales se puede apreciar lo siguiente. En el ámbito de los delitos contra la vida, en el período correspondiente del año 1998 al 2006,¹⁵ el número de reincidentes condenados a penas graves por la comisión de delitos contra la vida (penas de entre 10 y 25 años de prisión) se eleva a 75, lo que supone un promedio anual de 8,33 personas reincidentes por este tipo de delito, número significativamente bajo que desmiente parte de las afirmaciones emanadas de la mencionada “estructura discursiva de las emergencias” y que no se corresponde con la percepción que tiene la sociedad sobre la delincuencia en España.

Tras la introducción, el trabajo queda dividido en tres partes y unas reflexiones finales. En la primera de ellas, y con posterioridad a una breve reseña histórica donde se repasa la evolución de la cadena perpetua desde sus orígenes hasta la actualidad, se analizará en profundidad como queda regulada la novedosa prisión permanente revisable en nuestra legislación, así como la comparativa con los modelos similares de esta pena en otros países del entorno europeo. En la segunda parte, se estudiarán en detalle los principales argumentos a favor y en contra de la imposición de esta nueva medida para la doctrina, utilizando una extensa bibliografía y jurisprudencia nacional e internacional. Y por último, se recogerán los resultados obtenidos de varias encuestas realizadas para entrar a valorar la opinión de la ciudadanía acerca de la prisión permanente revisable y del sistema penal en general.

de reclusos. Así pues, en el 2014 había mas funcionarios de prisiones (9.914) que presos (9.710), por lo que el Gobierno neerlandés decidió “alquilar” sus cárceles a países con altas tasas de criminalidad y centros superpoblados para la ratio de sus países como Bélgica o Noruega, para revitalizar la economía y reducir el gasto estatal que suponía tener los centros penitenciarios vacíos.

¹⁵ Se utilizan datos hasta el año 2006, ya que el INE ha eliminado la variable “reincidencia” en sus estudios desde entonces, y por tanto no se tienen datos al respecto.

Capítulo II

1. Antecedentes históricos de la cadena perpetua en España

La figura denominada como *cadena perpetua*, aunque muy distinta a la que se ha aprobado recientemente en el Congreso, estuvo en vigor en España desde que en 1822 se incluyó en el Código Penal, hasta que en 1928 fue suprimida durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera.

TÉLLEZ AGUILERA¹⁶ nos recuerda que ya en el Derecho romano se contemplaba la “vincula perpetua”, pero en ella lo principal no era tanto la privación de libertad sino el trabajo forzado inherente a ella. La prisión eclesiástica y de Estado en la época medieval eran claros exponentes de este tipo de condenas de duración indeterminada y perpetua. La pena de reclusión en orden religiosa de por vida o hasta que el monarca ordenase, se imponía a aquellos hombres que mantuviesen relaciones con familiares o cuñadas.¹⁷ Mientras que en la Edad Moderna se imponían la pena de galeras a los galeotes en las embarcaciones de la armada, que llegaban incluso a provocar la muerte del condenado a consecuencia del remo forzado, a pesar de que con el tiempo se restringió la duración máxima de la pena a diez años. Fue finalmente en el año 1803 cuando la pena de galeras quedó definitivamente abolida en nuestra legislación.¹⁸

En su origen, la cadena perpetua se llamó “trabajos perpetuos”, que como ya se ha mencionado anteriormente, más que suponer forzosamente la privación de libertad hacía referencia a la realización de trabajos forzosos, en los que se obligaba a los condenados a llevar cadenas que no les impidiesen realizar sus tareas, como se recogía en el art. 47 CP de 1822. En cualquier caso, estaba prevista la posibilidad de sustituir la pena de trabajos perpetuos por la de diez años de deportación, siempre que mediase arrepentimiento y enmienda y tras haber cumplido al menos diez años de condena (art.144-147).¹⁹ También se contemplaba, entre las penas graves, la pena de muerte, concretamente en el art. 53 del mismo texto legal.²⁰

¹⁶ TÉLLEZ AGUILERA, Derecho penal, 2015, 648-649.

¹⁷ Fuero Real, Libro IV, Título VIII, Ley 1.

¹⁸ Como señala ARMAZA ARMAZA, El tratamiento penal, 2013, 17, la “pena de galeras” fue concebida en su momento como un medio suficientemente efectivo para la contención de la peligrosidad criminal, dado que las galeras eran establecimientos de custodia altamente seguros y baratos para ser aplicados a los galeotes.

¹⁹ También se sustituía la pena de trabajos forzosos si los destinatarios eran mujeres o ancianos, pasando en ese caso a una pena de prisión perpetua.

²⁰ Numerosos juristas de la época, como CÓRDOVA LÓPEZ y BLASCO RECIO, pena de muerte, 1864, 17, criticaron esta sanción comparándola con la pena de muerte por su inmoralidad y sobre todo, por extinguir todo ánimo de esperanza y reintegración en la sociedad del reo.

Sin embargo, fue en los arts. 94 y ss. del CP de 1848 cuando apareció por primera vez la pena de “cadena perpetua” con esa denominación exacta y que además, contaba con un marcado sentido literal, ya que se caracterizaba por la circunstancia de que los penados llevarán siempre una cadena al pie sujeta de su cintura o a la de otro recluso.²¹ Se trata de un código de orientación liberal-conservadora, en el que primaba la idea de intimidación y retribución, mezclando la severidad de algunas medidas como la pena de muerte (art. 89 y ss.) y la de argolla (art. 113), con algunos signos de influencia de la orientación liberal como el principio de legalidad y proporcionalidad de las penas.²²

En el año 1850 se endurece el Código como consecuencia de revueltas populares y la inestabilidad política, en detrimento del principio de legalidad, aunque mantuvo la naturaleza de la pena de cadena perpetua y no incorporó ninguna particularidad a su cumplimiento.

Por su parte, el CP de 1870 se aprobó tras la revolución liberal de 1868 y la Constitución de 1869, y se distinguía tanto por la supremacía de la idea de retribución como por el restablecimiento de forma estricta del principio de legalidad. Cabe destacar al respecto que no modificó ni el concepto de “cadena perpetua” ni su significado de prisión a perpetuidad, manteniendo a los sentenciados a tal sanción la obligación de llevar siempre una cadena al pie pendiente de la cintura (art. 107), lo que “al menos implicaba que no estuvieran unidos de por vida dos a dos, con lo que eso suponía de dificultades y de pérdida de intimidad para llevar a cabo todas y cada una de las actividades vitales.”²³ No obstante, esta perpetuidad que recoge la norma se encontraba en entredicho por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque la cadena perpetua debía cumplirse en África, Canarias o Ultramar, y la escasez de establecimientos penitenciarios y la promulgación de disposiciones posteriores determinaron que los penados fueran reclusos allí donde se pudiese hacerlo. Y en segundo lugar, porque el art. 29 CP de 1870 preveía el indulto tras haber cumplido 30 años de prisión permanente, salvo algunos supuestos excepcionales en los que por la mala conducta del condenado u otras circunstancias concretas le hicieran no ser merecedor del mismo.

El Código de 1928, aprobado durante la dictadura militar de Primo de Rivera tenía una clara orientación autoritaria y estaba inspirado en el principio de la defensa social. Se introdujo las medidas de seguridad y se suprimió la pena de cadena perpetua, aunque sí se preveía la pena de muerte. Por tanto, a partir de ese momento esta pena

²¹ Véase art. 96 CP de 1848. Por lo general la pena de cadena perpetua se cumplía en la prisión de Ceuta.

²² CEREZO MIR, PGI, 6ª, 2004, 131.

²³ CUERDA RIEZU, Penas muy largas, 2011, 20.

desapareció en los Códigos penales posteriores e incluso del Código de Justicia Militar, en el año 1945, que de acuerdo con el art. 211 la reclusión militar tenía una duración de doce años y un día a treinta años.²⁴

Tras la proclamación de la Segunda República en abril de 1931 se reformó el Código anterior, aunque comúnmente es conocido como el CP de 1932. Se caracteriza por algunos avances técnicos, como la clasificación de las infracciones penales en delitos y faltas (que estuvo vigente hasta la última reforma penal de 2015), y el principio de humanización de las penas. La cadena perpetua se mantuvo fuera del texto legal y se suprimió la pena de muerte, aunque se restablecería por ley poco después en octubre de 1934.

Tras la guerra civil y la instauración del régimen del general Francisco Franco en 1939 se siguió aplicando el CP de 1932, aunque se aprobaron diversas leyes de derecho penal especial, que entre otras medidas restablecieron la pena de muerte. Fue en 1944 cuando se aprobó un código acorde a la ideología franquista, endureciendo la legislación y siguiendo la teoría de la prevención general y la retribución de las penas. Aunque también se previeron una gran cantidad de indultos y atenuantes, así como la redención de penas por trabajo,²⁵ y se reformó parcialmente en 1963 y 1973, pasando a denominarse CP de 1973, aunque en realidad se trata del CP de 1944 reformado. Durante este período tampoco se incorporó la pena de cadena perpetua.

Tras el fallecimiento de Franco y con la transición a la democracia, el CP vigente en esa fecha sufrió una serie de reformas, principalmente a través de LO, en los años posteriores con la entrada en vigor de la CE de 1978. Se elaboraron una serie de anteproyectos y proyectos del CP que nunca llegaron a aprobarse, hasta que definitivamente en el año 1995 se creó el conocido por “Código penal de la Democracia”, influenciado directamente por el nuevo ordenamiento político-social existente en el país y acorde a los preceptos constitucionales tendentes a la humanización de las penas y al principio de legalidad del art. 25 de la CE. En este nuevo texto penal hay una bajada generalizada del tiempo de las penas, aunque también se suprime el beneficio penitenciario de la redención de penas por trabajo.²⁶ Asimismo, la pena de muerte queda abolida por el art. 15 de la Constitución.²⁷

²⁴ El Código de Justicia Militar de 1890, modificado por Real Decreto de 13 de agosto de 1920, incluía entre su epílogo de sanciones la “reclusión perpetua militar”, aunque el precepto 179 añadía que *“las penas perpetuas militares se declararán terminadas a los treinta años”*.

²⁵ Estos beneficios penitenciarios, regulados en el art. 100 del CP franquista, fueron los protagonistas de la polémica “Doctrina Parot”, donde se discutía acerca de si debían aplicarse y descontarse de la pena abstracta impuesta al penado o, por el contrario, del límite máximo de cumplimiento (30 años en ese momento).

²⁶ Las Disposiciones Transitorias primera y segunda de la LO 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal establecieron que una vez que entrase en vigor el nuevo Código, las redenciones de pena por el trabajo “sólo se aplicaría a los delitos y faltas cometidos con anterioridad si las disposiciones del

Con la reforma del CP de 2003 se modifica sustancialmente la orientación político-criminal del Código anterior, especialmente en el carácter retributivo de las penas y en la ampliación del límite máximo de cumplimiento a 40 años para los supuestos que recoge el art. 76.1 apartados c) y d) del CP actual.²⁸ Esto también se manifiesta con la introducción del período de seguridad, por lo que para acceder al tercer grado en penas superiores a cinco años, debe haberse cumplido, al menos, la mitad de la misma, mientras que se endurecen los requisitos para alcanzar la libertad condicional.²⁹ Por este motivo, parte de la doctrina considera que la prisión perpetua ya venía incorporada a nuestra legislación *de facto* aunque no se recogiese expresamente en el CP, al entender que condenas extremadamente largas de 30 o 40 años de cumplimiento actúan como una cadena perpetua encubierta.³⁰ Hasta la fecha, el CP del 1995 ha sufrido cerca de una trentena de reformas,³¹ todas ellas caracterizadas por su elevado nivel punitivo, contribuyendo a la conversión en “el Código Penal de la Seguridad”.³²

mismo son más favorables al reo” y que “sólo serán de aplicación a todos los condenados conforme al Código derogado y no podrán gozar de ellas aquellos a quienes se les apliquen las disposiciones del nuevo Código”.

²⁷ La CE de 1978 abolió la pena de muerte salvo en los casos que las legislación militar establecía en tiempos de guerra (traición, rebelión militar, espionaje, sabotaje, o crímenes de guerra) y fue en 1995 tras una larga campaña de Amnistía Internacional y de diferentes organizaciones sociales, cuando se suprimió por completo de nuestra normativa castrense.

²⁸ El art. 76.1 CP:

“c) *De 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, dos de ellos estén castigados por la ley con pena de prisión superior a 20 años.*

d) *De 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años.*”

²⁹ Para LLOBLET ANGLÍ, InDret, 1 (2007), 28-30, esta reforma no persigue la seguridad sino la prevención general positiva, “lo que nos conduce a un Derecho de la peligrosidad, cuyo mecanismo de aseguramiento es la inocuización.”

³⁰ Entre otros, GONZÁLEZ COLLANTES, ReCRIM, 9 (2013), 8. De hecho, en la actualidad hay más de 400 personas que se encuentran encerradas por condenas que superan los respectivos límites de 20, 25, 30 ó 40 años respectivamente que exige la ley, al haber delinquido en varias ocasiones y después de haber sido sentenciados por otros delitos previamente (art. 76 CP, acumulación de penas).

³¹ Como recoge PASCUAL MATELLÁN, Clivatge, 3 (2015), 55, el CP actual ha sufrido 25 reformas hasta la fecha, de las cuáles 17 han sido realizadas por el PP y 8 por el PSOE.

³² Esto es lo que Díez RIPOLLÉS, REPC, 6 (2004), 6 ss., ha definido como “modelo penal de la seguridad ciudadana”, que contiene los siguientes rasgos característicos. En primer lugar, que el sentir de la opinión pública pasa a ocupar una posición preponderante a la hora de la toma de decisiones. Los partidos políticos muestran una ferviente disposición a reaccionar ante cualquier problema social, abordando el problema en muchos casos, a partir de los síntomas y no de las causas que los originan. El segundo punto sería la consideración de que “el garantismo” solo consigue privilegios para los delincuentes, que son seres que voluntariamente se autoexcluyen de la sociedad por lo que no requieren ningún tipo de tratamiento orientado hacia su reinserción social. En tercer lugar, que la víctima pasa a ser un elemento de primer orden dentro de la política criminal del país. Cambia de tener un rol neutral a que sus intereses y bienes lesionados representan un perjuicio para la sociedad en general, que se solidariza con la víctima en busca de venganza y justicia. Y por último, que en los últimos años, tanto la clase

De esta forma, se retoma una pena que aunque no es desconocida en nuestra historia legislativa, si es muy lejana en el tiempo, ya que desde su abolición en el año 1928 por el imperativo de principios de humanidad de las penas, no se ha incorporado en los Códigos Penales posteriores, ni incluso en ningún momento de la dictadura del General Franco. Por tanto, como recoge CANCIO MELIÁ³³, nos encontramos ante “un cambio histórico” y “una de las decisiones político-criminales más importantes desde el restablecimiento de un sistema jurídico-político de libertades en el año 1977”.

2. Prisión permanente revisable

La prisión o cadena perpetua se entiende como la privación indefinida de libertad, hasta la muerte del recluso, sin que exista posibilidad alguna de liberación total o parcial previa. Aunque como acertadamente recoge TÉLLEZ AGUILERA³⁴, la LO 1/2015 de reforma del CP ha introducido en nuestro Ordenamiento jurídico una forma “*low cost* de cadena perpetua”, conocida por el eufemismo de *prisión permanente revisable*, intentando alejarse del connotativo concepto de perpetuidad que hacía referencia a una vieja institución que llevaba casi un siglo desaparecida en nuestro país.

Se trata en definitiva, de una nueva pena de privativa de libertad de duración indeterminada y de aplicación restringida y extraordinaria para una serie de casos tasados y catalogados como especialmente graves. Pasando a analizar el sentido gramatical de la nueva pena, según la RAE se entiende por permanente: “el que permanece”, y por permanecer: “Mantenerse sin mutación en un mismo lugar, estado, o calidad”. Mientras que revisable es aquello “que se puede revisar”, y revisar hace referencia a “someter algo a nuevo examen para corregirlo, enmendarlo o repararlo”.

2.1 Regulación actual

La prisión permanente revisable es una de las principales novedades que presentaba el APRCP 2012-2013³⁵, y que se ha hecho realidad tras la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de

política como el poder judicial y el resto de agentes que intervienen en el ámbito penal han caído en el más absoluto descrédito para la ciudadanía.

³³ CANCIO MELIÁ, Manuel, Diario LL, 8175 (2013), 4.

³⁴ Cfr. TÉLLEZ AGUILERA, Derecho penal, 2015, 648.

³⁵ Ministerio de Justicia, *Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal*, Ruiz-Gallardón Jiménez, Alberto (Ministro de Justicia), Madrid, 11 de octubre de 2012. Cabe resaltar que en la modificación del APRCP que se llevó a cabo en abril de 2013 no se incorporó ninguna variación a los supuestos de aplicación de esta pena.

noviembre, del Código Penal, entrando en vigor el 1 de julio de ese mismo año.³⁶ En el apartado II del Preámbulo se recoge que:

“La reforma introduce una nueva pena de prisión permanente revisable, que podrá ser impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad –asesinatos especialmente graves, homicidio del Jefe del Estado o de su heredero, de Jefes de Estado extranjeros y en los supuestos más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad– en los que está justificada una respuesta extraordinaria mediante la imposición de una pena de prisión de duración indeterminada (prisión permanente), si bien sujeta a un régimen de revisión: tras el cumplimiento íntegro de una parte relevante de la condena, cuya duración depende de la cantidad de delitos cometidos y de su naturaleza, acreditada la reinserción del penado, éste puede obtener una libertad condicionada al cumplimiento de ciertas exigencias, en particular, la no comisión de nuevos hechos delictivos.

La prisión permanente revisable, cuya regulación se anuncia, de ningún modo renuncia a la reinserción del penado: una vez cumplida una parte mínima de la condena, un tribunal colegiado deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal. La previsión de esta revisión judicial periódica de la situación personal del penado, idónea para poder verificar en cada caso el necesario pronóstico favorable de reinserción social, aleja toda duda de inhumanidad de esta pena, al garantizar un horizonte de libertad para el condenado.

En la prisión permanente revisable, cumplida esa primera parte mínima de la pena, si el tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su situación; y si, por el contrario, el tribunal valora que cumple los requisitos necesarios para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control orientadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad, como a asistir al penado en esta fase final de su reinserción social.

La pena de prisión permanente revisable no constituye, por ello, una suerte de «pena definitiva» en la que el Estado se desentiende del penado.

³⁶ El día 26 de marzo de 2015, el Congreso aprobó definitivamente esta reforma con 181 votos a favor (mayoría absoluta del PP y el apoyo de UPN), la abstención de Foro Asturias y 138 votos en contra de los demás grupos parlamentarios. Esta nueva pena ya se había previsto en el Anteproyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, el 16 de julio de 2012 (Exposición de Motivos, II).

Al contrario, se trata de una institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad, con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de prisión.

*Se trata, en realidad, de un modelo extendido en el Derecho comparado europeo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la Convención Europea de Derechos Humanos, pues ha declarado que cuando la ley nacional ofrece la posibilidad de revisión de la condena de duración indeterminada con vistas a su conmutación, remisión, terminación o libertad condicional del penado, esto es suficiente para dar satisfacción al artículo 3 del Convenio (cfr. SSTEDH 12-2-2008, caso *Kafkaris vs. Chipre*; 3-11-2009, caso *Meixner vs. Alemania*; 13-11-2014, caso *Bodein vs. Francia*; 3-2-2015, caso *Hutchinson vs. Reino Unido*).*

El Consejo de Estado ha tenido también oportunidad de pronunciarse sobre la constitucionalidad de las penas de duración indeterminada –pero revisables–, al informar con relación a la ratificación por España del Estatuto de la Corte Penal Internacional, en el que está prevista la posible imposición de una pena de prisión permanente.”

De este modo, según lo dispuesto en el apartado II del Preámbulo de la LO 1/2015, podríamos resumir diciendo que la aplicación de esta pena se basa exclusivamente en tres argumentos, que más adelante se analizarán en detalle:

- La necesidad de fortalecer la confianza en la Administración de Justicia.
- Que al ser revisable está dentro de los preceptos constitucionales.
- Que se trata de un modelo extendido en Derecho comparado europeo.

2.2 Supuestos de aplicación

El vigente artículo 33.2.a) del CP recoge la prisión permanente revisable como la primera en el listado de penas graves, y a su vez queda incluida en el art. 35 del mismo texto como pena privativa de libertad junto a la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Como señala el apartado II del Preámbulo de la LO 1/2015, de 30 de marzo, la pena de prisión permanente revisable se incorpora al Código Penal español en una relación de supuestos cerrados y concretos de extrema gravedad, en la que destacan los asesinatos especialmente graves del art. 140 CP, que dispone que:

“1. El asesinato será castigado con pena de prisión permanente revisable cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1.ª Que la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad.

2.ª Que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima.

3.ª Que el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u organización criminal.

2. Al reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de dos personas se le impondrá una pena de prisión permanente revisable. En este caso, será de aplicación lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 78 bis y en la letra b) del apartado 2 del mismo artículo.”

Aparte de los anteriores, también se consideran merecedoras de la pena de prisión perpetua las siguientes conductas delictivas: el delito de homicidio del Jefe de Estado o del Príncipe heredero (art. 485 CP),³⁷ el delito de homicidio de Jefes de Estado extranjeros o de otra persona internacionalmente protegida por un Tratado internacional que se encuentre en España (art. 605.1 CP), delitos de genocidio en su vertiente más grave (art. 607 CP),³⁸ delitos de terrorismo cuando se ocasione la muerte de una persona (art. 573 bis 1 1º CP) y en los delitos de lesa humanidad si causaren la muerte de una persona (art. 607 bis 2.º1 CP).

La suspensión de la prisión permanente, como más adelante se desarrollará, se regula como una modalidad de libertad condicional sujeta a unos plazos y requisitos especiales. Como ya se ha mencionado, el art. 33.2.a) CP califica esta pena como grave mientras que el art. 35 la sitúa en primer lugar en la clasificación de las penas privativas de libertad.³⁹ Sin embargo, no cuenta con una regulación propia en el apartado dedicado a estas sanciones, por lo que como señala ROIG TORRES⁴⁰, no existe una normativa que englobe el régimen completo de esta nueva pena, sino simplemente algunas

³⁷ En los delitos contra la Corona destaca que para quien cause la muerte de los ascendientes o descendientes del Rey o de la Reina, Príncipe o Princesa de Asturias se le impondrá un delito castigado con penas de prisión de veinte a veinticinco años en vez de la pena de prisión permanente revisable, entendiendo que el Jefe de Estado y su heredero merecen una mayor protección penal.

³⁸ Son considerados especialmente graves aquellos casos en los que se mata a alguno de los miembros del grupo nacional, religioso, racial, étnico o determinado por la discapacidad de sus integrantes, o los que se refieran a la agresión sexual a alguno de ellos o produjeran algunas de las lesiones previstas en el art. 149 CP. Éste artículo se refiere a lesiones como la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal, o casos de impotencia, esterilidad, grave deformidad, o a una grave enfermedad psíquica.

³⁹ El art. 35 CP recoge la prisión permanente como pena privativa de libertad junto a la prisión, la localización permanente y la responsabilidad subsidiaria por impago de multa.

⁴⁰ ROIG TORRES, La cadena perpetua, 2016, 146.

disposiciones específicas dispersas en el Código Penal respecto a la determinación de la pena, el acceso al tercer grado y los permisos de salida y la libertad condicional o suspensión de la pena.

2.3 Acceso al tercer grado y permisos de salida

El art. 36.1 CP⁴¹ establece reglas especiales para la progresión al tercer grado y la concesión de permisos de salida de los condenados a esta pena. En concreto y como también se deriva del art. 92, la clasificación en tercer grado será competencia del tribunal sentenciador, previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, así como de haber dado audiencia al Ministerio Fiscal y a las Instituciones Penitenciarias.

Tras las críticas recibidas en la redacción de la LO 15/2003, de 25 de noviembre, en la siguiente reforma del CP a través de la LO 5/2010, de 22 de junio, el legislador, en el apartado segundo del art. 36 CP que hace referencia al denominado *período de seguridad*, habilita que el juez o tribunal puedan con carácter opcional ordenar que cuando la duración de la pena impuesta sea superior a cinco años, “la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta.”⁴²

Este “sentido positivo” de la norma para los casos generales contrasta con el tenor negativo que el art. 36 prevé para la prisión permanente revisable, donde se fijan unos requisitos más rigurosos para la clasificación del penado en el tercer grado penitenciario. Como norma general, no podrá otorgarse hasta el cumplimiento de quince años de prisión efectiva y de veinte cuando el delito castigado sea de terrorismo. No obstante, el apartado 3 del art. 36 CP establece la excepción de que el JVP o el tribunal que corresponda, previo informe del MF, Instituciones Penitenciarias y demás partes, la

⁴¹ Este precepto señala que:

“1. La pena de prisión permanente será revisada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92.

La clasificación del condenado en el tercer grado deberá ser autorizada por el tribunal previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias, y no podrá efectuarse:

a) Hasta el cumplimiento de veinte años de prisión efectiva, en el caso de que el penado lo hubiera sido por un delito del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código.

b) Hasta el cumplimiento de quince años de prisión efectiva, en el resto de los casos.

En estos supuestos, el penado no podrá disfrutar de permisos de salida hasta que haya cumplido un mínimo de doce años de prisión, en el caso previsto en la letra a), y ocho años de prisión, en el previsto en la letra b).”

⁴² En todo caso, será preceptivo para el juez o tribunal la no clasificación del penado en el tercer grado penitenciario hasta al menos el cumplimiento de la mitad de la condena cuando se trate de los siguientes delitos: terrorismo y referentes a organizaciones terroristas o cometidos en el seno de un grupo criminal, los delitos del art. 183 CP (abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis) y delitos del Capítulo V del Título VIII del Libro II de este Código, cuando la víctima sea menor de trece años (prostitución y explotación sexual).

progresión al tercer grado penitenciario por motivos de dignidad personal o humanitarios de penados con un estado de salud muy grave y escasa peligrosidad.⁴³

Transcurridos los quince o veinte años, el penado podrá ser clasificado en tercer grado, en cuyo régimen abierto deberá permanecer hasta cumplir los 25 años de prisión, que es la fecha mínima de cumplimiento exigible para poder acceder a una revisión de la pena que pueda derivar en la libertad condicional (art. 92.1). Este informe o pronóstico favorable de reinserción social se elabora por el tribunal sentenciador teniendo en cuenta una serie de criterios, tales como: la gravedad de los delitos, el tiempo de condena que resta hacia la libertad, permisos de salida disfrutados, la buena conducta, contar con apoyo social o familiar, disponer de una oferta laboral y carecer de variables psicológicas que permitan creer en una posible reincidencia delictiva. Parte de la doctrina entiende que esta serie de variables constituyen *conceptos jurídicos indeterminados* que dependen del arbitrio de las autoridades penitenciarias y que suponen serios obstáculos para el condenado a cadena perpetua, por lo que la posibilidad de que pudiese superarlas y alcanzar el tercer grado son ínfimas en la realidad.⁴⁴

También se fijan plazos concretos para los permisos de salida. Con el actual Código Penal, tienen que haber transcurrido al menos doce años de cumplimiento efectivo de la pena si se han cometido delitos de terrorismo, y ocho para el resto de casos (art. 36.1 CP). Sin embargo, la LOGP establece dos requisitos legales para la concesión del permiso: por un lado, que el reo tenga buena conducta en su estancia penitenciaria; y por otro, que haya cumplido al menos la cuarta parte de la condena que se le impuso. Como señala RÍOS MARTÍN⁴⁵, en este aspecto surgen las primeras dificultades como por ejemplo, que ¿cuál es la cuarta parte de una condena a prisión perpetua y por tanto indeterminada?. Y cabe añadir, que teniendo en cuenta los requisitos y normas internas dictadas por la DGIP donde se contienen una tabla de variables que indican el riesgo o peligrosidad del penado, resulta casi imposible obtener los permisos en los plazos que señala la regulación de la prisión permanente revisable, atendiendo a la gravedad de los hechos y a la práctica administrativo-penitenciaria en este ámbito.⁴⁶

⁴³ También los arts. 47, apartado 1 de la LOGP y 155 del RP reconocen permisos de salida extraordinarios por defunción o enfermedad grave de familiares cercanos a todos los internos, sin excepción.

⁴⁴ Entre otros, NÚÑEZ FERNÁNDEZ, LL penal, 110 (2014), 61.

⁴⁵ RÍOS MARTÍN, Prisión perpetua en España, 2013, 44-45.

⁴⁶ En este sentido, cfr. RÍOS MARTÍN, Prisión perpetua en España, 2013, 45-46.

2.4 Libertad condicional o suspensión de la pena

Hasta ahora, la *libertad condicional* era una forma específica de cumplimiento de las penas privativas de libertad que tradicionalmente ha estado enfocado a preparar la futura vida del penado en libertad en garantía de la prevención espacial positiva que la CE impone a toda pena de prisión (art. 25.1).⁴⁷ Tras la reforma de 2015, se configura como una modalidad de suspensión de la ejecución de las penas, como se deriva de la nueva redacción del art. 90 CP: “*El juez de vigilancia penitenciaria acordará la suspensión de la ejecución del resto de la pena de prisión y concederá la libertad condicional al penado [...]*”. Sin embargo y como señala SALAT PAISAL⁴⁸, este cambio de naturaleza contrasta con los fundamentos de uno y otro instituto. Mientras que la libertad condicional se concede porque se considera adecuada para resocialización del reo en vistas a su vida fuera del centro penitenciario, la suspensión tiene como objetivo evitar que la ejecución de la pena de prisión pueda resultar innecesaria o pueda generar efectos contraproducentes para el recluso.⁴⁹

El Tribunal podrá acordar la suspensión de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable cuando concurren los requisitos del art. 92 CP:

“-Que se hayan cumplido 25 años de la condena, que pueden llegar a ser 30 cuando se dan las circunstancias del art. 78 bis 1 b) ACP.”⁵⁰

-Que se encuentre clasificado en tercer grado penitenciario.

-Que el Tribunal a la vista de la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por su reinserción en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales, los efectos que se puedan esperar de la suspensión de la pena y del cumplimiento de las medidas que fueran impuestas, pueda fundar; previa valoración de los informes de evolución remitidos por el

⁴⁷ El art. 72 LOGP la considera como el último grado de ejecución de las penas privativas de libertad.

⁴⁸ Cfr. SALAT PAISAL, AFDUC, 19 (2015), 417. Este autor también critica la nueva naturaleza de la libertad condicional en cuanto a lo referente al órgano jurisdiccional competente para conocer sobre su concesión o revocación. Así como en la suspensión el responsable es el juez sentenciador, en el caso de la libertad condicional el órgano competente es el JVP.

⁴⁹ Véase el Informe del Consejo Fiscal al APRCP de 2012, 72.

⁵⁰ Este precepto señala que para la progresión a tercer grado, si el sujeto ha sido condenado por uno o más delitos y, al menos, uno de ellos está castigado por ley con pena de prisión permanente, requerirá “*de un mínimo de veinte años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos, uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de quince años.*”

centro penitenciario y por aquellos profesionales que el tribunal determine, la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social.”

De esta forma, el apartado uno del art. 92 CP dispone que el tribunal deberá acordar la suspensión de la ejecución de la pena de prisión permanente si concurre alguno de los requisitos enumerados, de carácter preceptivo y sin margen de discrecionalidad. Pero no cabe duda de la dificultad de su otorgamiento teniendo en cuenta que el legislador prevé unas condiciones muy estrictas tanto para la clasificación en tercer grado, como para los períodos mínimos de cumplimiento y la obtención de un pronóstico favorable sobre la peligrosidad del reo.

El apartado dos del mismo precepto añade una serie de condiciones específicas para obtener la libertad condicional si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y de delitos de terrorismo recogidos en el Código, incluyéndose en el ámbito subjetivo de esta norma a quienes colaboren o actúan al servicio de estos grupos u organizaciones. Los requisitos, similares a los previstos para la libertad condicional ordinaria del art. 90 CP, son que el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado tales fines y los medios de la actividad terrorista y que hayan colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la organización, identificación, captura y procesamiento de responsables por este tipo de delitos o impedir la actuación y desarrollo de organizaciones con las que haya colaborado.

Y por su parte, el apartado tres del art. 92 CP fija que la suspensión de la ejecución tendrá una duración de cinco a diez años. Cabe destacar que si en este espacio temporal el penado comete un delito la pena de prisión pasará a convertirse en perpetua y no podrá salir más. También se modificó de forma considerable el art. 136 CP, pasando a aumentar el plazo de cancelación de antecedentes para las penas graves de cinco a diez años.

Estos presupuestos del art. 92 CP han recibido críticas por parte de la doctrina desde tres perspectivas diferentes.⁵¹ Por un lado, porque resulta cuanto menos discutible que el Derecho penal deba premiar una conducta moralmente reprobable; por otro, por las posibles represalias que pueda tomar la banda frente al condenado colaborador; y en tercer lugar, porque se beneficiaría al reo que dispone de información, que, no obstante, tras pasar la mitad de la condena en prisión, en la mayoría de los casos resulta

⁵¹ FARALDO CABANA, Nuevos retos, 2004, 239. En el mismo sentido, GONZÁLEZ COLLANTES, ReCrim, 9 (2013), 14 añadió “que es improbable que la información que pueda dar una persona que hace treinta y cinco, o veinte, o quince, o diez años encerrada en prisión pueda resultar trascendente y contribuir a la identificación, captura, procesamiento y condena de otras personas relacionadas con la actividad terrorista y, por lo tanto, a impedir la comisión de delitos nuevos. La exigencia de este requisito, además de que puede dar lugar a acusaciones falsas, en la práctica es un impedimento a la posibilidad de revisión de la condena y liberación de las personas condenadas a la pena indicada.”

irrelevante y simplemente supondría un obstáculo para esa actuación positiva ante el ordenamiento jurídico. Aunque no quede expresamente señalado en el precepto, resulta obvio que la atenuación de la pena por los delitos confesados será mayor cuanto mayor sea el grado de colaboración que preste el sujeto arrepentido, algo que corresponderá valorar y motivar al juez.

Recapitulando, el procedimiento para suspender la ejecución de la condena es el siguiente. Pasados 25 ó 30 años de cumplimiento de la pena, el tribunal sentenciador acordará la suspensión de la misma si concurren el resto de requisitos, y someterá al penado a un régimen de semi-libertad durante un período de entre cinco y diez años, durante los cuáles se le pueden imponer alguna de las reglas de conducta establecidas en el art. 83 del CP referentes a la suspensión de penas privativas de libertad. Si por el contrario, transcurridos estos 25 o 30 años exigibles, el proceso de revisión de la pena finaliza con una decisión negativa, el tribunal sentenciador deberá verificar, como mínimo cada dos años, si el penado satisface o no las exigencias que se disponen en el art. 92 CP para proceder a acordar la suspensión. De igual modo, deberá ir resolviendo las peticiones de suspensión y la consecuente concesión de libertad condicional que realice en ese tiempo, aunque podrá fijar un plazo de hasta un año dentro del cual, tras haber sido rechazada una petición, no se dará curso a nuevas solicitudes.⁵²

2.5 Concurrencia de condenas

El art. 78 bis CP recoge un elenco de normas particulares referidas, tanto al acceso al tercer grado, como al período mínimo de cumplimiento, para aquellos casos en los que el sujeto haya sido condenado por varios delitos y al menos uno de ellos esté castigado con prisión permanente revisable.⁵³

⁵² Cfr. SALAT PAISAL, AFDUC, 19 (2015), 435 y DAUNIS RODRÍGUEZ, RDPC, 10 (2013), 81.

⁵³ Las especialidades del art. 78 bis CP son las siguientes:

"1. Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, la progresión a tercer grado requerirá del cumplimiento:

a) de un mínimo de dieciocho años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos, uno de ellos esté castigado con pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de cinco años.

b) de un mínimo de veinte años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos, uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de quince años.

c) de un mínimo de veintidós años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos y dos o más de ellos estén castigados con una pena de prisión permanente revisable, o bien uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y el resto de penas impuestas sumen un total de veinticinco años o más.

2. En estos casos, la suspensión de la ejecución del resto de la pena requerirá que el penado haya extinguido:

a) Un mínimo de veinticinco años de prisión, en los supuestos a los que se refieren las letras a) y b) del apartado anterior.

b) Un mínimo de treinta años de prisión en el de la letra c) del apartado anterior.

Atendiendo a lo dispuesto en el precepto descrito, el plazo mínimo para acceder al tercer grado penitenciario oscila entre los 18 y 22 años, mientras que en los delitos de terrorismo y delincuencia organizada es de 24 a 32 años. Por otro lado, el período de cumplimiento necesario para optar a la libertad condicional es de 25 a 30 años, y en los casos de delincuencia organizada y delitos de terrorismo de 28 a 35 años. Respecto a los permisos de salida, la jurisprudencia del TC ha entendido en reiteradas ocasiones que están estrechamente conectados con el fin esencial de reinserción social del art. 25 CE, por lo que, ante la falta de regulación expresa, se ha de estar a la regla general del art. 36.1 CP de 8 y 12 años respectivamente.⁵⁴

A tenor de lo dispuesto, ROIG TORRES⁵⁵ concluye que “el legislador español se ha distanciado diametralmente del término que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entiende como razonable para practicar la revisión de la condena, situándolo en 25 años como máximo. E, igualmente, se aparta también de forma cualitativa de los 15 años fijados como plazo único en el Código penal alemán, pese a coincidir en muchos rasgos con su regulación de la cadena perpetua”. De hecho, como recuerda LEGANÉS GÓMEZ⁵⁶, uno de los aspectos más criticados de la prisión permanente revisable es la de no aplicar ningún beneficio penitenciario durante los primeros 20 años mínimo, lo que pone en duda su compatibilidad con el precepto 25.2 CE y llega a provocar un grave deterioro en la personalidad del recluso, como más adelante se detallará.

3. Derecho comparado europeo.

Como se ha visto tanto en la Exposición de Motivos del APRCP como en el Preámbulo de la LO 1/2015, de 30 de marzo, uno de los principales argumentos que el legislador español tuvo en cuenta a la hora de redactar la norma fue el funcionamiento de este modelo en otros países de nuestro entorno europeo. Además, también se alega que para la doctrina del TEDH esta medida es ajustada al art. 3 del Convenio, por lo que conviene distinguir de tal forma entre la cadena perpetua ineludible, contraria a los

3. Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código, o cometidos en el seno de organizaciones criminales, los límites mínimos de cumplimiento para el acceso al tercer grado de clasificación serán de veinticuatro años de prisión, en los supuestos a que se refieren las letras a) y b) del apartado primero, y de treinta y dos años de prisión en el de la letra c) del apartado primero.

En estos casos, la suspensión de la ejecución del resto de la pena requerirá que el penado haya extinguido un mínimo de veintiocho años de prisión, en los supuestos a que se refieren las letras a) y b) del apartado primero, y de treinta y cinco años de prisión en el de la letra b) del apartado primero.”

⁵⁴ Véase STC 115/2003, de 16 de junio, FJ 4.

⁵⁵ ROIG TORRES, La cadena perpetua, 2016, 160-161.

⁵⁶ Cfr. LEGANÉS GÓMEZ, LL Penal, 110 (2014), 26.

derechos consagrados en el CEDH, y la prisión perpetua discrecional, que permite la revisión de la condena con vistas a la excarcelación del condenado si se alcanzan una serie de requisitos.

3.1 Cadena perpetua en la legislación alemana

El Código penal alemán (StGB) prevé en su parágrafo 38 dos formas de penas privativas de libertad. Por un lado, la pena privativa de libertad temporal, con una extensión mínima absoluta de un mes y una máxima de 15 años, y por otro, la pena privativa de libertad a perpetuidad (que de acuerdo a la traducción literal se denominaría “pena privativa de la libertad de por vida”).

Ésta última, tras la abolición de la pena de muerte recogida en el art. 102 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania (*Deutscher Bundestag*), queda como la pena más dura que conoce el Ordenamiento Jurídico alemán. Como recoge SÁNCHEZ ROBERT⁵⁷, la pena privativa de libertad a perpetuidad se establece como pena absoluta y sin ninguna posibilidad de atenuación en los siguientes supuestos: asesinato (§ 211 StGB), en los casos especialmente graves de homicidio deliberado (§ 212 apartado 2), en el caso más grave de genocidio (§ 220a apartado 1 número 1),⁵⁸ y en los robos violentos a un conductor que llegue a causar la muerte de otra persona (§ 316a apartado 1).

Con carácter opcional, se establece la mencionada pena privativa de libertad a perpetuidad junto a una pena de prisión no inferior a diez años para las siguientes conductas delictivas: preparación de un ataque bélico (§ 80), alta traición contra la República Federal (§ 81), secuestro bajo coacción y la toma de rehenes con resultado de muerte (§ 239a apartado 2, § 239b apartado 2), en el robo, hurto predatorio y la coacción predatoria con resultado de muerte (§ 251 § 252 y § 255), envenenamiento con resultado de muerte (§ 229 apartado 2), envenenamiento que genere un peligro público con resultado de muerte (§ 319), en casos graves de provocación de una explosión mediante energía nuclear (§ 310b apartado 3), utilización de rayos ionizantes (§ 311a apartado 3), provocación de inundación con resultado de muerte (§ 312), incendio provocado especialmente grave (§ 307), ataque a una aeronave con resultado de muerte (§ 316c apartado 2). También junto a una pena privativa de libertad no inferior a cinco años se puede imponer la pena de prisión a perpetuidad en casos especialmente graves de traición a la patria (§ 94 apartado 2), de relaciones que pongan en peligro la paz (§ 100 apartado 2), de revelación ilegal de secretos (§ 97a).

⁵⁷ SÁNCHEZ ROBERT, AdD, 1 (2016), 8-10.

⁵⁸ En los restantes casos de genocidio (§ 220a apartado 1 número 2 a 5) considerados “menos graves”, se prevé la pena privativa de la libertad no inferior a cinco años. (§ 220a apartado 2).

Entre otras reglas de carácter general recogidas en el StGB, destaca que cabe imponer al inductor la pena privativa de libertad a perpetuidad (§ 26) así como en los supuestos de tentativa o imputabilidad atenuada en los delitos citados, aunque en estos casos la pena podría reducirse en un arco punitivo que va desde los tres hasta los quince años de condena.⁵⁹ Por el contrario, se excluye esta pena en los supuestos de complicidad (§ 27 apartado 2 párrafo 2), en la participación no cualificada y en la tentativa en la participación (§ 30). Por otra parte, en cuanto al plazo de prescripción de estos delitos se prevé en el § 78, apartado 2, que los crímenes del § 220a (genocidio) y del § 211 (homicidio) no prescribirán.

La primera diferencia que se puede apreciar entre la legislación española y la alemana es en el concepto de asesinato.⁶⁰ La definición alemana resulta mucho más amplia y recoge más circunstancias que nuestro ordenamiento que permiten diferenciarlo del homicidio, como son, el placer de matar, la codicia, la crueldad, o de otra manera por motivos bajos, la utilización de medios que constituyen un peligro público, matar para facilitar otro hecho o encubrirlo, por la satisfacción del instinto sexual (§ 211 StGB).

Especialmente trascendente es el párrafo 57 a) StGB, donde viene regulado la suspensión del resto de pena en la cadena perpetua. Destaca que se prevé la posibilidad de suspender la condena y dejar al reo en libertad condicional una vez que se hayan cumplido 15 años de la pena, junto a una posible obligación que acuerda el mismo Tribunal que exige al condenado tener que reparar los daños causados a la víctima o a una institución pública sin ánimo de lucro, según los hechos cometidos (§ 56 b) StGB).

El segundo requisito que establece el mismo párrafo del texto penal para alcanzar la suspensión es “*que la especial gravedad de la culpabilidad del condenado no haga necesario el resto del cumplimiento*”, lo que supone que el juzgador debe cuantificar en cada caso el tiempo proporcionado a la culpabilidad, cuando rebase el período mínimo establecido de 15 años. El TC Alemán (*Bundersverfassungsgericht*) ha declarado al respecto que, aunque la culpabilidad debe fijarse en la sentencia condenatoria, este aspecto debe ser valorado por el tribunal de ejecución para mantener o no la privación de libertad una vez cumplidos los quince años. Como señala ROIG

⁵⁹ El párrafo 49 apartado 1 del StGB cita textualmente que “*Si se prescribe una atenuación conforme a este precepto o se autoriza, entonces para la atenuación rige lo siguiente :*

1. En lugar de pena privativa de la libertad perpetua entra se aplica una pena privativa de la libertad no menor de tres años.”

⁶⁰ El art. 139.1 CP: “*1. Será castigado con la pena de prisión de quince a veinticinco años, como reo de asesinato, el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:*

1.º Con alevosía.

2.º Por precio, recompensa o promesa.

3.º Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido.

4.º Para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra.”

TORRES⁶¹, para determinar la “especial gravedad de la culpabilidad”, se atiende tanto al hecho delictivo, como a la personalidad del infractor, aumentando, por ejemplo, con la existencia de varias víctimas en un solo delito, por la brutalidad empleada o la intensidad del sufrimiento del agraviado.

La tercera condición que recoge el § 57 StGB para suspender el resto de la pena es que “se pueda justificar teniendo en cuenta los intereses de la seguridad del público en general”. Supone una evaluación de la peligrosidad del condenado en aras de su resocialización, como marca la jurisprudencia del TEDH. Y en último lugar, se precisa que el condenado “dé su consentimiento a salir en libertad condicional”. Parte de la doctrina entiende que la cárcel, en supuestos de condenas extremadamente largas, tiene un efecto tan devastador para el reo que no se ve capaz de salir en libertad y adaptarse a la vida social y que provoca incluso la reproducción de actitudes criminales (el fenómeno conocido como la “prisionización”).⁶²

De esta forma, si concurren todos los presupuestos anteriores el tribunal acordará la suspensión de la pena y somete al condenado a supervisión durante un período de cinco años, y en caso de no admitirse, podrá fijar un plazo máximo de dos años durante el cual no admitirá una nueva solicitud de libertad del penado.

El TC Alemán abordó por primera vez el tema de la cadena perpetua en la controvertida Sentencia de 21 de junio de 1977,⁶³ donde se intenta compatibilizar esta pena con el párrafo 1 de la Ley Fundamental, en relación a un delito de asesinato del § 211 StGB. Este órgano admite la prisión perpetua bajo dos condiciones: si se establece una revisión a partir de los 15 años de cumplimiento efectivo; y si el condenado tiene alguna posibilidad real de acceder a la libertad condicional y a la resocialización (sin que baste para ello la vía del indulto). A juicio del Tribunal, sólo así se asegura que esta medida no atente contra la dignidad que la Ley Fundamental declara inviolable. Sin embargo no resultará lesionada en escasos supuestos de cumplimiento íntegro de la condena cuando el pronóstico de integración social del penado sea desfavorable y la seguridad pública así lo exija (§ 180 Ley Fundamental).

En relación con los fines de la pena, el tribunal alemán rechaza la aplicación de la cadena perpetua por motivos exclusivamente de prevención especial, debido a la baja tasa de reincidencia en delincuentes condenados por delitos muy graves (§ 220). Además argumenta que esta medida no es contraria al fin de reinserción social, en tanto que se revisa periódicamente la condena y la permanencia del reo en prisión depende de su peligrosidad concreta. Y por último, que la pena cumple un fin expiatorio que resulta

⁶¹ ROIG TORRES, La cadena perpetua, 2016, 40.

⁶² En este sentido, véase ZAFFARONI, Filosofía del sistema, 1997, 181-183.

⁶³ BVerfGE 45, 187, 253 ss.

proporcional a los delitos graves cometidos como el asesinato, respondiendo a la pretensión de justicia que reclama la sociedad (§ 223). Es decir, se legitima la “teoría mixta” dominante, basada en los objetivos de prevención especial positiva (resocialización) y general negativa (reforzamiento de la consciencia sobre el Derecho), así como a favor del planteamiento de la compensación de culpas.⁶⁴

Atendiendo a estos presupuestos, cabe concluir diciendo que la cadena perpetua en la legislación germana solo será acorde al § 1 de la Ley Fundamental y a la dignidad humana, si mantiene el derecho del penado a la resocialización y se le garantiza una expectativa seria y realizable de salir de prisión. Partiendo de la idea de que la contemplación del indulto no es suficiente para garantizar la constitucionalidad de la pena, la jurisprudencia alemana insiste en la necesidad de un régimen de suspensión de la condena que favorezca la reinserción del delincuente para compatibilizarla con la Ley Fundamental.

De este modo, con esta revisión a los 15 años (mucho más temprana que en España) y con la posibilidad de salir en libertad, JAÉN VALLEJO⁶⁵ señala que en Alemania “se salva el obstáculo de una posible inconstitucionalidad de esta pena desde la perspectiva de la dignidad humana y del mandato constitucional dirigido al legislador penal y penitenciario consistente en la orientación de penas y de las medidas de seguridad hacia la reeducación y reinserción social de los condenados”

3.2 Cadena perpetua en la legislación británica

Queda constancia de la aplicación de la cadena perpetua (*life imprisonment*) en el Reino Unido, al menos, desde 1861, aunque su imposición era discrecional para el órgano judicial de la época. Sin embargo, fue en 1965 tras la abolición de la pena de muerte cuando se estableció para los delitos de asesinato.⁶⁶ Actualmente Inglaterra y Gales tienen una ratio de prisioneros de las más elevadas de Europa, y el 18% de los internos están cumpliendo condena de cadena perpetua. Este aumento de condenados no corresponde al incremento de la delincuencia, sino a cuestiones de política-criminal, ya que en Reino Unido, sobre todo después del atentado del 7 de julio de 2005, está presente la idea de que los prisioneros tienen menos derechos y libertades que los ciudadanos (*less eligibility*).⁶⁷

⁶⁴ Cfr. SÁNCHEZ ROBERT, AdD, 1 (2016), 45-46.

⁶⁵ JAÉN VALLEJO, El Cronista, 35, 2013, 49.

⁶⁶ A partir de la citada reforma de 1965 se fue ampliando el elenco de delitos sancionados por esta pena, bien de manera obligatoria o con carácter facultativo, sobre todo, en los delitos violentos y sexuales del Derecho británico.

⁶⁷ En este sentido, véase ROIG TORRES, La cadena perpetua, 2016, 65-66.

La regulación básica del sistema de penas se encuentra recogida en la *Criminal Justice Act* 2003 (CJA), que ha sido reformada en los últimos años por dos leyes, en especial la *Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act* 2012 (LASPO), que ha reducido a tres las modalidades de cadena perpetua:

- Cadena perpetua obligatoria impuesta por la ley (*Mandatory life sentence*)

Actualmente, y desde la abolición de la pena de muerte en 1965, el único delito sancionado con esta pena con carácter imperativo es el asesinato.⁶⁸ Para fijar el tiempo que el condenado debe permanecer en prisión antes de valorar su libertad anticipada, el órgano sentenciador debe tener en cuenta, principalmente, los siguientes factores: la gravedad del delito cometido o su combinación con otro u otros conexos, la edad del infractor y la normativa sobre prisión preventiva (se hace una remisión al art. 269 y al Anexo 21 de CJA 2003, reformada por la LASPO 2012). De este modo, la ley prevé unos plazos expresamente tasados para precisar finalmente el período mínimo de cumplimiento: reclusión perpetua, plazo de 30 años, 25 años ó 12 años⁶⁹.

a) El cumplimiento íntegro se reserva para casos en los que el delincuente tuviera al menos 21 años al realizar el hecho, y el delito sea especialmente grave y concurren ciertos presupuestos:

1º: asesinato de dos o más personas si conlleva alguna de estas circunstancias: a) alto grado de premeditación; b) secuestro de la víctima; c) conducta sexual o sádica.

2º: asesinato de un niño, si implica secuestro o motivación sexual o sádica.

3º: asesinato cometido con el objetivo de conseguir un fin político, racial, religioso o ideológico.

4º: asesinato cometido por una persona ya condenada por asesinato previo.

b) El plazo mínimo de 30 años rige para los casos anteriores cuando el infractor es menor de 21 años y cuando el tribunal considere que el delito sea particularmente grave, abarcando los siguientes:

⁶⁸ *Abolition of the Death Penalty Act* 1965:

“(1) Ninguna persona sufrirá la muerte por asesinato, y toda persona condenada por asesinato... será sentenciada a cadena perpetua. (2) Al sentenciar a una persona condenada por asesinato a cadena perpetua el tribunal podría imponer al mismo tiempo declarar el tiempo que recomienda al Secretario de Estado como período mínimo que en su opinión debería transcurrir antes de que el Secretario de Estado ordene la libertad de esa persona bajo supervisión de acuerdo con el artículo 27 de la *Prison Act* 1952 o el artículo 21 de la *Prisons (Scotland) Act* 1952.”

⁶⁹ Una vez que se haya elegido uno de estos plazos, el tribunal deberá entrar a valorar las circunstancias agravantes o atenuantes del caso (apartados 10 y 11 del Anexo 21 de CJA 2003), lo que puede suponer un período mínimo de cualquier duración o la emisión de una orden de cumplimiento perpetuo.

1º: asesinato de un policía u oficial de prisión de servicio.

2º: asesinato que implica el uso de un arma de fuego o de explosivos.

3º: asesinato cometido con el fin de conseguir un beneficio económico.

4º: asesinato destinado a interferir en la acción de la justicia.

5º: asesinato que implica una conducta sexual o sádica.

6º: asesinato de dos o más personas.

7º: asesinato agravado por motivo racial, religioso, orientación sexual o discapacidad.

c) El plazo mínimo de 25 años se reserva para los delitos enumerados en los dos apartados anteriores, cuando el infractor tuviese al menos 18 años en el momento de realizar el hecho delictivo, si el juzgador no lo considera suficientemente grave como para decretar la prisión de por vida o por el tiempo de 30 años.⁷⁰

d) El plazo inicial de 12 años se contempla como punto de partida al determinar el período mínimo de cumplimiento en los casos en los que el delincuente era mayor de 18 años y el hecho no está incluido en las disposiciones anteriores, y en todo caso, si era menor de edad cuando cometió el delito.⁷¹

Por su parte, el art. 269 (2) de la CJA 2003 establece que, salvo los casos de cumplimiento íntegro de la condena, cuando el reo cumpla la parte obligatoria de la pena y se ordene su puesta en libertad condicional, el Secretario de Estado⁷² deberá excarcelarlo bajo supervisión. Siempre y cuando el equipo encargado de otorgar este privilegio considere que su liberación no supondrá ningún riesgo para la sociedad y que el penado es inofensivo.

Sin embargo, la polémica surge con la carencia de la obligación de revisión en los supuestos más graves, cuando la sentencia decreta la cadena perpetua obligatoria por asesinato y el internamiento de por vida. La CJA 2003 estableció en su art. 269 el deber por parte del tribunal de fijar en la sentencia el período mínimo de cumplimiento o la prisión de por vida, pero omitió la necesidad de revisar la condena una vez transcurrido un tiempo determinado de la misma. A pesar de esto, se mantiene vigente lo establecido

⁷⁰ Anexo 21, apartado 5 A de CJA 2003.

⁷¹ Anexo 21, apartado 6 y 7 de CJA 2003.

⁷² La figura del “Secretario de Estado” equivaldría en nuestro país al Ministro correspondiente, desde el 2007 el del Justicia. El Secretario de Estado británico carece de competencia para prolongar la estancia del penado en prisión, pero una vez liberado puede ordenar su reingreso.

en el art. 30 de la *Crime (Sentence) Act* 1997, donde se atribuye al Secretario de Estado la potestad de liberar al reo por razones excepcionales humanitarias.⁷³

- Cadena perpetua por la comisión de segundos delitos tasados (*Life sentence for second listed minimum*)

Esta modalidad fue creada por el art. 122 de la LASPO 2012 y se incorporó a un nuevo apartado en el art. 224 de la CJA 2003. Se trata de una cadena perpetua para ciertos delitos tasados siempre que concurren los siguientes requisitos:

“1º. Una persona mayor de 18 años es condenada por un delito citado en la Parte 1 del Anexo 15 B de la *Criminal Justice Act* 2003.

2º. El delito es tal que el tribunal podría imponer una pena determinada de 10 años o más, y,

3º. El delincuente tiene una condena anterior por un delito de los señalados en el Anexo 15 B (no sólo de la parte 1), por la que se le impuso una cadena perpetua (sin libertad anticipada antes de 5 años) o una pena determinada de 10 años o más.”

En principio, si se cumplen estos presupuestos el órgano judicial debe aplicar esta pena, salvo si entiende que el caso presenta circunstancias particulares que harían injusta su aplicación. La jurisprudencia británica en los últimos años ha venido interpretando este concepto de “*particular circumstances*” de manera amplia, entendiendo que la cadena perpetua deberá reservarse para los delitos más graves que atraigan la mayor aversión pública.

- Cadena perpetua para la protección pública por delitos graves (*Imprisonment for public protection for serious offences*)

Esta pena viene recogida en el art. 225 CJA 2003, aunque en la actualidad tiene un carácter puramente residual. Se prevé para los delitos graves cometidos por mayores de 18 años, cuando el tribunal estima que hay un riesgo relevante para el público de sufrir un daño grave por la comisión por parte del condenado de otros delitos tasados. Su aplicación se restringe notablemente en la práctica, puesto que se suprime para las conductas tipificadas en el Anexo 15 de la misma ley.

Esta pena ha sido objeto de debate por la doctrina británica en atención al riesgo de reiteración delictiva. En el caso *R v. Offen* (2001)⁷⁴, el tribunal de apelación

⁷³ Esta norma viene complementada por el Capítulo 12 de *Prison Service Order* 4700 del año 2010, donde especifica los criterios orientativos para excarcelar por motivos humanitarios: enfermedad terminal con alta probabilidad de muerte temprana, incapacidad total, paraplejia o derrame cerebral, que el riesgo de reincidencia sea mínimo, que exista medios y tratamientos adecuados para su cuidado fuera de la cárcel y que su liberación temprana pueda mejorar la situación del interno o de su familia, entre otros.

determinó que esta medida solo podría aplicarse cuando el condenado fuese efectivamente peligroso. Este concepto se ha de evaluar de manera individualizada para cada caso en concreto, y corresponde al juzgador la valoración del riesgo de comisión de otros delitos. Además, la jurisprudencia insistía en que estas condenas debían basarse en que el acusado representaba un peligro futuro y en la protección de la ciudadanía, no como instrumento de castigo por un delito pasado. El TEDH entendió que esto era compatible con los preceptos 3 y 5 del CEDH, alegando que las penas privativas de libertad debían ser proporcionales a la gravedad del delito, y que en estos casos, primaba la seguridad de los ciudadanos.⁷⁵

Una vez analizadas las tres variantes de cadena perpetua que presenta la legislación británica, se va a concluir con el aspecto más problemático y debatido de esta pena: la libertad anticipada.

Tradicionalmente, correspondía al poder ejecutivo decidir si se debía excarcelar al preso y en qué momento concreto. Tras la *Abolition of the Death Penalty Act 1965*, el tribunal era el encargado de indicar en la sentencia el tiempo mínimo que consideraba que debía permanecer el recluso en prisión, antes de que el Secretario de Estado, quien tiene plena libertad para modificar o ampliar el plazo recomendado, así como para vetar la salida anticipada, le concediese la libertad anticipada. Por tanto, se consideraba que la pena de cadena perpetua se dividía en dos partes, una orientada al castigo y otra a proteger a la sociedad, ambas potestad del Gobierno.

Sin embargo, la jurisprudencia del TEDH ha manifestado varias discrepancias con la cadena perpetua del Derecho británico. En primer lugar, porque según viene recogido en los apartados 1 y 4 del art. 5 del CEDH, la concreción del tiempo mínimo de cumplimiento efectivo y la posterior revisión de la condena en vistas a su excarcelación le corresponde en todo caso a un órgano judicial. El Tribunal admite que la cadena perpetua se imponga por razones de seguridad jurídica y prevención, pero es necesario que la legislación nacional detalle el procedimiento y los fines de las distintas etapas de cumplimiento, incluyendo la solicitud de la revisión de la condena ante un órgano judicial, que será el competente para acordar la excarcelación o el reingreso del penado.

En segundo lugar, porque mientras el poder ejecutivo se encargaba de fijar de manera discrecional el período mínimo de cumplimiento, el condenado carecía de todo derecho de información sobre ese tiempo. Desconocía tanto el tiempo de condena que recomendaba el juez como el procedimiento que había seguido el Secretario de Estado para fundamentar su decisión. Tras diferentes resoluciones, en la CJA 2003 se establece

⁷⁴ *R. v Offen* [2001] WLR 253.

⁷⁵ Cfr. ROIG TORRES, La cadena perpetua, 2016, 84-85.

la obligación de concretar en la sentencia el período mínimo de cumplimiento así como que se requiere el conocimiento por parte del penado del momento exacto en el que se producirá la revisión de la condena, a excepción de los casos de cadena perpetua de por vida.

Y por último, porque en las últimas décadas el ideal resocializador de las penas en el Reino Unido ha ido perdiendo fuerza, frente a otros más pragmáticos como el de la seguridad y el de reducir el riesgo de reincidencia. Como señala ROIG TORRES⁷⁶, parte de la doctrina fundamenta la prisión en su efecto preventivo sobre los ciudadanos, atribuyéndole un “valor simbólico” que cause un fuerte impacto social en la sociedad y mantenga la creencia de la misma en el poder del Estado frente a los delincuentes. Sin embargo, y atendiendo a la legislación europea,⁷⁷ el fin resocializador se mantiene como el principal objetivo de la pena de prisión y así lo entendió el TEDH en el caso *Dickson v. United Kingdom* de 4 de diciembre de 2007, matizando el concepto de *rehabilitación* señalando que “aunque ha sido reconocida con el significado de evitar la reincidencia, de forma más reciente y positiva, expresa mejor la idea de re-socialización a través de fomentar la responsabilidad individual”.

3.3 Cadena perpetua en la legislación italiana

Tras numerosas reformas en el CP italiano del año 1930,⁷⁸ se sustituyó la pena de muerte por la prisión permanente, denominada “*ergastolo*”.⁷⁹ Cabe señalar que en Italia la cadena perpetua se cumple en un centro penitenciario exclusivamente preparado para todos los condenados a la pena de reclusión a perpetuidad, en consonancia con el art. 22 del CP.

En la Derecho italiano se prevé la cadena perpetua para una serie de supuestos que anteriormente quedaban penados con la muerte. Principalmente, destaca el asesinato y los delitos de homicidio con alguna agravante como la premeditación, parentesco, o como medio para escapar de la prisión o detención, como viene recogido en el art. 576 CP italiano. Además se incluyen otros de menor transcendencia o aplicación en la actualidad como atacar la integridad, independencia o la unidad del

⁷⁶ ROIG TORRES, La cadena perpetua, 2016, 94-95.

⁷⁷ Destaca, entre otras, la *Recommendation Rec (2006) of the Comité of Ministers to Member States on the European Prison Rules*, cuya regla 6 establece que “*toda detención estará dirigida a facilitar la reintegración en la sociedad libre de la persona que haya sido privada de libertad*” mientras que la regla 102 dispone que el régimen penitenciario de los condenados deberá estar destinado “*para permitirles llevar una vida responsable y libre de delitos*”.

⁷⁸ Art. 10 CP italiano, Real Decreto de 19 de octubre de 1930. La pena de muerte en Italia fue abolida en 1948 por la Constitución, exceptuando en tiempos de guerra, siendo finalmente suprimida del CP militar en 1994.

⁷⁹ Esta denominación proviene del término “*ergástulo*”, que hacía referencia al campo de trabajo en el que se encerraban a los esclavos sujetos a condena.

Estado (art. 241), rebelarse contra el Estado (art. 242), colaborar con el extranjero con el fin de provocar la guerra contra el Estado italiano (art. 243), actuaciones hostiles hacia otros Estados extranjeros poniendo en peligro la paz de la nación (art. 244) o algunos delitos contra la salud pública (art. 452).

Quizás la cuestión más relevante a la hora de seguir analizando esta pena es el acceso a la libertad condicional, que viene recogido en el art. 176 del CP italiano. Como regla general, todo condenado a pena de prisión debe mostrar signos inequívocos de arrepentimiento durante la ejecución de la sentencia, así como satisfacer las obligaciones civiles derivadas del delito cuando sea posible. Además, en los casos de cumplimiento de cadena perpetua el sujeto podrá ser admitido a la libertad condicional una vez que haya transcurrido al menos 26 años de prisión, aunque en ningún caso la privación de libertad podrá prolongarse más allá de los 30 años. Esta situación puede suavizarse en casos excepcionales donde el reo se muestre dispuesto a colaborar con la justicia, sobre todo en caso de delitos relacionados con la Mafia. También es importante resaltar el art. 177, que regula la revocación de la libertad condicional, aunque la jurisprudencia del TC italiano ha declarado inconstitucional parte del precepto ya que no prevé que a quien se le revoque una vez la libertad condicional pueda posteriormente acceder a ella si cumple con los requisitos anteriormente descritos.⁸⁰

Según datos del 31 de diciembre de 2014, de los 34.033 presos que abarrotan las cárceles italianas, 1.584 de ellos cumplen cadena perpetua, número cuatro veces mayor que hace 25 años. Entre ellos, se encuentran asesinos, personas que han pertenecido a organizaciones terroristas como “*Prima Linea*” y criminales de varias ramas de la Mafia, de los que aproximadamente unos 200 ya han pasado más de 20 años en la cárcel. Se puede observar en los últimos tiempos un crecimiento de la inseguridad y alarma social en la ciudadanía, sobre todo por el temor hacia los extracomunitarios y la “delincuencia callejera”, lo que deriva en una legislación fuertemente dirigida a la prevención general.

Se puede concluir diciendo que, por lo general, la sociedad italiana no rechaza la cadena perpetua puesto que rige la creencia de que “tarde o temprano todos acaban saliendo”.⁸¹ Incluso algunas voces autorizadas apoyan esta postura, como el Fiscal de Palermo, Víctor Teresi, quien dijo que “ya no existe la cadena perpetua, o mejor dicho, no se aplica”.⁸² No obstante, el TC italiano ha declarado en diversas ocasiones que la cadena perpetua es constitucionalmente legítima, precisamente porque no se lleva a

⁸⁰ Véase STC italiano, número 161, de 4 de junio de 1997.

⁸¹ Cabe destacar que en el año 1981 el Partido Radical consiguió someter a referéndum la derogación de la cadena perpetua, que fue rechazada por el 77,4% de los italianos que apoyaban su continuidad en la legislación penal.

⁸² Víctor TERESI, publicado en *Il Fatto Quotidiano*, 10-08-2013, 7.

cabo en la realidad, lo que quiere decir que tanto si se aplica la cadena perpetua como si se imponen condenas excesivamente largas, sería ilegítimo al violar los principios constitucionales de la pena: su finalidad rehabilitadora y la prohibición de un trato denigrante o contrario a la dignidad humana.

3.4 Cadena perpetua en la legislación francesa

Desde 1994, en el Derecho francés también se prevé la cadena perpetua, denominada “reclusión a perpetuidad”, cuyo fin debe compatibilizar el castigo al condenado, la protección de la ciudadanía y la reintegración del reo en la sociedad. Está recogida en el art. 131-1 del CP francés para infracciones muy graves. A diferencia de lo que ocurre en otros países como Italia, no es una pena que se aplique excesivamente en Francia, ya que a fecha de 1 de enero de 2013, de los 60.344 presos existentes, sólo 483 estaban condenados a cadena perpetua, siendo el tiempo medio de cumplimiento de 23 años.⁸³

Se establecen una serie de supuestos en los que se impondrá la pena de cadena perpetua en los diferentes apartados del art. 221 del CP francés, Título II, Capítulo I, Sección primera, que engloba los atentados voluntarios contra la vida. Entre otros, el homicidio que preceda, acompañe o siga a otro crimen, y el que tenga por objeto facilitar un delito o bien, favorecer la huida o asegurar la impunidad del autor o cómplice de un delito (art. 221-2 CP francés). Por su parte, el asesinato será castigado con reclusión a la perpetuidad, entendido como tal cualquier homicidio cometido con premeditación (art. 221-3). También se prevé esta pena en el art. 221-4 del CP francés para delitos de homicidio cuando presenten una serie de peculiaridades que los hacen ser considerados más graves y repulsivos para la sociedad, como cuando se cometa contra un menor de quince años o personas espacialmente vulnerables.⁸⁴

⁸³ Como dato, señalar que de las 1.006 condenas a prisión que hubo en Francia a lo largo del año 2012, únicamente 16 lo fueron a perpetuidad.

⁸⁴ El artículo 221-4 regula que:

“El homicidio será castigado con reclusión criminal perpetua cuando se cometa:

1º Contra un menor de quince años;

2º Contra un ascendiente legítimo o natural o contra el padre o madre adoptivos;

3º Contra una persona cuya especial vulnerabilidad, debido a su edad, enfermedad invalidez, deficiencia física o psíquica o a su estado de gestación, sea aparente o conocida por su autor;

4º Contra un magistrado, jurado, abogado, agente público o ministerial, militar de la gendarmería nacional, funcionario de la policía nacional, de aduanas, de la administración penitenciaria o cualquier otra persona depositaria de la autoridad pública, un bombero profesional o voluntario, un vigilante jurado de inmuebles o de un grupo de inmuebles o un agente que ejerza por cuenta de un arrendador las funciones de guardia o vigilancia de inmuebles destinados a habitación en aplicación del artículo L. 127-1 del código de la construcción y de la habitación, en el ejercicio o por causa de sus funciones, cuando la calidad de la víctima sea aparente o conocida por el autor;

4º bis Contra el cónyuge, los ascendientes y descendientes en línea directa de las personas mencionadas en el nº 4º o contra cualquier otra persona que viva habitualmente en su domicilio, en razón de las funciones ejercidas por esas personas;

A estos artículos descritos le son aplicables el período de seguridad recogido en el precepto 132-23, donde se establece que el condenado no podrá beneficiarse de la suspensión o fraccionamiento de la pena, ni de los permisos de salida, régimen abierto y libertad condicional durante el mismo, que en el caso de las penas de cadena perpetua, este período es de 18 años. No obstante, “*la Cour d'assises o el tribunal podrán, por resolución especial, o bien elevar dicha duración hasta las dos terceras partes de la pena, o si se tratara de una condena a reclusión criminal a perpetuidad, hasta veintidós años, o bien decidir su reducción.*”⁸⁵ De este modo, se observa una tendencia a la individualización de las penas y a la reinserción de los condenados, ya que permite al Tribunal reducir las condenas teniendo en cuenta la evolución psicológica y personal del reo.

De tal manera, para la prisión perpetua en Francia se establece una revisión tras 18 ó 22 años (en supuestos de reincidencia), tras el que se lleva a cabo “una revisión estricta pues ha de pasar por varias fases, como la de un período de observación de hasta un año, siendo sometido el condenado a exámenes, entrevistas, etc., un régimen de semilibertad (como un tercer grado) hasta dos años, y una libertad vigilada hasta un máximo de cinco años”,⁸⁶ por lo que en la práctica tampoco resulta sencillo alcanzar la libertad condicional. Al régimen general existen excepciones como la reducción de pena de cinco años en caso de colaborar con la justicia, así como la posibilidad de suspensión de la ejecución de la condena en caso de enfermedad grave (art. 720-1-1 CP). Además, el art. 720-4 del CP francés resalta que la perpetuidad efectiva se puede sustituir por penas de 30 años en casos de que por problemas psicológicos del condenado impidan o se ponga en riesgo la convivencia en prisión con otros reos.⁸⁷

Como conclusión, cabe citar un informe de la Asamblea Nacional del año 2000, que también se hizo referencia en la famosa STEDH de 11 de abril de 2006 *Leger c. Francia*⁸⁸, que declaraba: “Privar a alguien de su libertad de por vida es hacerlo morir

4º *ter* Contra un agente de un explotador de una red de transporte público de viajeros o cualquier otra persona encargada de una misión de servicio público, así como contra un profesional de la sanidad en el ejercicio de sus funciones, cuando la calidad de la víctima sea aparente o conocida por el autor;

5º *Contra un testigo, una víctima o una parte civil, bien para impedirle denunciar los hechos, presentar una querrela o prestar declaración, o bien por motivo de su denuncia, de su querrela o de su declaración;*

6º *En razón de la pertenencia o de la no pertenencia, cierta o supuesta, de la víctima a una determinada etnia, nación, raza o religión;*

7º *En razón de la orientación sexual de la víctima;*

8º *Por varias personas que actúen en banda organizada.”*

⁸⁵ Art. 132-23, párrafo segundo, del CP francés.

⁸⁶ JAÉN VALLEJO, El Cronista, 35, 2013, 49.

⁸⁷ En este sentido, cfr. RÍOS MARTÍN, Prisión perpetua en España, 2013, 60.

⁸⁸ LUCIEN LEGER fue liberado en 2005 tras pasar 41 años en prisión, en lo que se considera el caso más longevo en el sistema penitenciario francés.

lentamente; la oposición a la pena de muerte implica que la sociedad considere la reintegración de los que parecen definitivamente excluidos de la sociedad por la atrocidad o la repetición de sus crímenes. Sería hipócrita abolir la pena de muerte sin cambiar las condiciones de detención, sin considerar la reintegración social y sin aceptar los riesgos sociales involucrados en la reintegración”.

Capítulo III

1. Argumentos a favor de la prisión permanente revisable

1.1 Sensación general de impunidad y desconfianza en la Administración de Justicia

Este argumento sociológico de que la mayoría de la población tiene la sensación general de impunidad frente a los delincuentes se pone de manifiesto en el párrafo segundo del apartado I del Preámbulo de la mencionada Ley 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modificó el CP de 1995, que recoge lo siguiente:

“La necesidad de fortalecer la confianza en la Administración de Justicia hace preciso poner a su disposición un sistema legal que garantice resoluciones judiciales previsibles que, además, sean percibidas en la sociedad como justas. Con esta finalidad, siguiendo el modelo de otros países de nuestro entorno europeo, se introduce la prisión permanente revisable para aquellos delitos de extrema gravedad, en los que los ciudadanos demandaban una pena proporcional al hecho cometido. [...]”.

A colación de esto, cabe recordar la famosa y polémica “Doctrina Parot”, derogada definitivamente por la STEDH de 21 octubre de 2013. En este caso, también desde los propios partidos políticos y medios de comunicación, se alertó a la sociedad de que la mayoría de presos, en su mayoría pertenecientes a la banda terrorista ETA, salían de las cárceles bastante antes de cumplir la totalidad de la condena impuesta. Sin embargo, es importante aclarar que el texto legal aplicable a estos sujetos era el antiguo CP de 1973, que establecía en su art. 100 la redención de penas por trabajo, que según los casos, podría reducir el tiempo en prisión hasta un tercio de la condena.⁸⁹

Pero desde el CP de 1995, la situación al respecto ha cambiado. Se suprimió la redención de penas por trabajo, por lo que hoy en día, para todos los delincuentes cuyo hecho delictivo se produjo con posterioridad a esa fecha, la diferencia entre la pena impuesta y la pena a cumplir es ínfima, por lo que la creencia común de que en España los presos salen de la cárcel mucho antes del tiempo establecido por sentencia no es del todo cierto.⁹⁰

⁸⁹ El art. 100 del CP 1973 recogía que “Podrán redimir su pena por el trabajo, desde que sea firme la sentencia respectiva, los reclusos condenados a penas de reclusión, presidio y prisión. Al recluso trabajador se abonará, para el cumplimiento de la pena impuesta, un día por cada dos de trabajo, y el tiempo así redimido se le contará también para la concesión de la libertad condicional”.

⁹⁰ Como se ha comentado, para los delincuentes que bajo la vigencia del CP de 1973 llevaron a cabo una conducta tipificada como delito, rige el principio constitucional de irretroactividad de las normas desfavorables de los arts. 25.1 y 9.3 de nuestra Carta Magna.

Conviene recordar al respecto las palabras de QUERALT JIMÉNEZ⁹¹ hace un tiempo en referencia al CP vigente, manifestando que “treinta años son ahora treinta años, y sólo se puede acceder a la semilibertad si la Junta de Tratamiento –órgano administrativo al que es totalmente ajeno el juez– efectúa un pronóstico favorable de una vida futura al margen del delito”. Es decir, en la actualidad, todas las penas que se inician se cumplen íntegramente. Como dato corroborativo, en 2013 sólo el 17% de los presos se encontraba clasificado en tercer grado, tras haber pasado una gran parte de la condena correspondiente encerrados, en vistas al objetivo resocializador establecido en la CE.

Como se expuso al principio del presente estudio, en ocasiones los medios de comunicación crean artificialmente lo que doctrinalmente se conoce por “estructura discursiva de las emergencias” o comúnmente denominada “olas de criminalidad,” que no son más que informaciones reiteradas sobre delitos especialmente graves y sensibles para la sociedad (asesinatos y delitos sexuales y violentos en su mayoría). Esto provoca en la ciudadanía la creencia injustificada y no acorde a los índices estadísticos de un aumento de la criminalidad, lo que deriva en peticiones de una respuesta penal más dura y restrictiva para aquellos delincuentes.⁹²

RÍOS MARTÍN⁹³ añade que otro de los motivos que subyace en la sensación de ineficacia por parte de la Administración de justicia es la convención por parte de la ciudadanía de que el sistema español es “blando”.⁹⁴ Sin embargo, y atendiendo a los datos aportados por la Dirección General de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en los últimos años el número de detenciones con ingreso en calabozo es elevadísimo, a pesar de que en términos generales la delincuencia en España está descendiendo desde hace más de dos décadas.⁹⁵ Teniendo en cuenta que nuestro país presenta una tasa de criminalidad significativamente menor que la media de los países europeos, parece que estas reformas que endurecen las penas no obedecen a una subida del número de delitos, sino a razones de política criminal.⁹⁶ El penalista también hace referencia a la creencia

⁹¹ QUERALT JIMÉNEZ, ¿Redoblar las penas?, 2000, 24.

⁹² Cfr. CUERDA RIEZU, Penas muy largas, 2011, 35. Este autor entre otros, afirmaba que no existe ninguna relación entre la cadena perpetua (ni pena de muerte en su momento) con la seguridad.

⁹³ RÍOS MARTÍN, La prisión perpetua, 2013, 63-64.

⁹⁴ No son pocos los autores que critican la supuesta “blandura” de nuestro sistema penal, como DOPICO GÓMEZ-ALLER, endurecer las penas, La Vanguardia, 16-04-2009, y recuerdan que España encabeza el ranking de dureza penitenciaria de Europa Occidental con 161 presos por cada 100.000 habitantes, y se pregunta si los poderes públicos desconocen que ya están previstas penas extremadamente largas (hasta 40 años para casos especialmente graves de asesinatos agravados o terroristas, sin práctica posibilidad de acortamiento de la pena).

⁹⁵ En las últimas tres décadas la población penitenciaria se ha incrementado en un 400%, frente a un crecimiento del 20% de la población total.

⁹⁶ Siguiendo esta línea doctrinal encontramos a LARRAURI PUJOAN, RECPC, 11-06 (2009) 6-7 y a CID MOLINÉ, REIC, 6 (2008), 3-22.

común de que las cárceles son cómodas, pero la realidad es que para aquellos condenados a penas extremadamente largas, las consecuencias que sufre tanto el cuerpo como la mente son gravísimas y el sufrimiento puede ser tan elevado que la capacidad humana para soportarlo puede quedar desbordada.

Son por lo general los mismos medios de comunicación quienes recuerdan que la sociedad cree en un “exceso de garantías” para los delincuentes, y en una especial ineficacia de los mecanismos de lucha contra el terrorismo (principalmente durante la excarcelación de miembros históricos de la banda terrorista ETA). En este sentido, el sociólogo GARLAND⁹⁷ entiende que “la política criminal aparece imbuida en una corriente populista que denigra a los expertos y profesionales, y reclama la opinión general, el sentir de la gente, el sentido común, de volver a lo básico [...]” y de esta forma, los poderes públicos asumen como propia las reclamaciones de la gente pidiendo “mano dura” para los crímenes más violentos.

Esta sensación de impunidad también se pone de manifiesto cuando un preso, haciendo uso de un permiso penitenciario, comete un delito grave que genera inseguridad y provocan una reacción de rechazo, no sólo hacia el acto y la persona en sí, sino también hacia la propia figura jurídica del permiso.⁹⁸ Conviene recordar al lector que para acceder a estas salidas en libertad, los presos deben estar clasificados en el régimen ordinario (segundo grado) y llevar al menos un cuarto de la condena cumplida. Además se requiere que tenga una buena conducta y la elaboración de un informe favorable del equipo encargado que analice la situación del sujeto y pueda garantizar que no hay riesgo de comisión de delito ni quebrantamiento de condena, y posteriormente deberá ser aprobado por el juez de ejecución. Sin embargo, a pesar de las numerosas restricciones y controles a la hora de otorgar estos permisos penitenciarios, siempre va a existir ese mínimo riesgo por la imprevisibilidad que presentan las conductas humanas por sí mismas, riesgo que para gran parte de la doctrina hay que asumir por todo lo que aporta a la reinserción de nuestros presos que exige la CE.⁹⁹

Otra de los tópicos que más se suelen escuchar entre la sociedad, es que los delincuentes en España “entran por una puerta y salen por otra”. ¿Pero eso es realmente así? Los últimos datos disponibles indican que el 16% de los presos aproximadamente son preventivos, es decir, se encuentran encarcelados en espera de juicio, número significativamente alto teniendo en cuenta que prisión preventiva es la excepción a la

⁹⁷ GARLAND, La cultura del control, 2005, 44.

⁹⁸ Los permisos penitenciarios consisten en salidas en libertad de hasta seis días cada una, con un máximo de treinta y seis días al año, para todos aquellos reos que cumplan una serie de requisitos.

⁹⁹ Cfr. RÍOS MARTÍN, La prisión perpetua, 2013, 65.

práctica habitual de los juzgados: otorgar la libertad vigilada mientras se analizan las diligencias pertinentes a la averiguación del presunto hecho delictivo.

1.2 Es necesaria para la prevención de delitos por su efecto intimidatorio

La cadena perpetua está dirigida a un grupo muy restrictivo de delitos, como son el homicidio o asesinato en un contexto terrorista, atentado contra la libertad sexual, contra el Jefe de Estado y herederos y el genocidio, caracterizados todos ellos por generar “el máximo de reprochabilidad penal”. Aunque no quedase incluido expresamente en la Exposición de Motivos de la LO 1/2015, de 30 de marzo, parece obvio que otro de los objetivos que pretendía esta reforma es el de reducir la tasa de estos delitos especialmente graves. En otras palabras, se sustituye unas penas que se consideran blandas para implantar otras sustancialmente más duras con la justificación del efecto intimidante que puede acarrear a este tipo de delincuentes.

Uno de los principales fines de la pena es la de *prevención*, que se puede apreciar en tres manifestaciones distintas pero interconectadas entre sí y derivadas de la función de *motivación* de la norma penal: a) *general negativa*, consistente en la intimidación a la generalidad de la sociedad para que se abstengan de cometer ningún delito; b) *general positiva*, basada en la reafirmación de la validez y eficacia de la norma penal; y c) *especial*, que supone la imposición de un castigo orientado a la reinserción por quebrantar una norma.

Respecto a esta última, lo que pretende que la persona que ha delinquido no vuelva a hacerlo. Para el condenado a cadena perpetua no revisable, la tasa de reincidencia (al menos fuera de los muros de la cárcel) sería igual a cero, ya que se inocuiza socialmente al condenado, apartándolo de forma radical de la comunidad. De hecho, salvo algún castigo interno, una persona condenada a la perpetuidad tiene poco que perder, por lo que puede ser más propensa a cometer actos ilegales dentro de la propia prisión. Por lo que parece que no tiene mucho sentido medir la eficacia preventivo-especial de la sanción, cuando ésta no permite que el condenado vuelva a la vida en libertad, que es lo que exige la CE en su precepto 25.2: “*las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social [...]*”.

Cuestión distinta sería con la cadena perpetua revisable, en el caso de que el informe elaborado por el cuerpo técnico de la cárcel sea favorable y se produzca la excarcelación, donde sí se podría comprobar el comportamiento posterior del delincuente y si vuelve o no a cometer delitos. Al no existir antecedentes de esta pena en nuestro país no se dispone de datos para conocer la tasa de reincidencia, por lo que acudimos a la legislación alemana que prevé en el § 38 StGB “la pena privativa de libertad de por vida” en busca de algún resultado a tener en cuenta. El criminólogo

germano GÜNTHER KAISER ofreció en su informe el dato de que la tasa de reincidencia de unos setecientos condenados a esta pena, después indultados y sometidos a libertad condicional, era de uno por ciento aproximadamente, mientras que la de otro tipos de delincuentes rondaba entre el cincuenta y el ochenta por ciento.¹⁰⁰

Sin embargo este autor manifestó que la baja tasa de reincidencia podría deberse a múltiples factores, como los cambios psicológicos y físicos del condenado, el cambio del entorno, el apoyo familiar, el trabajo o la amenaza del cumplimiento del resto de la condena en caso de cometer un nuevo delito, entre otros, mientras critica que no se realizan estudios sobre los daños que pueden ocasionarles a los presos la cadena perpetua. En España siguiendo la misma línea doctrinal, destaca el estudio realizado por CID MOLINÉ¹⁰¹, en el que concluye diciendo que “el hecho de castigar a una persona a prisión en vez de a suspensión de la pena aumenta de manera significativa la probabilidad de que esta persona reincida en el futuro”.

Otros juristas como NISTAL BURÓN¹⁰², mantienen una teoría próxima a la de JAKOBS y distinguen entre dos tipos de delincuentes: el ocasional, que ha cometido un error en su vida y para el que la cárcel debe servir como lugar para alcanzar su reeducación y reinserción social; y el habitual o reincidente, que tarde o temprano volverá a infringir una norma de Derecho y que es difícilmente “curable”, por lo que la función resocializadora de la pena le resulta insuficiente e ineficaz. Lamenta el autor, que con una pena como la prisión permanente revisable se hubiese podido prevenir y evitar los crímenes tan atroces como el del pederasta que sale de prisión tiempo antes de cumplir la totalidad de la condena y que durante la libertad condicional vuelve a cometer un delito similar, o el del famoso caso “Mari Luz”.

Por otro lado, se encuentra la *prevención general*, aquella consistente en querer evitar la comisión de delitos por la sociedad en general. El penalista alemán ROXIN¹⁰³ entiende que “mediante las amenazas penales y la ejecución de la pena, la comunidad debe ser instruida sobre las prohibiciones legales y apartada de su violación”. Además, diversos autores insisten que incluso en países europeos, ha quedado demostrado que incrementar el número de reclusiones penitenciarias, así como las duraciones de las

¹⁰⁰ Cfr. CUERDA RIAZU, *Penas muy largas*, 2011, 47-48.

¹⁰¹ CID MOLINÉ, RDPC, 19 (2007), 450. Este autor realiza una comparativa entre la teoría de prevención especial negativa, según la cual la pena de prisión, aislando otros factores, garantiza un menor porcentaje de reincidencia en el futuro, y la teoría del etiquetamiento, que afirma que la penas alternativas a la prisión son más eficaces en cuanto a prevenir la reincidencia de los condenados. Los resultados obtenidos en el estudio reflejan que la muestra seleccionada (más de 400 condenados por el Juzgado Penal de Barcelona, unos efectivamente a prisión, y otros con la pena suspendida por otra medida alternativa), sigue el patrón de la denominada teoría del enriquecimiento y que son los condenados a penas de prisión quienes más riesgo de reincidencia presentan.

¹⁰² NISTAL BURÓN, LL Penal, 68 (2010), 32.

¹⁰³ ROXIN, DPPGI, 1997, 85.

mismas, sobretodo en casos de delitos catalogados como muy graves, no influyen apenas en los índices de delincuencia.¹⁰⁴

Además, como acertadamente recoge RÍOS MARTÍN¹⁰⁵, en nuestro ordenamiento “el Derecho penal tiene que servir simultáneamente para prevenir y combatir el delito, pero también para limitar la intervención estatal en su intervención”. No hay que olvidar que la función preventiva tiene una serie de límites que precisamente provienen de lo anterior: la proporcionalidad del hecho cometido y la pena, la culpabilidad del autor, y el respeto a los derechos fundamentales (art. 10.1 CE),¹⁰⁶ la prohibición de penas inhumanas o tratos degradantes (art. 15 CE), y la orientación reeducadora de las penas (art. 25.2 CE). En este mismo sentido, nos indica SILVA SÁNCHEZ¹⁰⁷ que “hay que distinguir entre medios de prevención fácticos y medios de prevención comunicativos. Los primeros pretenden evitar el mal mediante mecanismos causales, impidiendo la propia posibilidad física de realización del hecho o neutralizando sus efectos lesivos. Los segundos pretenden prevenirlo mediante mecanismos motivacionales, esto es, influyendo sobre el proceso deliberativo que podrá concluir en la decisión de ejecutar el hecho lesivo”, afirmando que aunque se da una combinación de ambos, el Derecho Penal forma parte de los comunicativos.

Los críticos a nuestra cadena perpetua revisable aluden que su indeterminación desborda el principio de proporcionalidad y que no respeta debidamente los DDFF. Mientras que los partidarios a la misma consideran como enemigos a las personas condenadas a estas penas al ser definidas como “fuentes de peligro”. El objetivo, por tanto, es neutralizar su futura peligrosidad, lo que justifica el aumento de las penas para limitar su capacidad física de movimiento y excluirle de la sociedad.¹⁰⁸ Para valorar realmente la eficacia de esta nueva pena en relación con la prevención general negativa habría que contestar una serie de cuestiones, entre otras: ¿La intimidación que genera la cadena perpetua incrementa la seguridad ciudadana?, ¿Las penas existentes antes de la última reforma del CP no eran suficientemente disuasorias?, ¿Una mayor sensación de seguridad ciudadana sólo se consigue a través del sistema penal?.¹⁰⁹

¹⁰⁴ Cfr. VILAPLANA RUIZ, Diario LL, 7980 (2012), 4.

¹⁰⁵ RÍOS MARTÍN, Prisión perpetua en España, 2013, 79.

¹⁰⁶ Este precepto señala como deberes y DDFF “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que les son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad [...]”

¹⁰⁷ SILVA SÁNCHEZ, Una primera lección, 2011, 73 ss.

¹⁰⁸ En este sentido, JAKOBS/CANCIO MELIÁ, Derecho penal del enemigo, 2006, 69-74.

¹⁰⁹ Para una lectura más detallada del tema, cfr. RÍOS MARTÍN, prisión perpetua en España, 2013, 81-89.

1.3 No es una cadena perpetua por su carácter revisable

El argumento principal esgrimido tanto en la Exposición de Motivos del APRCP como en el Preámbulo de la LO 1/2015, de 30 de marzo, por el que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal es que la posibilidad de revisión de la pena elimina cualquier atisbo de inconstitucionalidad por infringir el art. 25.2 CP. En palabras del legislador “de ningún modo renuncia a la reinserción del penado” y “aleja toda duda de inhumanidad de esta pena, al garantizar un horizonte de libertad para el condenado”.¹¹⁰ Sus valedores consideran que no es una pena definitiva, sino un modelo en el que se establece una respuesta penal adecuada a la gravedad de un hecho delictivo, por lo que es totalmente compatible con el mandato de reinserción social. La consideran compatible con este principio porque establece la posibilidad de aplicar mecanismos que permiten al recluso reintegrarse en la sociedad en función de su actitud y comportamiento dentro del centro penitenciario.¹¹¹

El Grupo Parlamentario Popular defendió la inclusión de esta medida en el Ordenamiento alegando que no era una pena definitiva en la que “el Estado se desentiende del penado”, y que es compatible con nuestra Carta Magna y con la finalidad de reeducación que debe ir aparejada a toda pena. Además la prisión permanente revisable tiene el apoyo del Consejo de Estado, ya que en el art. 77.1.b) del Estatuto de la CPI, que fue ratificado por España el 17 de julio de 1998, viene prevista como posible pena “*la reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado*”, mientras que en el art. 110, permite que en casos de prisión perpetua se conceda la libertad condicional pasados 25 años de cumplimiento. También defiende esta pena el Informe del Consejo Fiscal en el año 2012, aunque con alguna matización, al entender que la accesibilidad del penado a la progresión en grado en el ámbito penitenciario y la suspensión condicional de parte la condena cuando haya cumplido una serie de requisitos fijados por ley, “es lo que salvaguarda la constitucionalidad a la luz del art. 25.2 CE”.¹¹²

Además, los partidarios de esta nueva pena aluden a diferentes sentencias del TS que declararon que el art. 25.2 CE no contiene en sí mismo un derecho fundamental, sino que es un mandato del constituyente hacia el legislador para orientar la política penal y penitenciaria de nuestro país. La jurisprudencia del Alto Tribunal ha insistido en que del mandato que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad vayan

¹¹⁰ Preámbulo de la LO 1/2015, apartado II.

¹¹¹ El entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, defendió públicamente esta pena el 20 de septiembre de 2013, considerándola como “una incorporación valiosa y avanzada en nuestra legislación penal” de carácter excepcional, que ha sido avalada por el Consejo de Estado y el TEDH, y que es “plenamente compatible” con la reinserción del reo.

¹¹² Informe del Consejo Fiscal al APLO por el que se modifica la LO 10/95, de 24 de noviembre, del CP, de 20 de diciembre de 2012, 85.

dirigidas a la reinserción social del penado no se derivan derechos subjetivos y por tanto no cabe acudir en busca del recurso de amparo.¹¹³

Sin embargo, surgen algunos problemas en relación a la posible suspensión de la pena. En gran medida, por la falta de determinación por parte del legislador de cuál sería el criterio del tribunal sentenciador a la hora de establecer que el condenado pueda o no obtener la libertad condicional, ya que *a priori* no deberían valer las opiniones personales de los magistrados sobre la gravedad del crimen, la personalidad del delincuente, o la ausencia o no de arrepentimiento. Como recoge CUERDA RIEZU¹¹⁴, “esto convierte a la prisión perpetua revisable en una pena indeterminada en parte”, ya que se conoce su duración hasta la fecha de la primera revisión, pero no respecto a su continuidad futura.

Parte de la doctrina critican la ambigüedad del TEDH y del TC, al pretender disfrazar esta pena de prisión perpetua en una especie de sanción *sui generis* que sólo existe en la norma, pero que nunca llegará a aplicarse como tal en la práctica, obviando en sus pronunciamientos que la suspensión de la condena es únicamente una posibilidad. Es decir, el carácter revisable de esta pena no la convierte en otra sanción diferente, por lo que se seguirá computando como una pena perpetua sin un mecanismo que garantice el momento exacto de su finalización, y que ampara que un recluso pueda estar encarcelado hasta su muerte.¹¹⁵ Del mismo modo, sus detractores añaden que la decisión del Tribunal en estos supuestos presenta un importante contenido valorativo que puede estar especialmente influenciado por diferentes factores políticos, sociales o mediáticos.

En el apartado 2.3 del presente capítulo se tratará en profundidad la posible vulneración de la prisión permanente revisable en España en relación al precepto constitucional del art. 25.2 CE.

1.4 Existencia de normativa similar en países de nuestro entorno europeo

Ya decía NISTAL BURÓN¹¹⁶ que la cadena perpetua siempre se ha considerado como un tema tabú en nuestro ordenamiento. Mientras que la mayoría de estados miembros de la UE la prevén en su ordenamiento (al igual que la CPI en su catálogo de posibles sanciones), en España es sistemáticamente rechazada por ser contraria al 25.2 CE.

¹¹³ Véase, entre otras, SSTs 2/1987, de 21 de enero; 28/1988, de 23 de febrero; 55/1996, de 28 de enero; y 75/1998, de 31 de marzo.

¹¹⁴ CUERDA RIEZU, penas muy largas, 2011, 41.

¹¹⁵ En este sentido, FERRAJOLI, Ergastolo, 1999, 298 ss.; DAUNIS RORDÍGUEZ, RDGP, 10 (2013), 91.; LASCURAÍN SÁNCHEZ, Los males, El Mundo, 2010.

¹¹⁶ NISTAL BURÓN, LL PENAL, 68 (2010), 31-32.

Como se expuso en el capítulo previo, diferentes países de Europa prevén en su legislación interna la cadena perpetua revisable. Todos estas naciones se han visto obligados a establecer en su regulación mecanismos de revisión periódica que permitan tener en cuenta la evolución personal del reo, y soslayar así la prohibición de tratos inhumanos o degradantes que garantice al recluso un horizonte real de liberación (art. 3 CEDH).¹¹⁷ Para sintetizar y realizar un análisis más adecuado de la materia, se ha llevado a cabo una comparativa de la regulación de esta pena en países “ceranos” al nuestro y con un estilo de vida y un Derecho similar al nuestro, como son: Alemania, Reino Unido, Italia y Francia.¹¹⁸

Cabe recordar que otro de los argumentos que esgrimía el legislador a la hora de implantar la prisión permanente revisable en España era, precisamente, “que se trataba de un modelo extendido en el Derecho comparado europeo”.¹¹⁹ Además de la previsión de esta pena en el Estatuto de la CPI anteriormente referenciado, el TEDH ha admitido en diversa jurisprudencia que no es contraria al Tratado de Roma. Hasta ahí, parece razonable la fundamentación que aporta el legislador español en su intento de justificar y considerar jurídicamente adecuada a derecho la prisión permanente revisable en nuestro país.

Sin embargo, el sector doctrinal mayoritario de nuestro país también presenta objeciones en cuanto a este argumento. Por un lado, y si bien ya se ha desarrollado la regulación de la cadena perpetua en varios de los países del entorno europeo (ya sea pena privativa de la libertad de por vida, en Alemania; *life imprisonment*, en Reino Unido, reclusión a perpetuidad, en Francia; o *ergastolo*, en Italia), salvo en algunos supuestos tasados específicamente en el Reino Unido,¹²⁰ España es el país europeo occidental que prevé la revisión de la condena más tardía, siendo en algunos casos a los 35 años de cumplimiento íntegro, muy por encima del resto.¹²¹ Por poner un ejemplo,

¹¹⁷ Cfr. FUENTES OSORIO, ReDCE, 21 (2014), 311-312.

¹¹⁸ Ver bloque III del Capítulo II del presente estudio: “Derecho comparado”.

¹¹⁹ Apartado II del Preámbulo de la LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

¹²⁰ Cabe recordar, como recoge ROIG TORRES, La cadena perpetua, 2016, 65 ss., que el cumplimiento íntegro en el Reino Unido se reserva para casos en los que el delincuente tuviera al menos 21 años al realizar el hecho, y el delito sea especialmente grave y concurren ciertos presupuestos:

1º: asesinato de dos o más personas si conlleva alguna de estas circunstancias: a) alto grado de premeditación; b) secuestro de la víctima; c) conducta sexual o sádica.

2º: asesinato de un niño, si implica secuestro o motivación sexual o sádica.

3º: asesinato cometido con el objetivo de conseguir un fin político, racial, religioso o ideológico.

4º: asesinato cometido por una persona ya condenada por asesinato previo.

¹²¹ Los plazos previstos en los países que la contemplan son los siguientes: Albania (25 años), Alemania (15), Armenia (20), Austria (15), Azerbaiyán (25), Bélgica (15, ampliables a 19 ó 23 años), Bulgaria (20), Chipre (12), Dinamarca (12), Eslovaquia (25), Eslovenia (25), Estonia (30), Finlandia (12), Francia (18 ampliables a 22), Georgia (25), Grecia (20), Hungría (20 ampliables), Irlanda (7 años, salvo por ciertos asesinatos), Italia (26), Letonia (25), Liechtenstein (15), Luxemburgo (15), Moldavia (30), Mónaco (15), Polonia (25), Reino Unido (cumplimiento íntegro, 30, 25, 12), República Checa (20),

hemos visto que en Alemania la pena privativa de por vida se revise a los 15 años de cumplimiento, y los condenados a ella pasan entre 17 y 20 años de media en la cárcel, salvo en los casos que su legislación tacha de “brutales” que aumenta hasta los 23-25, mientras que en Francia el cumplimiento medio suele rondar los 22-23 años.

Y por otro lado, aunque estrechamente relacionado con lo anterior, porque ningún país europeo tiene un precepto constitucional íntegramente equiparable al establecido en el art. 25.2 CE, a través del cual se exige que las penas privativas de libertad estén orientadas hacia la reeducación y la reinserción social del condenado. Por tanto, en estos países, la cadena perpetua puede no colisionar directamente con lo establecido en sus normas constitucionales, mientras que en España resulta verdaderamente difícil compatibilizar este artículo con la nueva prisión permanente revisable o con las penas privativas de libertad excesivamente largas, como más adelante se estudiará.¹²²

1.5 Jurisprudencia del TEDH que avala esta pena

Como recuerda el apartado II del Preámbulo de la LO 1/2015, la prisión permanente revisable:

“Se trata, en realidad, de un modelo extendido en el Derecho comparado europeo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la Convención Europea de Derechos Humanos, pues ha declarado que cuando la ley nacional ofrece la posibilidad de revisión de la condena de duración indeterminada con vistas a su conmutación, remisión, terminación o libertad condicional del penado, esto es suficiente para dar satisfacción al artículo 3 del Convenio (cfr. SSTEDH 12-2-2008, caso Kafkaris vs. Chipre; 3-11-2009, caso Meixner vs. Alemania; 13-11-2014, caso Bodein vs. Francia; 3-2-2015, caso Hutchinson vs. Reino Unido).”

Antigua República de Macedonia (15), Rumanía (20), Rusia (25), Suecia (10), Suiza (15 reducible a 10), Turquía (24 años, 30 y 36 en casos agravados).

¹²² Especialmente crítico al respecto encontramos a VIVES ANTÓN, La injerencia, El País, 2010, quien marcó el límite de la legitimidad de la cadena perpetua: “La idea de una privación potencialmente perpetua de la libertad choca, en mi opinión, con la imagen del hombre como un ser capaz de reflexión y razonamiento, como un ser que siempre puede cambiar y acabar dirigiendo su vida según unos mínimos de racionalidad. Esa imagen, que yace en el fondo de los ordenamientos democráticos, no puede, según creo, sino conducir a la conclusión de que la privación de libertad perpetua es una anomalía incongruente en ellos.” En la misma línea doctrinal podemos resaltar a CUERDA RIEZU, penas muy largas, 2011, 37., quien critica el argumento del Derecho comparado que da el legislador en la Exposición de Motivos del ARCP 2012-2013 al preguntarse porqué no puede España dar lecciones de DDF a los países de la UE, que son quienes prevén una pena de privación de libertad perpetua que a la vez que la denominan “revisable”, siendo ambos términos contradictorios y poniendo de relieve la inseguridad y mala conciencia de sus propios legisladores foráneos.

El propio Tribunal recuerda que los Estados tienen la obligación, de conformidad con el CEDH, de tomar medidas para proteger a sus ciudadanos ante los delitos más graves, incluyendo entre ellas, la prisión de duración indeterminada mientras sea necesario para la protección de la sociedad.¹²³ De este modo, el legislador español justifica este modelo de cadena perpetua poniendo como ejemplo varias SSTEDH que la compatibilizan con lo dispuesto en el art. 3 del Convenio de Roma,¹²⁴ mientras que se “olvida” mencionar otras en las que se declaran la vulneración de los preceptos referidos a que la finalidad de la pena no es otra que la reinserción social del reo. A continuación, se expondrá brevemente tres de estas polémicas sentencias en las que el TEDH entiende que no existe vulneración del Convenio.

- Caso Kafkaris c. Chipre (2008)

El recurrente fue condenado a cadena perpetua por cada uno de los tres asesinatos cometidos en 1987. Teniendo en cuenta su conducta y los beneficios penitenciarios que se aplicaban en la legislación chipriota se previó como fecha de liberación, el 2 de noviembre de 2002. Al no ser liberado en esa fecha el Sr. Kafkaris solicitó al TS el procedimiento de *habeas corpus*, alegando la ilegalidad de su detención, propuesta que fue rechazada por el Tribunal alegando que su condena era perpetua.¹²⁵

Respecto a la posible vulneración del art. 3 del CEDH, el Tribunal siempre ha mantenido que el precepto no prohíbe de forma expresa la pena de cadena perpetua, y que para hablar de penas o tratos inhumanos y degradantes “el sufrimiento y la humillación infringidas deben ir más allá de las que conlleva inevitablemente una forma de trato o de pena legítima.”¹²⁶ De esta manera, para dilucidar en qué casos la cadena perpetua puede o no ser acorde al Convenio, la jurisprudencia del TEDH acude a la legislación nacional de cada país para analizar la posibilidad de revisión de la condena en vistas a su suspensión o a su puesta en libertad condicional.

Volviendo al caso, en el derecho chipriota el asesinato se castiga con la cadena perpetua, aunque puede reducirse en cualquier momento, por lo que el Tribunal no entiende que esta sea “para siempre” o que no haya posibilidad de liberación alguna. De

¹²³ Véase STEDH, de 10 de diciembre de 2013, *Murray c. Países Bajos*.

¹²⁴ El art. 3 CEDH señala que “Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”.

¹²⁵ Cabe recordar que en 1976, el Comité de Ministros de Europa recomendó a los Estados miembros que acordasen la liberación de sus presos en el momento que existiera un pronóstico favorable de reinserción, alegando que mantenerlo en prisión en aras de la prevención general cuando ya no supone un peligro para la sociedad sería incompatible con el CEDH. Además, el Comité de Ministros del Consejo de Europa adoptó una recomendación en 2003, en la que manifestaba que la libertad condicional ejerce una función fundamental para favorecer la reinserción social del penado y para prevenir la reincidencia.

¹²⁶ RÍOS MARTÍN, Prisión perpetua en España, 2013, 94.

esta manera, concluye diciendo que el Sr. Kafkaris no puede alegar que ser privado de un horizonte de libertad supone una posible vulneración del art. 3 CEDH, puesto que la sensación de incertidumbre es inherente a la naturaleza de la pena infringida, por lo que no se puede hablar de pena inhumana o degradante, ya que en la normativa interna de su país se prevé la posibilidad de revisarla en cualquier momento.

- Caso Léger c. Francia (2006)

En el año 1966 el Sr. Léger fue condenado a cadena perpetua sin fijar un período de seguridad por un delito de secuestro seguido de asesinato. Desde 1979 solicitó en varias ocasiones la libertad y, a pesar de que el riesgo de reincidencia criminal fue calificado como realmente bajo, continuó en prisión hasta que en 2005 se admitió su puesta en libertad condicional hasta octubre de 2015, fecha definitiva de expiración de las medidas de vigilancia y de control.

Respecto a la eventual vulneración del art. 5 del CEDH, el Tribunal recuerda que hay que remitirse a la legislación nacional, siempre y cuando toda detención sea acorde a derecho y sin atisbo de arbitrariedad. En el caso que nos concierne, el TEDH entiende que una vez satisfecho el objetivo represivo inicial de la condena, hay que valorar otros elementos relacionados con el riesgo y la peligrosidad del condenado, que justificaron su mantenimiento en prisión hasta el año 2005, cuyo riesgo de reincidencia era mínimo, concluyendo que la detención hasta esa fecha estaba de acuerdo al art. 5.1.a) del Convenio.

Y en relación al art. 3, el TEDH insiste en que una vez superado el elemento de retribución inherente al propio período punitivo, el mantenimiento en prisión debe venir motivado por razones de riesgo y peligrosidad real, como se ha mencionado con anterioridad. La situación concreta del recurrente no superó ese umbral de gravedad que requiere el art. 3 del Convenio, de una especial agravación del sufrimiento del condenado, por lo que el Tribunal no percibió que la estancia en prisión del demandado constituyese un trato especialmente inhumano o degradante que se considerase prohibido por el mentado precepto.

- Caso James, Vinter and others c. Reino Unido (2013)

Esta sentencia es consecuencia de las demandas interpuestas por tres de los 49 asesinos que se encontraban condenados a perpetuidad: D. Vinter, que asesinó a su mujer en 2008; P. Moore, que asesinó “por placer” a cuatro homosexuales en 1995; y J. Bamber, que mató a cinco miembros de su familia en 1985.

La legislación británica suprimió la revisión a los 25 años, alegando que serán jueces independientes quienes determinen cuándo ha de efectuarse la revisión en cada caso concreto, siendo posible de igual modo que no se efectúe. Esto es precisamente lo que critica el TEDH, que abogaba por mantener la posibilidad de revisión pasados 25

años de condena, ya que “si un prisionero es encarcelado sin ninguna perspectiva de ser puesto en libertad y sin ninguna posibilidad de que su sentencia a perpetuidad sea revisada, exista el riesgo de que no se arrepienta del crimen”.¹²⁷ Por el contrario, el gobierno británico se justifica con que el Secretario de Estado tiene la capacidad y el deber de liberar a cualquier prisionero si su estancia en prisión pueda ser incompatible con el art. 3 del Convenio.

Sin embargo, el Tribunal considera que en el Reino Unido no existe un mecanismo real de revisión en las penas de por vida, puesto que la normativa inglesa está redactada en términos muy restrictivos en cuanto a la facultad de excarcelar presos que tiene la Secretaria de Estado, reduciéndose exclusivamente a casos de enfermedades graves con un mínimo riesgo de reincidencia o en los que su esperanza de vida pudiese verse seriamente afectada de continuar en prisión.¹²⁸

2. Argumentos en contra de la prisión permanente revisable

*“Te encierran de por vida, y eso es justo lo que te quitan”*¹²⁹

Ellis Redding, *The Shawshank Redemption*, 1994.

2.1 Atenta contra la dignidad de las personas

La *dignidad* es un valor reconocido como base de los derechos humanos en todos los ordenamientos nacionales y supranacionales. El art. 1 de la DUDDHH de 1948 dispone que “*Todos los seres humanos nacen libres en dignidad y derechos.*” Nuestra Constitución nos recuerda su importancia en el precepto 10, donde establece que “*la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son el fundamento del orden político y de la paz social.*”

La jurisprudencia del TEDH entiende que ejecutar una pena privativa de libertad sin atender a la futura evolución de la personalidad del sujeto atenta contra su dignidad, desde la perspectiva de la imagen de un hombre que es incapaz de cambiar y reinsertarse.¹³⁰ Ahora bien, el aspecto a dilucidar es si la de cadena perpetua es compatible o no con preservar la dignidad de las personas. El legislador español que

¹²⁷ RÍOS MARTÍN, prisión perpetua en España, 2013, 98.

¹²⁸ Esta decisión fue adoptada de manera cuasi unánime en la Gran Cámara, con una votación de 16 votos a favor y sólo uno en contra.

¹²⁹ Frase de Ellis “Red” Redding (interpretado por el actor Morgan Freeman) en la película *The Shawshank Redemption* (“Cadena perpetua” en España), que narra la difícil vida en una cárcel de EEUU de varios hombres condenados a penas perpetuas y sin apenas posibilidades de salir en libertad.

¹³⁰ Véase en este sentido, BVerfGE, del 21 de junio de 1977.

incluyó esta pena en la LO 1/2015, argumentaba que la posibilidad de revisión de la condena era motivo más que suficiente para evitar la posible vulneración del art. 10 CE, y que una respuesta negativa en la correspondiente revisión sería consecuencia de los propios actos del condenado. Sin embargo, desde ciertos sectores como La Subcomisión de Derecho Penitenciario del CGAE la consideran inconstitucional por su incompatibilidad con los artículos 10 y 15 de nuestra Carta Magna.

Hay que poner de manifiesto que en nuestra sociedad actual cada vez cala mejor la teoría del penalista alemán JAKOBS. Este autor considera que la condición de persona no es algo inherente al ser humano por el mero hecho de serlo, sino que es una cualidad que otorga el Estado, pudiendo perderla en caso de incumplimiento reiterado del ordenamiento jurídico o de poner en riesgo a la sociedad. En otras palabras, consiste en calificar al delincuente condenado por injustos graves como un “enemigo” del Estado, que al violar los principios más elementales de una sociedad democrática pierde su condición de persona y su dignidad, pudiendo restringirse sus derechos en aras de favorecer la seguridad del resto de la población y los derechos de las víctimas.¹³¹ No obstante, la idea de “enemigo” ha enfrentado a los juristas ya que como señala NÚÑEZ CASTAÑO¹³², es un concepto cambiante en función del momento histórico y político en el que nos encontremos. Los disidentes políticos que había en una dictadura eran considerados enemigos del régimen, mientras que a ojos del resto del mundo eran vistos como rebeldes que luchaban por la libertad y los derechos de su pueblo.

Sin embargo, la mayoría de la doctrina discrepa a la hora de valorar la adecuación de la cadena perpetua a los valores promulgados por la Constitución o la DUDDHH. Conviene recordar que en la práctica, las posibilidades de salir en libertad condicional teniendo en cuenta las restrictivas condiciones previstas para ello son realmente escasas. Poniéndonos en el mejor de los casos, si por ejemplo la persona delinquiese a los 35 años de edad, y a los 25-30 años se revisase la condena y el informe fuese favorable, saldría de la cárcel a los 60-65, sin un proyecto de vida laboral, educativo y familiar desarrollado, y en una situación de soledad y desamparo que algunos juristas denominan “pena de muerte social”.

¹³¹ Para un estudio más detallado de la materia, cfr. JAKOBS/CANCIÓ MELIÁ, *Derecho penal del enemigo*, 2006. Este autor sostiene que la despersonalización es, por un lado, parcial, debido a que el “enemigo” mantiene su personalidad innata, ya que de lo que se trata es de su neutralización y no de su destrucción arbitraria, y por otro, potestativo, puesto que es el propio sujeto quien se excluye a sí mismo una vez que no tiene un comportamiento fiel a Derecho.

¹³² NÚÑEZ CASTAÑO, LL penal, 27 (2016), 122-123. Como ejemplo, en sus orígenes la banda terrorista ETA se consideraba como una organización que luchaba contra la represión de la dictadura franquista, recibiendo incluso la aprobación de parte de los sectores más críticos al Régimen, pero tras la promulgación de la CE de 1978 pasó a ser criminalizada y el enemigo número uno del Estado. Algo parecido ocurrió con la ola de movimientos revolucionarios que hubo en países africanos contra sus respectivos dictadores, que fueron en su momento apoyados por ciertos países occidentales, pero que tras su instauración en el poder, esos “rebeldes” pasaron a ser considerados enemigos de Occidente.

El término *dignidad* tiene diversas aceptaciones. Si se entiende desde una dimensión sustancial y objetiva, constituye la base de un Estado de Derecho, siendo un principio absolutamente inviolable y por encima del resto. Ya el propio KANT¹³³ comentó que el hombre debía de “obrar de tal modo que te relaciones con la humanidad, tanto en su persona como en la de cualquier otro, siempre como fin y nunca como medio.” El otro concepto hace más referencia al sentido moral del término, entendido por la práctica de los valores fundamentales. También critican la teoría de JAKOBS, quienes defienden que el límite absoluto de la respuesta punitiva-penal estará siempre amparada en el respeto a la dignidad de las personas, haciendo imposible la equidistancia entre “los buenos y los malos” o lo que es lo mismo, entre el Estado y los delincuentes.

Para concluir con este epígrafe, me gustaría trasponer las palabras de RÍOS MARTÍN¹³⁴ en referencia a la aceptación y ámbito de la dignidad. “a) Un delincuente, como toda persona, tiene una inquebrantable dignidad (en el sentido sustancial y ontológico) que no pierde y que no puede perder aunque cometa las mayores atrocidades; b) Los demás estamos en la obligación moral de salvaguardar esta dignidad y la efectividad de los derechos humanos porque la dignidad es un fundamento axiológico inviolable y porque preservando la dignidad ajena estamos manteniendo a buen recaudo la nuestra (en el sentido moral); c) Despersonalizar a un individuo para proteger a una mayoría resulta una tesis insostenible desde la teoría de los derechos humanos porque atenta contra el valor universal de persona y el respeto a la dignidad humana; d) Que la dignidad implica tener posibilidades reales y ciertas de poder incorporarse a la sociedad para desarrollar, si quiera mínimamente, un proyecto vital a nivel social, familiar, laboral: lo que queda incumplido con la prisión perpetua, aunque se le quiera hacer pasar por revisable.”

2.2 Atenta contra la prohibición de penas inhumanas y tratos degradantes

Otro derecho fundamental que podría verse afectado con la incorporación en nuestra legislación de la prisión permanente revisable es el recogido en el art. 15 CE: “*Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos degradantes [...]*”. Ahora bien, resulta difícil concretar los conceptos de “degradación e inhumanidad”, sobre todo teniendo en cuenta que es una pena socialmente aceptada. La jurisprudencia del TC intenta definirlos como aquellos tratos que se caracterizan “*por la irrogación de padecimientos físicos y psíquicos ilícitos e infligidos de modo vejatorio para quien los*

¹³³ KANT, *Crítica de la razón*, 1975, 128.

¹³⁴ RÍOS MARTÍN, *prisión perpetua en España*, 2013, 108-109.

*sufre y con esa propio intención de vejar y doblar la voluntad del paciente*¹³⁵ y como aquellos que “ [...] *cosifican al individuo, rebajándolo a un nivel material o animal, y lo mediatizan o instrumentalizan, olvidándose de que toda persona es un fin en sí mismo*”¹³⁶.

A partir del año 2006, el TEDH viene examinando las distintas modalidades de cadenas perpetuas impuestas en diferentes países europeos, ya no tanto desde la perspectiva de cómo se debe imponer, sino de si se debe imponer, entrando a valorar si respeta o no los principios fundamentales de prohibición de tratos inhumanos o degradantes, de legalidad o de igualdad recogidos en el Convenio.¹³⁷ El Tribunal Europeo insiste que las cadenas perpetuas en los países cuyo Derecho nacional prevea la posibilidad de revisar la condena, beneficiarse de la libertad condicional, conmutarla o ponerle fin, se encuentra dentro del marco legal exigido por el art. 3 CEDH. También ha incluido dentro de las prisiones perpetuas “legales” aquellas cuya legislación interna permita la facultad del Poder Ejecutivo de la gracia o indulto.

Precisamente esto último se opone a la conocida sentencia del TC alemán de 21 de junio de 1977, que exigía desde una perspectiva constitucional que la cadena perpetua debe garantizar al condenado un horizonte de posible libertad, sin que baste para ello la hipótesis de concesión de un indulto por el Gobierno. Numerosa doctrina española apoya esta postura al entender que en un Estado de Derecho prima la idea de la seguridad jurídica, lo que implica que “los presupuestos, bajo los cuáles puede ser suspendida la pena de prisión perpetua, y el procedimiento aplicable al respecto, sean regulados legalmente”¹³⁸ y que no dependen de una decisión discrecional del Ejecutivo sin exigencias preestablecidas ni un control jurisdiccional debido.

Un sector minoritario de los juristas, en el que cabe mencionar a MANZANARES SAMANIEGO¹³⁹ o NISTAL BURÓN¹⁴⁰ entienden exagerado catalogar la prisión permanente revisable como un trato degradante o inhumano incluido en el art. 15 CE, y que el posible acceso a la libertad condicional salvaría la exigencia constitucional. Para este último, esta pena sería contraria a la CE sólo a nivel teórico, ya que en la práctica estaría sujeta a revisión periódica. En este sentido, la jurisprudencia del TC y del TEDH ha

¹³⁵ Véase, entre otras, STC 34/2008, de 25 de febrero, FJ 5.

¹³⁶ Véase STC 181/2004, de 2 de noviembre, FJ 13.

¹³⁷ Cfr. CUERDA RIEZU, *Penas muy largas*, 2011, 91. Cabe destacar la creciente aparición de opiniones contrarias a la cadena perpetua en los últimos años en el seno del TEDH, que están provocando un debate profundo sobre esta materia.

¹³⁸ Véase BVerfGE, de 21 de junio de 1977, 45, p. 246.

¹³⁹ Cfr. MANZANARES SAMANIEGO, AP, 30 (1997), 672.

¹⁴⁰ En este sentido, cfr. NISTAL BURÓN, LL Penal, 68 (2010), 32. Además este autor entiende que las penas largas también pueden reeducar al reo.

afirmado reiteradamente que son dos los motivos principales para considerar que una pena es inhumana o degradante: la duración de la misma y la forma de ejecución.

Respecto al primero, la doctrina mayoritaria entiende que criminológicamente hablando, está ampliamente demostrado que un internamiento en un centro penitenciario superior a quince años causa un grave deterioro en la personalidad del condenado y no favorece en absoluto a su reeducación.¹⁴¹ También el TS interpreta que el tiempo de cumplimiento excesivo de la pena de prisión resulta contrario al art. 15 de la CE, al entender que rebasar el límite de 30 años “merecería la calificación de pena inhumana, y que sería difícilmente reconducible a los fines de reeducación y reinserción social, como provienen los artículos 15 y 25.2 de la Constitución Española”.¹⁴² E incluso algunos autores como CUERDA RIEZU¹⁴³ critican la prisión permanente revisable al catalogar como trato inhumano o degradante la propia angustia del recluso mientras espera que se decida sobre su petición de libertad condicional, ya que de esta trascendental decisión depende su continuidad para el resto de sus días.¹⁴⁴

En relación a la forma de ejecución y sus consecuencias, la jurisprudencia nacional y europea han utilizado diversos términos para definir una pena inhumana. Por un lado puede ser el estado de las condiciones materiales de la privación de libertad: el espacio en la celda, la alimentación, las condiciones higiénicas, o la ventilación e iluminación. Por otro puede referirse a las condiciones de detención, el trato de los funcionarios y el hacinamiento, o bien a las propias condiciones psíquicas o físicas del reo. Viene a colación de esto recordar la creencia injustificada de la sociedad que la cárcel es un lugar cómodo donde “se vive bien” o se está “como en casa”. Numerosos especialistas insisten en que la realidad es muy diferente, y sólo quien vive o ha vivido allí conoce las terribles consecuencias que genera tanto a nivel físico como, sobre todo, al social y emocional. Prueba de ello es el informe de la Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria elaborado en el año 2010, que señala que el 40% de los presos padecen una enfermedad mental y que más del 25% de los internos ha

¹⁴¹ Cfr. entre otros, GIMBERNAT ORDEIG, Prólogo, 2010, 60-61; MAPELLI CAFFARENA, Las consecuencias jurídicas, 2005, 70; LÓPEZ PEREGRÍN, REIC, 1 (2003), 12; CEREZO MIR, Reforma penal, 1993, 170 ss.

¹⁴² STS 1822/1994, de 20 de octubre.

¹⁴³ CUERDA RIEZU, Penas muy largas, 2011, 102-103.

¹⁴⁴ En este sentido, conviene destacar la STEDH de 2 de septiembre de 2010, *Iorgov (II) c. Bulgaria*, § 63, que declara “el artículo 3 impone al Estado la obligación positiva de asegurar que todo reo sea encarcelado en condiciones compatibles con el respeto de la dignidad humana, que las modalidades de ejecución de las medidas adoptadas no sometan al interesado a una angustia o prueba de tal intensidad que exceda el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la privación de libertad”.

recibido diagnósticos de trastorno psiquiátrico en su historial clínico, dato que se dobla si se incluye tratamientos por consumo de drogas.¹⁴⁵

Resumiendo, una pena puede considerarse como trato degradante o inhumano si conlleva un tiempo de cumplimiento excesivamente largo o carece de expectativas reales de libertad. En otras palabras, toda pena es contraria al art. 15 CE si genera un sufrimiento humano al interno por encima del consustancial a la propia pena, que desborda su capacidad física y mental para soportarlo. De esta manera, entiendo que la prisión permanente revisable podría ser legítima si contiene en su legislación interna la facultad de acceder a la libertad condicional al cumplirse una serie de requisitos tasados por ley, pero esa indeterminación a la hora de conocer el fin de la condena, o el salir en libertad tras haber pasado 30 años ininterrumpidos en prisión, ¿excede o no excede ese “umbral mínimo de severidad” que utiliza la jurisprudencia del TEDH?. El debate está servido y no parece haber una respuesta unánime.¹⁴⁶

2.3 Vulnera el mandato constitucional de reinserción social

Como acertadamente recuerda LEGANÉS GÓMEZ¹⁴⁷, la finalidad resocializadora que viene atribuida a las penas privativas de libertad recogida en el precepto 25.2 CE, determinó, tras la entrada en vigor en el 1979 de la LOGP, un nuevo sistema de ejecución penal conocido por la doctrina como *individualización científica*, que como regla general prima el fin de reinserción del autor y deja en un segundo plano la idea del delito. Quizás el aspecto más discutido de la novedosa incorporación en nuestra legislación de la prisión permanente revisable es su compatibilización con el art. 25 CE, que conviene recordar:

“Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados.”

Siguiendo la misma tendencia se encuentra el art. 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 1966, ratificado por España en el 30 de abril de

¹⁴⁵ Para un estudio completo acerca de la forma de ejecución y las consecuencias de la pena, cfr. RÍOS MARTÍN, *Prisión perpetua en España*, 2013, 117-139.

¹⁴⁶ Respecto a si la prisión permanente revisable es o no un trato inhumano o degradante, y si supera ese grado de sufrimiento inherente a toda pena, conviene rescatar el escrito que presentaron 310 presos italianos condenados a prisión perpetua al presidente de la República, Giorgio Napolitano, en el año 2007, que relataba lo siguiente: “Señor Presidente de la República, estamos cansados de morir un poco todos los días. Hemos decidido morir de una sola vez, pedimos que nuestra pena a la cadena perpetua se convierta en pena de muerte. [...] la cadena perpetua es el invento de un no-Dios, tan malvado que no se puede imaginar. Es una muerte que hay que tragarse de a poco. Es una victoria sobre la muerte porque es más fuerte todavía que la misma muerte [...] Sueños que empiezan donde terminan / prisioneros para siempre / no nos matan, peor: nos dejan morir para siempre. [...] La cadena perpetua transforma la luz en sombras”. Cfr. LUCCHINI, *Antes morir*, El País, 2007.

¹⁴⁷ Cfr. LEGANÉS GÓMEZ, *LL Penal*, 110 (2014), 21.

1977, conforme al cual “*el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será de reforma y la readaptación social de los penados.*”

La jurisprudencia del TC se ha manifestado en varias ocasiones acerca de la orientación de las penas. En primer lugar, admite que tanto las penas como las medidas de seguridad pueden ir dirigidos a otros fines legítimos (retributivos, preventivos,...) siempre que sean compatibles con la reeducación y reinserción social.¹⁴⁸ Por otro lado, establece que el mandato constitucional de la orientación de las penas va dirigido, tanto al legislador para controlar la política penal y penitenciaria, como a la Administración penitenciaria y al Poder Ejecutivo.¹⁴⁹ Y en tercer lugar, el Alto Tribunal remarca que, aunque el art. 25.2 CE no venga recogido como un DDFF susceptible de recurso de amparo, “no significa que pueda desconocerse en la aplicación de las leyes, y menos aún cuando el legislador ha establecido, cumpliendo el mandato de la Constitución, diversos mecanismos e instituciones en la legislación penitenciaria precisamente dirigidos y dirigidas a garantizar dicha orientación resocializadora, o al menos, no desocializadora precisamente facilitando la preparación de la vida en libertad a lo largo del cumplimiento de la condena.”¹⁵⁰

De este modo, son dos los contenidos de este mandato constitucional del art. 25.2 de la Norma Fundamental, la reeducación y la reinserción social, que conviene diferenciarlos para analizar los motivos que algunos autores utilizan para negar su compatibilidad con la prisión permanente revisable.

- El mandato constitucional de reeducación

Este mandato exige que la forma de cumplimiento de la pena de prisión evite consecuencias negativas en la personalidad del reo, que impidan que pueda reintegrarse nuevamente en la sociedad para desarrollar su proyecto vital. Algunos autores como RÍOS MARTÍN¹⁵¹ exponen una serie de circunstancias que pueden darse en personas que llevan internas en prisión más de 10-15 años: La cárcel provoca en las personas una sensación de permanente peligro; el internamiento genera un intenso sentimiento de indefensión; provoca una profunda desconfianza como medio de supervivencia; genera un sentimiento irracional de odio hacia los demás; y finalmente, el reo alcanza el fenómeno conocido por la doctrina como la “prisionización”.

Este término hace referencia a los síntomas mentales y a la situación psicológica que le queda inherente al condenado tras pasar de manera indefinida 20, 30 o 40 años en la misma celda y patio. Actitudes que pueden ir desde hacerse un simple tatuaje o

¹⁴⁸ Véase, entre otras, SSTC 150/1991, de 4 de julio, FJ 4; y 91/2000, de 30 de marzo, FJ 9.

¹⁴⁹ En este sentido, SSTC 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 14; y 81/1997, de 22 de abril, FJ 3.

¹⁵⁰ STC 112/1994, de 24 de junio, FJ 4.

¹⁵¹ RÍOS MARTÍN, La prisión perpetua en España, 2013, 144-154.

modificar la expresión facial, a la tendencia a autolesionarse y a tomar antidepresivos, por no ser capaces de adaptarse a la “vida real”. La prisionización inculca lo peor de la prisión al reo, agudizando su comportamiento delictivo. Como recogen diferentes psicólogos, la vida en prisión puede provocar la aparición de una “subcultura” específica a la que ha de adaptarse el recluso si quiere sobrevivir a las normas que le imponen los compañeros.¹⁵²

La LOGP prevé un tratamiento penitenciario excesivamente formalista que no se corresponde con los últimos informes del Comité contra la Tortura. Los datos del mismo revelan que el ratio de funcionarios por número de presos viene incrementándose paulatinamente desde principios del siglo XXI, siendo de 2,5 de presos por funcionario aproximadamente en la actualidad.¹⁵³ Además, la mayor parte de la plantilla de los centros penitenciarios viene compuesta por seguridad y vigilancia, mientras que el personal técnico: psicólogos, pedagogos, sociólogos, trabajadores sociales o juristas, y todos aquellos que podrían llevar a cabo una función reeducadora, es realmente escaso.¹⁵⁴ Es frecuente que en algunos centros dispongan de apenas uno o dos psicólogos para 500 internos, que casi la mitad de los reclusos no les hayan visto nunca por las instalaciones penitenciarias, o que las conversaciones entre ambos no alcancen siquiera los 10-15 minutos de media.

A cuento de la “prisonización”, el propio Comité Europeo para la prevención de torturas y de penas o tratos inhumanos o degradantes declaró en el año 2000 que “cualquier encarcelamiento de larga duración puede entrañar efectos desocializadores para los reclusos. Además hay que señalar el hecho de que estos reclusos se institucionalizan, que pueden quedar afectados por una serie de problemas psicológicos (como la pérdida de autoestima y deterioro de las capacidades sociales) y que tienden a despegarse cada vez mas de la sociedad a la que la mayor parte de ellos acabará por volver. Según criterio del Comité, los tratamientos propuestos a los reclusos que cumplen penas de larga duración deberían tener una naturaleza destinada a compensar estos efectos de manera positiva y proactiva”.

Como establece el art. 13 LOGP: “Los establecimientos penitenciarios deberán contar en el conjunto de sus dependencias con servicios idóneos de dormitorios

¹⁵² En este sentido, FERNÁNDEZ BERMEJO, LL penal, 110 (2014), 82. Este autor aboga por fomentar el fin de resocialización para reducir la aparición del fenómeno de la prisionización.

¹⁵³ Esto se debe en gran medida al descenso del gasto destinado al Presupuesto de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y al organismo autónomo de trabajo, prestaciones y formación como consecuencia de la crisis económica de los últimos años.

¹⁵⁴ Como ejemplo al respecto, en el centro penitenciario de Topas (Salamanca), donde se encuentran internos más de 1.500 presos (aunque su aforo inicial era de 1.008), el Equipo de Tratamiento está compuesto por 5 psicólogos, 4 juristas, 10 trabajadores sociales, 10 educadores y un coordinador de trabajo social. La proporción de personal por preso no deja lugar a ninguna duda de la insuficiencia del servicio penitenciario para un número tan elevado de reclusos.

individuales, enfermerías, escuelas, biblioteca, instalaciones deportivas y recreativas, talleres, patios, peluquería, cocina, comedor, locutorios individualizados, departamento de información al exterior, salas anejas de relaciones familiares y, en general, todos aquellos que permitan desarrollar en ellos una vida de colectividad organizada y una adecuada clasificación de los internos, en relación con los fines que en cada caso les están atribuidos”. Por su parte, el art. 14 indica que la Administración penitenciaria velará para que los centros estén dotados de medios personales y materiales para cumplir con sus fines.¹⁵⁵

Aunque como se ha visto, esto rara vez se cumple. Las carencias en infraestructuras, los problemas con las condiciones de habitabilidad y hacinamiento, la insuficiencia de talleres educativos, y falta de profesionales suponen un grave impedimento para el desarrollo social del condenado en el establecimiento penitenciario, y por tanto para la reeducación que exige el precepto 25.2 CE.¹⁵⁶ Cada año la población penitenciaria española aumenta, principalmente porque los condenados reclusos están un mayor número de años internos, sin que la actividad delictiva se incremente de igual modo. Mi conclusión al respecto es puramente matemática: si los medios disponibles eran pocos hace unos años, entre más presos serán menos, por lo que habría que plantearse qué se está haciendo mal y hacia donde se dirige nuestra política penal-penitenciaria.

- El mandato constitucional de reinserción social

El segundo de los contenidos que promulga el art. 25.2 CE es la reinserción social, fin básico de nuestro sistema penal basado en contribuir en el avance en el futuro retorno del condenado a la vida en sociedad. Como acertadamente recoge CUERDA RIEZU¹⁵⁷, si bien es posible que la cadena perpetua no revisable pueda reeducar propiamente dicho al condenado, no alberga ningún tipo de duda que esta sanción es incompatible con la finalidad de reinserción al pasar el condenado a estar segregado definitivamente de la sociedad. ROXIN¹⁵⁸ también manifiesta la importancia de la resocialización como medio para combatir la criminalidad, desde el punto de vista de la prevención especial, debido a que “la resocialización ayuda al delincuente en la reintegración social y eleva sus oportunidades en la vida. Pero también ayuda a la

¹⁵⁵ Parte de la doctrina experta en Derecho penal y penitenciario achacan las carencias en el sistema penitenciario español a la descoordinación existente entre la normativa penal y la penitenciaria, siendo además esta última mucho más flexible en la práctica de lo que viene expresamente en las leyes.

¹⁵⁶ Un aspecto muy criticado por los propios presos es la vulneración cada vez frecuente del art. 19 LOGP “Todos los internos se alojarán en celdas individuales”, ya que reduce la intimidad del recluso y afecta notoriamente a su desarrollo personal y social, provocando conflictos con otros internos por cuestiones de convivencia.

¹⁵⁷ CUERDA RIEZU, Penas muy largas, 2011, 65.

¹⁵⁸ ROXIN, Fines de la pena, 2007, 74.

generalidad, porque un autor que no vuelve a cometer delitos ya no representa un riesgo, y con ello, mejora las condiciones de vida de todos.”

Como ya se ha manifestado en las líneas precedentes, vivir en prisión durante estancias extremadamente largas genera unas consecuencias profundamente graves en la mentalidad del reo, que influyen de manera decisiva en el desarraigo social del mismo: desconfianza frente a todos, actitudes agresivas, deseo de venganza, trastornos psicológicos, dificultad para relacionarse, consumo de drogas,... No parece que una pena de por vida pueda minimizar estos efectos, al contrario, puesto que elimina cualquier esperanza para el reo de alcanzar el objetivo de la reinserción social y le sumerge en un proceso de prisionización del que es muy difícil salir.

Recordamos al respecto la jurisprudencia del TEDH en su sentencia *Dickson c. Reino Unido*¹⁵⁹, donde declara “Los criminólogos se refieren a las diferentes funciones asignadas tradicionalmente a la pena y que incluyen, concretamente, el justo castigo, la disuasión, la protección de la sociedad y la reinserción. Sin embargo, se observa en estos últimos años una tendencia a conceder una mayor importancia al objetivo de la reinserción, como demuestran especialmente los instrumentos jurídicos elaborados bajo la égida del Consejo de Europa. Reconocida en otros tiempos como un medio para prevenir la reincidencia, la reinserción según una concepción más reciente y positiva, implica más bien la idea de una readaptación social para la promoción de la responsabilidad personal. Este objetivo se ve reforzado por el desarrollo del principio de progresión: a medida que cumple su pena, un recluso debería progresar a través del sistema penitenciario, pasando por el periodo inicial de privación de libertad, en el que se puede poner el acento en el castigo y la represión, hasta las fases posteriores de la pena de prisión, en las que se debería privilegiar la preparación para la puesta en libertad”.

La Comisión de Estudios e Informes del CGPJ alega que, aunque según la jurisprudencia del TEDH la cadena perpetua revisable no es necesariamente contraria al art. 3 del Convenio en el que se prohíben las penas y tratos degradantes e inhumanos, nada dice este precepto respecto a la reinserción social que exige el art. 25.2 CE. Por lo que en opinión del Tribunal Europeo, depende precisamente de la posibilidad de reinserción que la pena en cuestión sea considerada inhumana o degradante. Y añade que tampoco tiene que tenerse en cuenta los pronunciamientos de los TC de los distintos países europeos, puesto que “ninguna de las Constituciones de los Estados citados contiene una cláusula íntegramente equiparable a la establecida en el inciso primero del art. 25.2”.¹⁶⁰

¹⁵⁹ STEDH, de la Gran Sala, de 4 de diciembre de 2007, § 28, *Dickson c. Reino Unido*.

¹⁶⁰ Informe de la Comisión de Estudios e Informes del CGPJ sobre el ARCP de 2012.

Para finalizar este epígrafe me gustaría exponer las palabras de NÚÑEZ FERNÁNDEZ¹⁶¹ en su crítica hacia el APRCP y al cambio político-criminal que se está llevando a cabo con las últimas modificaciones al texto penal, al recoger que “Se continua con la línea de terminar con la esencia del sistema progresivo y de la *individualización científica* que define el Ordenamiento penitenciario español, cuando, en muchas ocasiones la ejecución de la prisión se hace girar en torno a la gravedad de los hechos cometidos por el penado y no a su potencial de reinserción”.

2.4 Vulnera el principio de legalidad

Una de las bases que cimentan el Estado de Derecho es el valor de la *seguridad jurídica* (art. 9.3 CE), que no es más que la previsibilidad de las consecuencias jurídicas de los comportamientos de los ciudadanos. En el ámbito del Derecho penal, la seguridad jurídica se incorpora específicamente al *principio de legalidad penal*, concretamente en su dimensión de determinación o certeza de la norma penal, como se deriva del precepto 25.1 de la Carta Magna:

“Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento”.

El principio de legalidad prohíbe las sanciones arbitrarias e indeterminadas e impone un sistema de determinación de la pena basado en el respeto absoluto a la ley, quedando completamente delimitada la consecuencia jurídica a imponer y los límites mínimos y máximos dentro de los cuales el Juez debe ajustar la pena al hecho cometido. De este modo, el mandato de determinación exige que las penas estén perfectamente tipificadas en la ley en cuanto a su naturaleza y duración. La cadena perpetua (sea revisable o no) está determinada en cuanto al inicio de su cumplimiento pero no en cuanto al fin, porque tanto la muerte del reo en caso de la irreducible, como la posibilidad de alcanzar la suspensión tras pasar favorablemente el informe de la Junta de Tratamiento en la revisable, son dos momentos completamente inciertos que hacen imposible prever al condenado en qué momento va a concluir el cumplimiento de la misma.¹⁶²

¹⁶¹ NÚÑEZ FERNÁNDEZ, LL penal, 110 (2014), 66. En la misma línea argumental, FERNÁNDEZ BERMEJO, LL penal, 110 (2014), 83, señala que “si lo que se pretende es no atentar contra los fines de la reeducación y reinserción social, habrá de respetarse en todo caso a la individualización penitenciaria, atendiendo a la evolución de la personalidad de los condenados”, eliminando los límites que se impongan por la Administración penitenciaria con la excepción del de no acceder directamente al cuarto grado penitenciario (art. 72.3 LOGP).

¹⁶² El TC ha declarado que se vulnera el mandato de certeza cuando el límite máximo de la sanción quede absolutamente indeterminado en la norma. Aunque en la cadena perpetua el límite máximo sea la muerte del condenado, su duración es indeterminada debido a que dependerá de algo incierto como es la esperanza de vida del interno.

Además, a diferencia de otras penas, en la prisión perpetua el tribunal que enjuicia el hecho no goza de un margen de discrecionalidad para tener en cuenta las posibles circunstancias agravantes o atenuantes o la personalidad del delincuente. Sea como sea la comisión del delito y su autor, la pena va a ser invariablemente la misma.¹⁶³ En efecto, la nueva regulación supone una limitación de las alternativas punitivas para los jueces puesto que en la mayor parte de los casos la pena “deberá imponerse obligatoriamente incluso aunque la gravedad del hecho y las circunstancias personales desaconsejen tal castigo”.¹⁶⁴ Por lo tanto, parece existir una grave incompatibilidad también con el principio de proporcionalidad como se tratará a continuación, en la medida que, con base en la gravedad del hecho cometido y del daño causado, su imposición rebasa sobradamente los límites de la culpabilidad del agente.

Existe numerosa jurisprudencia del TC que reflexiona sobre este aspecto y nos indica que se vulnera el *principio de taxatividad penal* cuando, estando prevista en la norma un límite mínimo y máximo de una sanción, la norma no contiene criterios para la graduación de las sanciones y para establecer la correspondencia entre la gravedad del delito y la propia sanción, dejando demasiado margen de discrecionalidad y a su eventual desproporción.¹⁶⁵ En un sentido similar, conviene rescatar la apreciación de la STEDH de 28 de mayo de 2002, caso *Stafford c. Reino Unido*, donde señala: “Pensamos que una pena sin limitación de duración que durante su ejecución sólo está determinada sobre la base de los criterios discrecionales mencionados más arriba, especialmente en referencia a elementos de evaluación que no se relacionan con el momento de comisión de la infracción sino que son posteriores a la misma, difícilmente podría ser considerada como prevista por ley en el sentido del artículo 7.1 del Convenio.”

Como conclusión a este punto, convendría rescatar las acertadas palabras que LASCURAÍN SÁNCHEZ¹⁶⁶ dedica a este apartado: “Quizás podamos permitirnos cierta incertidumbre jurídica cuando se trata del acceso a una subvención o de la imposición de una multa administrativa, pero nunca a la hora de prevenir cuándo podemos dar con nuestros huesos en la cárcel y cuándo podremos sacarlos de la misma. No a la hora de definir qué es un delito o cuánto se nos va a penar, si 20 años, si más, si esto depende de que el delito lo requiera a juicio del juez, si depende no del compromiso de que no vamos a delinquir sino de algo tan íntimo o inexigible como el arrepentimiento por lo ya hecho. Nos va en ello la seguridad más elemental; nos va en ello que el Estado sea de

¹⁶³ Cfr. CUERDA RIEZU, penas muy largas, 2011, 86.

¹⁶⁴ CÁMARA ARROLLO, UNIR, 25-07-2013.

¹⁶⁵ En este sentido, SSTC 34/1996, de 11 de marzo, FJ 5; 25/2002, de 11 de febrero, FJ 6; y 100/2003, de 2 de junio, FJ 6. Cfr. también el Informe del CGPJ de enero de 2013, 42.

¹⁶⁶ LASCURAÍN SÁNCHEZ, Los males, El Mundo, 2010.

Derecho.” Por tanto, no cabe duda de que la inseguridad jurídica que lleva implícita la pena de prisión permanente revisable respecto a su extensión máxima hace que resulte verdaderamente difícil compatibilizarla con el art. 25.1 CE.¹⁶⁷

2.5 Vulnera el principio de igualdad

Otro de los elementos fundamentales en la constitución de un Estado democrático de Derecho es el principio de igualdad, regulado en el art. 14 CE, que dice que “*Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social*”. Es un derecho relativo que impone un trato igual para casos iguales y uno desigual para los diferentes.

El principio de igualdad en el ámbito penal opera en tres fases distintas. La primera de ellas es la *fase de selección legislativa de la pena*, donde se busca una sanción adecuada y proporcional al grado de afección producido.¹⁶⁸ La prisión permanente revisable no satisface las exigencias del principio de igualdad en esta fase al menos, en tres supuestos distintos que nos describe DAUNIS RODRÍGUEZ.¹⁶⁹

Por un lado, porque se prevé esta sanción tanto para sujetos que con ánimo de destruir total o parcialmente un grupo nacional, racial o religioso determinado produzcan una lesión grave o atentado a su libertad sexual, como para aquellos que con el mismo propósito genocida, alcancen el resultado de muerte del sujeto pasivo, algo “chocante” si tenemos en cuenta que en el segundo supuesto, el reproche penal debería ser mayor al ser más lesivo el daño producido. En segundo lugar, porque se dispone la prisión permanente revisable para supuestos de asesinato precedidos por un delito de libertad sexual, sin especificar qué atentado concreto es merecedor de esta sanción, atendiendo a la variedad de injustos de este tipo (ya sea violación, abuso, acoso,...), y sin justificar porqué no se impone la misma pena a delitos de asesinato seguidos de otros comportamientos de similar desvalor como puede ser la integridad moral o la libertad. Y finalmente, cuando se prevé la prisión permanente revisable para los homicidios cometidos en el seno de una organización terrorista, y en cambio no está

¹⁶⁷ Siguiendo la misma línea argumental, NÚÑEZ FERNÁNDEZ, LL Penal, 110, (2014) critica la regulación del APRCP por utilizar términos tan difusos e indeterminados como “parte relevante” o “parte mínima” de la condena.

¹⁶⁸ Conviene destacar la STC 59/2008, de 14 de mayo, FJ 10, en la que se indica que “el baremo de esta relación de proporcionalidad ha de ser de contenido mínimo, atendiendo a la exclusiva potestad legislativa en la definición de los delitos y en la asignación de penas y en convergencia con el baremo propio de la proporcionalidad de las penas.” Añade que “sólo concurrirá una desproporción constitucionalmente reprochable *ex* principio de igualdad entre las consecuencias de los supuestos diferenciados cuando quepa apreciar entre ellos un desequilibrio patente y excesivo o irrazonable... a partir de las pautas axiológicas constitucionalmente indiscutibles y de su concreción en la propia actividad legislativa”.

¹⁶⁹ Cfr. DAUNIS RODRÍGUEZ, RDPC, 10 (2013) 103-106.

prevista para supuestos de similar gravedad como puede ser aquellos homicidios perpetrados dentro de una organización criminal.

La segunda de ellas es la *fase de determinación judicial* de la pena, momento en el cual el Juez o Tribunal debe concretar la pena para el delito cometido con base en los hechos probados, las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, atenuantes, agravantes, la autoría y participación y el grado de ejecución de cada caso. Como se ha visto, la prisión permanente revisable no permite ningún margen de discrecionalidad al Tribunal para determinar qué pena resultaría más adecuada y proporcional a la conducta llevada a cabo por el sujeto culpable, y no existe ningún límite mínimo ni máximo para esta sanción.

Algunos autores también alegan la incompatibilidad de la prisión perpetua revisable con el principio de igualdad argumentando que el tiempo de cumplimiento de condena no va a depender exclusivamente de factores penales ni criminológicos sino que también lo hará por cuestiones biológicas como la complexión personal y resistencia física-psíquica del reo. Es decir en el caso de dos condenados por el mismo hecho a la misma pena, resultará mayor la aflicción de esta pena para los sujetos más jóvenes, que pasarán más años encerrados.¹⁷⁰ La jurisprudencia del TC¹⁷¹ ha considerado que nos encontramos ante una desigualdad de trato prohibida al legislador “ya que resulta artificiosa e injustificada, por no venir fundada en criterios objetivos suficientemente razonable, de acuerdo con puntos de vista o juicios de valor generalmente aceptados”.¹⁷²

Y por último, el principio de igualdad en el ámbito de la prisión permanente revisable debe presidir la *fase de ejecución penal*, que debe preservar un cumplimiento igualitario para todas las personas sancionadas con esta pena, respetando las particularidades del condenado y sus diferentes necesidades de tratamiento. La excepción a esta regla general se da cuando esos tratos diferenciados de la Administración penitenciaria preserven los DDFF de la Constitución y respondan a necesidades “razonables” desde la perspectiva del ordenamiento penal y sus fines y de las características personales del sujeto en su estancia en el centro penitenciario. De este modo, quedan excluidas como conductas acordes a Derecho, todos aquellos comportamientos de la Administración penitenciaria que provengan de motivaciones por cuestiones raciales, religiosas, sociales o análogas.

¹⁷⁰ En este sentido, GROIZARD Y GÓMEZ DE LA SERNA, Código penal de 1870, 1903, 183. Desde otra perspectiva, algunos autores como CERVELLÓ DONDERIS, Presente y futuro de la Constitución española de 1978, 2005, 223, afirman que la pena de prisión permanente revisable también desplegará diversos efectos en función de la edad del infractor, siendo en los primeros años de edad penal más propensa a su resocialización.

¹⁷¹ Véase STC 22/2010, de 27 de abril, FJ 4.

¹⁷² CUERDA RIEZU, Penas muy largas, 2011, 88.

Es decir, que como señala al final de su obra ROIG TORRES¹⁷³, la prisión permanente revisable parece atender más a fines políticos y electorales que a cuestiones de eficacia y prevención de delitos, poniendo en duda el respeto al principio de igualdad al unificar a efectos punitivos una variedad de conductas de gravedad heterogénea que poco o nada tienen que ver, demostrando así la inseguridad del legislador a la hora de seleccionar las conductas que merecían esta sanción y que se fueron añadiendo sin criterio político-criminal alguno y basado en el llamado “populismo punitivo”.

2.6 Otras posibles consecuencias

Aparte de las razones de orden jurídico que han sido expuestas para cuestionar la idoneidad y constitucionalidad de la prisión permanente revisable, como plantea RÍOS MARTÍN¹⁷⁴, conviene tener en cuenta otros aspectos problemáticos que pueden surgir a raíz de la regulación de esta nueva pena.

Desde un punto de vista puramente económico, habría que estudiar como afectaría a las arcas de nuestro Estado hacer frente a los cerca de 36.000 euros anuales que cuesta aproximadamente el mantenimiento de una persona en nuestras cárceles. ¿Dispone la Administración penitenciaria de esos recursos materiales y personales necesarios para costear a cada vez más y más presos?. ¿Se ha elaborado un informe del impacto económico que supondría en nuestro presupuesto si tenemos en cuenta que la tendencia es a tener más encarcelados y durante más tiempo?. Puede resultar paradójico cómo en tiempos de austeridad y de contención del gasto social se incrementa el rigor de las penas privativas de libertad y con ello, el aumento de las prisiones.

Esto está estrechamente relacionado con el problema del hacinamiento en las cárceles españolas. Como se comentó con anterioridad, si ya de por sí los centros penitenciarios disponen de pocos medios tanto humanos (personal educativo, psicólogos,...) como materiales (espacio en las celdas, actividades, talleres,...), ¿qué va a pasar si se incrementa el número de reclusos y no lo hace correlativamente el número de recursos que dispone la Administración para garantizarles una vida digna y orientada a su reinserción social?. Y por otro lado, ¿qué solución da el legislador a que las cárceles se estén convirtiendo en geriátricos? Actualmente hay más de 350 personas mayores de 70 años en prisión, y este dato viene aumentando notoriamente en los últimos años, y no precisamente porque delincan más sino porque cada vez las condenas son más largas, lo que también genera un importante coste, obviando las razones de orden jurídico o ético que puedan haber.

¹⁷³ Cfr. ROIG TORRES, CPC, 11 (2013), 144.

¹⁷⁴ En este sentido, RÍOS MARTÍN, prisión perpetua en España, 2013, 166.

Y también habría que valorar en qué lugar quedan los trabajadores de la Administración penitenciaria frente a personas que ya no tienen nada que perder porque se les ha arrebatado cualquier expectativa de libertad. Sujetos que por el desarrollo del fenómeno conocido como prisionización, pueden atacar en cualquier momento los bienes jurídicos o la integridad física del personal de la prisión ¿Qué función van a tener a partir de ahora el conjunto de profesionales dedicados a la reeducación y reinserción del reo? ¿En qué condiciones quedarán los reos condenados a penas eternas, encerrados en el establecimiento viendo pasar los días, sin motivación alguna ni actividades específicas destinadas a preparar su vuelta a la sociedad?.

A todo esto, hay que sumar una cuestión que está presente en cualquier pena privativa de libertad, pero que adquiere una mayor relevancia en los casos de cadena o prisión perpetua: el error judicial. Entra dentro del sistema judicial la posibilidad de que un juez, ya sea por juicios paralelos, presión mediática, una errónea actuación policial, una desinteresada defensa, imposibilidad de demostrar la inocencia, o simplemente por coincidencias imprevistas, se equivoque en su valoración y absuelva a un culpable o condene a un inocente.¹⁷⁵ Esta segunda posibilidad (menos habitual) resulta siempre más gravosa para el perjudicado y en el caso de que fuese condenado a cadena perpetua, sus consecuencias serían irreversibles.¹⁷⁶ Hay que tener presente que revisar una sentencia condenatoria es realmente difícil. El único mecanismo que prevé nuestra legislación es el *recurso extraordinario de revisión*, que sólo se puede iniciar si ha aparecido una prueba nueva que no haya sido valorada en el juicio que resulte clave para evidenciar la inocencia del acusado. Sin olvidar, que las indemnizaciones que se abonan para compensar la estancia indebida en prisión no subsanan el daño moral, e incluso físico, que se genera para cualquier persona en el paso por la cárcel.

Para finalizar este bloque, me gustaría rescatar la opinión que a modo de conclusión expone CUERDA RIEZU¹⁷⁷ al preguntarse por qué la cadena perpetua, incluso siendo revisable, así como las penas muy largas de prisión, son inequívocamente

¹⁷⁵ En EEUU a lo largo del siglo XX hubo 400 personas condenadas a muerte que eran inocentes, 34 de las cuáles fueron finalmente ejecutadas. Diversos estudios han afirmado que más del 80% de las condenas a inocentes tiene su base en un error en el reconocimiento de identificación en rueda, lo que hace que algunos juristas critican la forma en la que se lleva a cabo esta diligencia, ya que en muchas ocasiones no resulta fácil identificar sin género de dudas a quien cometió el injusto.

¹⁷⁶ Como señala RÍOS MARTÍN, prisión perpetua en España, 2013, 164, una vez que se está cumpliendo condena en la cárcel, para acceder a los beneficios penitenciarios como los permisos de salida o las clasificaciones en regímenes abiertos, el equipo técnico del centro exige asumir la responsabilidad por los delitos cometidos. Una declaración expresa de culpabilidad haría que la “verdad judicial” de la sentencia se asuma como la “verdad real”, por lo que el reo deberá elegir entre admitir la comisión del delito, a pesar de no haberlo cometido, o continuar negando su participación con las consecuencias que ello conllevaría.

¹⁷⁷ CUERDA RIEZU, Penas muy largas, 2011, 109.

inconstitucionales en nuestro ordenamiento: “Porque vulneran el mandato constitucional de que las penas y medidas privativas de libertad estén orientadas a la reinserción social (artículo 25.2 CE); porque están indeterminadas respecto a la fecha de término de cumplimiento (artículo 25.1 CE), originando así una desigualdad injustificada (artículo 14 CE), derivada de la diferente duración de la vida del recluso; y porque representan penas o tratos inhumanos o degradantes, aunque sean revisables (artículo 15 CE)”.

Capítulo IV

1. Opinión de la sociedad

No se puede pasar por alto en este estudio el gran debate que existe a día de hoy acerca de la adecuación y eficacia de nuestro sistema jurídico. Como se viene avisando a lo largo de las páginas precedentes, existe en nuestra sociedad la tendencia a buscar endurecer las penas en aras de un mayor efectividad, sobre todo en lo que concierne a delitos más violentos y rechazables que aparecen día sí y día también en los principales programas televisivos.

Casi dos meses antes de que fuese definitivamente aprobada en el Congreso de los Diputados por LO 1/2015, de 30 de marzo de 2015, la prisión permanente revisable fue objeto de numerosas encuestas para conocer qué opinión tenía la sociedad acerca de esta nueva (y polémica) medida. El 9 de febrero de 2015, salió publicado en el Diario el País los resultados de una consulta ciudadana que realizó Metroscopia, que preguntaba lo siguiente: **¿Está de acuerdo con la implantación en España de la pena de cadena perpetua?**

Como se deriva de los datos obtenidos, la aceptación de la prisión permanente revisable es mayoritaria en la población española. Un 20% de los encuestados afirmaron que sí están a favor de su implantación, mientras que el 47% lo hace siempre que ésta sea revisable. Por el contrario, un 18% de la población está en contra de la cadena perpetua en cualquier caso, y un 15% declara que no sabe o no contesta. Por tanto, en esta encuesta los españoles partidarios de la cadena perpetua, sea o no revisable, son casi cuatro veces más que los opuestos a ella: un 67% frente a un 18%.¹⁷⁸ Desglosando por género, encontramos que las mujeres aceptan esta medida en un 3% más que los hombres, sobre todo entre las más jóvenes. Y analizando la edad, destaca el 71% de apoyo de los ciudadanos entre 18 y 34 años; un 69% en la franja de 35 a 54 años; y un 60% entre los mayores de 55 años.¹⁷⁹

Más interesante resulta comparar los resultados en función de la intención de voto de los ciudadanos. Recordemos que el día 26 de marzo de 2015, el Congreso aprobó definitivamente esta reforma con 181 votos a favor (mayoría absoluta del PP y el apoyo de UPN), la abstención de Foro Asturias y 138 votos en contra de los demás grupos parlamentarios. Fue la primera vez que un único partido aprueba en solitario una ley tan importante y con un cambio de enfoque penal tan notable, argumentando en

¹⁷⁸ Aunque todo sea dicho, este apoyo se ha reducido en 15 puntos porcentuales respecto al arrojado en la encuesta llevada a cabo en 2010 (82% a favor).

¹⁷⁹ Fuente: Encuesta de Metroscopia, Diario el País, 09-02-2015.

palabras del popular Leopoldo Barreda “que es imprescindible y responde a las demandas de los ciudadanos”. Esto le valió la crítica de otros grupos políticos como UPyD, quien a través de Rosa Díez preguntó al Gobierno: “¿No les provoca ninguna duda que todos los demás grupos y los expertos lo rechacen?”, mientras que para el socialista Julio Villarubia, “Esta reforma es innecesaria, es un paso atrás en el sistema de derechos y libertades y se basa en un populismo punitivo”.¹⁸⁰

Sin embargo, ¿se corresponde la opción elegida por los votantes de cada grupo parlamentario con los programas de los mismos?. Los votantes de tres partidos políticos destacan por encima del resto con un porcentaje de apoyo a la cadena perpetua revisable cercano al 90%: Los del PP la respaldan en un 89%; los de Ciudadanos en un 88%; mientras que en UPyD, el 90% son partidarios de esta medida. En el PSOE, los simpatizantes se encuentran divididos por completo, ya que un 50% muestra su apoyo a esta nueva pena, y la otra mitad la rechaza. En Podemos, el 52% de sus eventuales votantes se declaran a favor de esta figura penal, y en Izquierda Unida, el 47%.¹⁸¹ Por tanto, parece que sólo los votantes y simpatizantes del PP y los de IU coinciden con sus respectivos grupos parlamentarios, lo que vuelve a poner de manifiesto que al margen de siglas y cuestiones ideológicas, a primera vista la mayoría de la población española está de acuerdo con la implantación de la cadena perpetua (revisable).

He querido saber más acerca de qué opina realmente la población española acerca de la inclusión en nuestro ordenamiento jurídico de la pena de prisión permanente revisable. En la parte final de este estudio, he elaborado una pequeña encuesta a un grupo de 40 personas, a fin de conocer de primera mano qué sensaciones genera en la calle una medida tan polémica y actual como es la que nos concierne.

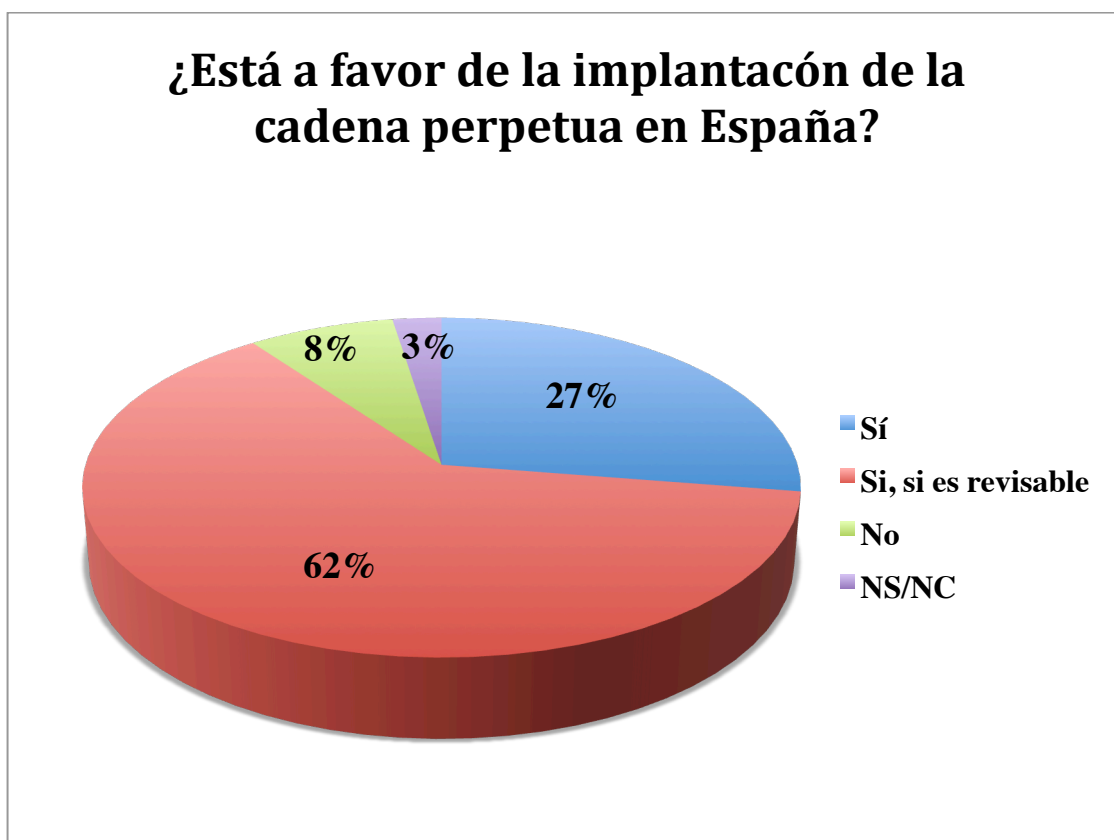
Las primera pregunta en cuestión es una verdaderamente simple, aunque presentaba muchas matizaciones: **¿Está a favor de la cadena perpetua en España?** Con el objetivo de simplificar los resultados y evitar contestaciones contradictorias, expuse cuáles serían las tres posibles respuestas: **a) Sí; b) Sí, sólo si es revisable; y c) No.** Indiqué ante todo, que esta pena se impondría a delitos especialmente graves¹⁸² y que la primera respuesta conllevaría aceptar la cadena perpetua de forma literal, es decir, la imposibilidad total de que el reo condenado saliese en libertad el resto de su vida. Y que en la segunda opción la revisión se llevaría a cabo a los 25-30 años de

¹⁸⁰ Más de 60 catedráticos de Derecho Penal de 33 universidades públicas, así como organizaciones como *Greenpeace* y Amnistía Internacional hicieron públicos manifiestos en contra del nuevo CP.

¹⁸¹ Conviene añadir que en las respuestas de votantes de todos los partidos políticos, el porcentaje de quienes apoyan la reclusión revisable es superior al de quienes la aceptan sin ningún perdón ni posibilidad de salir en un futuro.

¹⁸² Los que se prevén sancionables con la pena de prisión permanente revisable en la última reforma del CP: asesinatos especialmente graves del art. 140, delitos de genocidio, lesa humanidad, terrorismo, etc.

condena, y que en caso de que el informe de la Junta de Tratamiento fuese favorable, el reo pasaría a libertad condicional si cumple con todos los requisitos legalmente preestablecidos. En el gráfico inferior se muestran los resultados obtenidos.



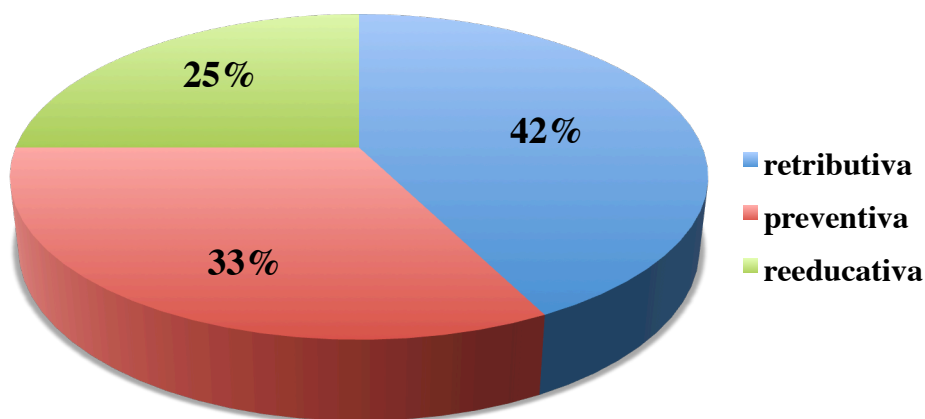
La respuesta de la primera cuestión, pone de manifiesto que la muestra seleccionada están mayoritariamente a favor de la cadena perpetua en España, sea revisable o no, con un 87% de aprobación. Y sorprende que sólo el 5% de los encuestados rechacen por completo esta medida. Frente al innegable argumento de que la ciudadanía quiere esta sanción, podría alegarse que la información que he dado de la misma antes de que respondiesen no ha sido la mas completa, sino un par de pinceladas de lo que significa y sus posibles consecuencias, sin ahondar en cuestiones tales como las escasísimas posibilidades de acceder a la revisión, la baja tasa de reincidencia en España de delitos muy graves, o el sufrimiento físico y psicológico que padece el reo condenado a decenas de años en prisión.¹⁸³

La segunda cuestión está más orientada a la finalidad de las penas privativas de libertad, aunque estrechamente ligada con la cadena perpetua y era la siguiente: **¿Cuál de estas funciones tiene más importancia o significado para usted y cuál menos, en**

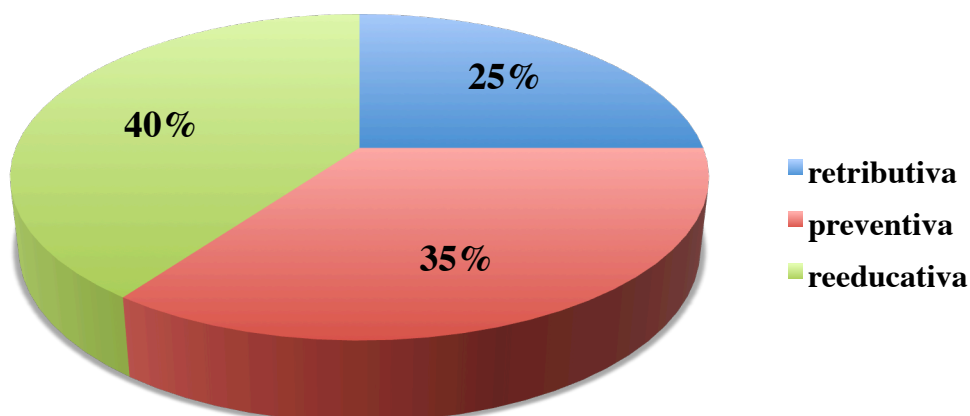
¹⁸³ Como posibles respuestas de la primera pregunta sólo aceptada una de las tres: a) si; b) si sólo si es revisable; o c) no, a pesar de que algunos de los encuestados hacían matizaciones o apreciaciones del tipo “Estoy a favor de la cadena perpetua sin ser revisable sólo para casos de asesinos o violadores reincidentes”, indicándoles en ese caso que la sanción se preveía para los delitos graves ya comentados y que debían optar por una u otra opción.

una pena privativa de libertad? Al igual que en la anterior, previamente exponía las posibles respuestas, que eran los tres fines por excelencia de la pena: **a) retributivo**, es decir, la prisión es un castigo por algo que alguien haya hecho mal y que debe pagar por ello; **b) preventivo**, en el sentido de que la cárcel es un lugar destinado para aislar al delincuente de la sociedad, evitando así que vuelva a cometer otro delito; o **c) reeducativo**, que la prisión está orientada a su reinserción en la sociedad para que el día de mañana salga en libertad y pueda llevar una vida acorde a Derecho. A continuación se adjunta los gráficos que muestran los resultados.

¿Cuál de estas funciones de la pena privativa de libertad tiene para usted mayor importancia?



¿Cuál de estas funciones de la pena privativa de libertad tiene para usted menos importancia?



A la vista de los resultados mostrados en los gráficos, se observa que en esta segunda pregunta las respuestas han sido más heterogéneas y variadas que en la

primera. La función retributiva o de castigo se erige como la que más importancia tiene o mejor define el significado de la pena privativa de libertad en sentido general para los españoles, con un 42%. En segundo lugar se encuentra la función de prevención o aislamiento social del reo y cierra el orden de preferencias de la población el fin reeducativo y resocializador de la pena, con un 25%. Correlativamente y con unos porcentajes similares, la función reeducativa es la que menos importancia o significado tiene para los encuestados, seguida de la preventiva y, por último, la retributiva.

Cabe mencionar que mientras en el apoyo o rechazo a la cadena perpetua, la mayoría de los participantes en esta encuesta se mostraban favorables a la imposición de esta pena en nuestro ordenamiento (87%, aunque el 60% sólo si era revisable), a la hora de valorar y ponderar qué fines representan mejor la pena de prisión existen mas opiniones contrarias. Aunque el orden de preferencia que se ha elegido con más frecuencia ha sido el de: 1º) castigo; 2º) prevención; y 3º) reeducación, que precisamente coincide con la finalidad y justificación real de la cadena perpetua tradicional, no son pocos los que, apoyando una prisión permanente de carácter revisable como la nuestra, abogan porque el fin principal de la pena sea la reeducación y reinserción social.

Sin embargo, en este punto surge una cuestión de trascendental importancia como es que hasta qué punto deben afectar las estadísticas que reflejan el sentimiento popular al legislador y a los poderes públicos. Visto la disconformidad de la población con el sistema de penas en nuestro país, por qué debe elegir el legislador: por mantener la fidelidad de los votantes satisfaciendo sus demandas, o por tomar decisiones que, aún siendo impopulares, favorece el interés general de todos. Hay que recordar que una de las justificaciones de la nueva pena en la Exposición de Motivos del APRCP y en la propia LO 1/2015, es que “las resoluciones judiciales sean percibidas en la sociedad como justas”.

Algunos de los autores optan por la primera opción, como SÁEZ MALCEÑIDO¹⁸⁴, quien opina que “el legislador debe hacerse eco del sentir al que representa y no de opiniones de sectores especializados, y por esta misma razón, parcelarios, de forma que si la sociedad demanda un mayor aislamiento para quienes cometen los más execrables delitos, debe adecuarse la ponderación de los fines de la pena, entre los que también se incluyen la denostada retribución”. No obstante, la doctrina mayoritaria critica esta indeterminación del texto que tiene como fin único, el contentar a la sociedad y a la opinión pública, ya que ¿cómo se mide en términos de eficacia un objetivo político criminal como el de que las resoluciones sean consideradas “justas” por la sociedad?. ¿A través de recogidas de firmas y encuestas de opinión?. Parece que en Derecho, a

¹⁸⁴ SÁEZ MALCEÑIDO, Diario LL, 8082 (2013), 2.

diferencia de otros campos, se toman medidas sin atender a los expertos y a la doctrina especializada en la materia (“a-cientifismo”).

Ahora bien, también cabe preguntarse si la sociedad realmente solicita una cadena perpetua, o por el contrario busca que se imponga una pena justa, adecuada y que conjugue los dos fines principales de la pena: retribución o reinserción. Según organizaciones como el APDHA, “cuanto más informada está la población más en contra está de la cadena perpetua revisable impulsado por el Gobierno del PP”. En el mismo sentido, el periodista MUÑOZ GONZÁLEZ¹⁸⁵ critica la desinformación de la sociedad acerca del estado actual de la delincuencia y del contenido total de la prisión permanente revisable. Comenta que aunque el 70% aproximadamente de los españoles aprueban esta medida, cuando se les informa del coste anual de mantener un preso en la cárcel (entre 30.000 y 36.000 euros), la cifra de apoyo baja al 48%.

Así pues, se puede concluir diciendo que si bien es cierto que a primera vista la mayoría de los españoles apoyan esta medida, parece que cuanto más se sabe acerca de la misma, más objeciones puede suscitar en la población. Creo que lo que realmente demanda la población no son penas larguísimas que rocen la cadena perpetua, sino que, efectivamente las penas impuestas se cumplan en su totalidad, y no quedarse perplejos al ver como presos condenados a miles de años salen de prisión pasados solo 18 y a los pocos meses vuelven a reincidir. Por eso considero que la sociedad está bastante (mal)influenciada por la *estructura discursiva de las emergencias* y de los medios de comunicación,¹⁸⁶ ya que desde la eliminación de la redención de penas por trabajo en 1995, el tiempo fijado en sentencia coincide prácticamente con el tiempo de cumplimiento real de la condena. Del mismo modo, se puede entender que la sociedad busca “mano dura” y un incremento punitivo del sistema penal, al creer en que la tasa de delincuencia en nuestro país está en continuo crecimiento, cuando como hemos visto, los datos de los últimos años revelan una tendencia contraria.

¹⁸⁵ MUÑOZ GONZÁLEZ, Los españoles rechazan, El Mundo, 25-03-2015.

¹⁸⁶ En este sentido, POZUELO PÉREZ, política criminal mediática, 2013, 20-21, reflexiona diciendo que “la sobrerrepresentación de los delitos violentos dada en los medios de comunicación influye decisivamente en la percepción social de la delincuencia y genera una imagen distorsionada de la sociedad acerca de la delincuencia de su país”.

Capítulo V

1. Conclusiones finales

“La grandeza del Estado de Derecho es la de no tratar jamás al delincuente como éste trató a sus víctimas”

Cessare BONESANA, Marqués de Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, 1764.

Este trabajo deja bastantes puntos sobre los que tratar, no sólo de la nueva pena de prisión permanente revisable, sino de varios aspectos del sistema penal y penitenciario, de los que reflexionaré a continuación basándome en la bibliografía utilizada en el presente estudio.

En primer lugar, es importante poner de manifiesto el contexto político-social en el que se encontraba España en el momento de la implantación de la prisión permanente revisable en nuestra regulación. Cabe recordar que desde el año 1995, el CP ha sufrido infinidad de reformas, en su mayoría orientadas a imponer un sistema penal basado en el carácter retributivo y preventivo de las sanciones, e incrementando la duración de las mismas. Ya en el 2010 el Grupo Parlamentario Popular incorporó en su campaña electoral la inclusión de esta moderna modalidad de cadena perpetua, que finalmente fue aprobada en el Congreso, siendo una de las principales novedades de la LO 1/2015, de 30 de marzo. La propuesta del legislador no es fruto de la casualidad, sino que viene motivada por una serie de circunstancias que afectaron al país en esos tiempos.

Conviene refrescar al lector que en el año 2008, el miembro de la banda terrorista ETA Iñaki de Juana Chaos fue puesto en libertad en medio de un gran revuelo mediático, tras haber pasado “apenas” 21 años en prisión por participar en 25 asesinatos y siendo condenado a más de 3.000 años. Poco después se produce el famoso caso “Mari Luz”, una niña onubense de cinco años que fue asesinada presuntamente por un condenado por pederastia, que debido una cadena de errores judiciales venía eludiendo la cárcel desde 2002. Y en el 2011, en el también ampliamente difundido “Caso Ruth y José”, dos niños de seis y dos años respectivamente fueron asesinados por su padre, José Bretón, que tras un largo juicio sujeto a una fuerte cobertura mediática fue condenado a 40 años de cárcel.¹⁸⁷

Pero ante todo, me gustaría señalar que en el año 2013 la STEDH, Gran Sala, de 21 de octubre, en el caso *Del Río c. España*, tumbó la denominada “Doctrina Parot” por

¹⁸⁷ Aunque en marzo de 2015, la Audiencia Provincial de Córdoba rebajó la condena inicial de 40 a 25 años de cárcel a instancia de la defensa de José Bretón, ya que había sido condenado por tres delitos distintos (dos asesinatos y una simulación de secuestro), siendo de aplicación la acumulación de condenas del art. 76.1 CP.

ser contraria a los artículos 5 (derecho a la libertad) y 7 (principio de legalidad) del Convenio Europeo. Esta doctrina supuso un cambio jurisprudencial por parte del TS español que modificó por completo la forma en la que venía aplicándose los beneficios penitenciarios a los condenados, pasando de descontarse del límite máximo de cumplimiento previsto en el CP aplicable, a hacerlo sobre la condena abstracta (más de 4.000 años en el caso de Henri Parot), lo que en la práctica conllevó que el tiempo de condena de estos presos se alargase considerablemente. La consecuencia de esta decisión jurisprudencial fue la excarcelación masiva de delincuentes condenados por crímenes terribles, lo que supuso un estado de alarma social e indignación entre la ciudadanía que no alcanzaba a comprender como presos condenados a penas milenarias salían de prisión transcurridos 20 años por orden de un tribunal europeo.

Es por ello, que ante tal sensación de injusticia, impunidad frente a los delincuentes y desconfianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia cuando renace esta vieja institución de cadena perpetua, maquillada por el apellido “revisable”, que llevaba casi cien años desaparecida en nuestro ordenamiento.¹⁸⁸ Es evidente que esa sensación existe, la sociedad cree que la delincuencia en nuestro país aumenta cuando todos los datos estadísticos indican lo contrario: tenemos una tasa de criminalidad verdaderamente baja en comparación con otros países del entorno europeo, principalmente en delitos contra la vida y la libertad e integridad sexual. Cabe preguntarse entonces el porqué de esta creencia y la posible respuesta ya se ha dado a lo largo del presente trabajo.

Hemos mencionado que los medios de comunicación, influenciados directamente por los poderes públicos, informan de lo que quieren y como quieren, haciendo especial hincapié en aquellas cuestiones violentas, sangrientas o morbosas que les permiten captar una mayor cuota de audiencia e incrementar así sus ingresos. Los partidos políticos se aprovechan de esta alarma social para tomar medidas populistas en vistas a las elecciones y dar así a la sociedad lo que parece que busca, consiguiendo desviar la atención de otros asuntos que presentan mayor relevancia como el paro o la propia clase política.¹⁸⁹ Además, es evidente que el delito y el castigo se han convertido en cuestiones electorales prioritarias, con el objetivo de recuperar mediáticamente la

¹⁸⁸ Uno de los principales miedos del legislador era dejar claro la constitucionalidad de esta medida, y evitar comparaciones con la cadena perpetua clásica. En efecto, y como algunos autores comentan, el legislador está en lo cierto: ni es una cadena que ate al preso (como sí lo era hasta el siglo XIX) ni es necesariamente perpetua (para siempre sin posibilidad de salir en libertad).

¹⁸⁹ Según el barómetro del CIS, en enero de 2016, los partidos políticos y la política en general ocupaba la tercera mayor preocupación de los españoles, sólo por debajo del paro y la corrupción. En este sentido, SÁEZ VALCÁRCEL, Prólogo. Prisión perpetua, 2013, 14, concluye que el mensaje es claro: “El Estado no reconoce otra fuente de inseguridad que la asociada a los discursos de la ley y el orden; se manipulan así, un objeto, el de la seguridad, desviando la atención para que no se perciba que la intranquilidad de los ciudadanos se deben a la pérdida del trabajo y al recorte de las prestaciones sociales básicas”.

confianza perdida en la pena de prisión, extendiéndose la idea de que la prisión funciona aunque no desde el punto de vista de la reinserción social, sino como mecanismo de inocuización e *incapacitación selectiva* de los delincuentes.¹⁹⁰

Esto último parece haber sido el caso en nuestro país con la última reforma del 2015. Más allá de apoyar o no la legitimidad de la prisión permanente revisable, la tendencia de los últimos gobiernos (especialmente los del PP) ha sido incrementar el rigor penal de nuestra legislación, endureciendo el sistema de penas y tipificando como delito un mayor número de conductas. Parece que efectivamente, los poderes públicos del momento se están haciendo eco del malestar de la gente y en busca de satisfacer sus demandas, optan por tomar medidas con una amplia aceptación y apoyo social.¹⁹¹ O al menos así lo sugiere la orientación político-criminal del CP a raíz de la reforma del 2003, que en palabras de JUANATEY DORADO¹⁹², conllevaron “la apertura de grietas cada vez más amplias y profundas en el sistema de garantías que se había asentado en España en los años de la transición”.

La pregunta ahora iría dirigida a si realmente es necesaria esta nueva pena, habiendo ya en nuestro ordenamiento sanciones que pueden alcanzar los límites establecidos en el art. 76 CP de hasta 30 ó 40 años. El catedrático de Derecho Penal en la UAH, GARCÍA VALDÉS no alcanza a entender “la perpetuidad revisable en un país donde durante más de un siglo el orden sancionador, en su máxima escala de rigor, se ha basado solamente con privaciones de libertad significadas en años”. En el mismo sentido se manifestaba LASCURAÍN SÁNCHEZ¹⁹³, quien critica la cadena perpetua ya no desde la perspectiva de si es o no tolerable constitucionalmente, sino desde el punto de vista de si es eficaz o necesaria para la prevención de los delitos. Teniendo en cuenta

¹⁹⁰ Al respeto del fin de inocuización o incapacitación selectiva, SILVA SÁNCHEZ, La expansión, 2001, 143, recoge que “La premisa mayor de la teoría de la inocuización selectiva es que resulta posible individualizar a un número relativamente pequeño de delincuentes (*high risk offenders*), respecto de los cuales cabe determinar que han sido responsables de la mayor parte de hechos delictivos y predecir, sobre la base de criterios estadísticos, que lo seguirán siendo. De este modo, se entiende que la inocuización de los mismos —esto es, su retención en prisión el máximo tiempo posible— conseguiría una radical reducción del número de hechos delictivos y, con ello, importantes beneficios al menor coste. Expresado en términos contables: recluir dos años a cinco delincuentes cuya tasa predecible de delincuencia es de cuatro delitos por año, «ahorra» a la sociedad 40 delitos y le cuesta diez años de prisión.”

¹⁹¹ Como ejemplo de lo que venimos diciendo lo encontramos en Federico Trillo, responsable de justicia del PP en el año 2011, quien defendió la entrada en nuestro ordenamiento de la prisión permanente revisable alegando que 14 países europeos la incluyen en sus regulaciones penales y que “el 82% de la opinión pública la apoya”.

¹⁹² JUANATEY DORADO, ADPCP, 65 (2012), 129. Siguiendo la misma línea doctrinal, cfr. LANDROVE DÍAZ, LL, 4 (2003), 1923-1932, quien definió la situación penal después de la reforma de 2003 como “ha llegado la hora de la mano dura, de la limpieza de nuestras calles, del cumplimiento íntegro de las condenas, de la prolongación de las penas de libertad, de que no hay que ser cicateros al decretar prisiones preventivas, de que debe acabarse con el espectáculo de que los delincuentes entre por una puerta y salgan por otra de los establecimientos penitenciarios y de que algunos, al menos, deben pudrirse en la cárcel”.

¹⁹³ LASCURAÍN SÁNCHEZ, Los males, El Mundo, 2010.

que ya teníamos prevista una pena que puede alcanzar los 40 años de prisión (con el consenso de los dos grandes partidos políticos del momento), que ya de por sí podría ser inconstitucional, puesto que no está orientada a la reinserción social.

Sin embargo, no podemos entrar a valorar la eficacia de la prisión permanente revisable, ya que todavía no ha dado una situación legislativa en esas condiciones, pero sí se puede comparar con la extinta pena de muerte. Las cifras concluyen que después de la derogación de la pena capital con la CE de 1978, el número de homicidios o asesinatos no se incrementó apenas respecto a antes de su abolición. Esto pone de relieve que una pena más grave no conlleva siempre una reducción del número de delitos, ya que como muchos sociólogos y criminólogos manifiestan, “la eficacia de una norma penal depende de múltiples factores y no solo de la mayor o menor gravedad de la pena contemplada en ella”.¹⁹⁴

Algunos de los juristas hablan de una auténtica obsesión de los poderes públicos frente al terrorismo. Ya decía LAMARCA PÉREZ¹⁹⁵ que “el terrorismo constituye uno de los problemas más graves que tiene planteada la sociedad actual pero también es cierto que es en la legislación antiterrorista donde el Estado democrático muestra de modo más patente una tendencia autoritaria que lesiona gravemente la eficacia de las garantías individuales”. Siguiendo la misma línea doctrinal, ASUA BATARRITA¹⁹⁶ afirma que el terrorismo por sí solo no tiene capacidad para destruir los ordenamientos jurídicos de los países donde realiza sus ataques, “salvo que se entienda que la reacción desmedida de los gobernantes, al responder a la provocación con la misma moneda, despreciando los límites del Derecho interno o internacional, constituye (evidentemente) una grave erosión del ordenamiento jurídico atribuible a los terroristas”. Ciertamente arriesgada esta opinión.

El incremento punitivo del sistema penal, los recientes límites de hasta 40 años o la propia prisión permanente revisable se imponen con el objetivo de prevenir y reducir este tipo de delitos, o al menos eso es lo que nos insiste el legislador de la LO 1/2015. Y esto podría resultar coherente, al menos en cuanto a lo que conocemos como terrorismo tradicional. Pensemos sino en el etarra que en la década de los 80 cometía un tropel de atentados y era condenado a miles de años, pero que entrando en juego la aplicación de los beneficios penitenciarios y los límites recogidos en el CP vigente al momento de los hechos (CP de 1973), pasaba una media de 20 años en prisión. Desde luego en mi opinión, la dureza del CP actual tras la reforma del 2003 o la reciente del 2015 si

¹⁹⁴ CUERDA RIEZU, penas muy largas, 2011, 30.31.

¹⁹⁵ LAMARCA PÉREZ, Azpilcueta, 20 (2008), 200.

¹⁹⁶ ASUA BATARRITA, Delitos de terrorismo, 2006, 246-247.

ejercería la función de *prevención negativa* en su máximo exponente, puesto que sabría que pasaría de los 20 años antes de las reformas a un mínimo de 35 actualmente, y pendiente de una revisión del tribunal cuyo acceso resulta verdaderamente difícil. Es decir, a mi modo de ver si conseguiría influir en la toma de decisión del delincuente, intimidándole para que se abstenga de llevar a cabo esa conducta.

Pero no deja de ser cierto que el problema inmediato es que el terrorismo nacional¹⁹⁷ ha dejado paso a un terrorismo internacional o fundamentalista como Al Qaeda o el denominado Estado Islámico, cuyo objetivo no es destruir el ordenamiento jurídico de ningún país en concreto, ni tampoco tienen aspiraciones políticas o independentistas. Sino que en palabras de NÚÑEZ CASTAÑO¹⁹⁸, actúan siguiendo la “Ley de Dios” (el Corán), que tiene un significado mucho mayor para ellos que cualquier texto legal proveniente “de los hombres”, llegando incluso a dar su vida por matar a los infieles y acceder al paraíso que les prometió Alá. En este caso, ¿tendría algún tipo de influencia o efecto intimidatorio las nuevas medidas impuestas en las últimas modificaciones del CP para este nuevo tipo de terroristas?¹⁹⁹ No tiene pinta que al *yihadista* que tiene la intención de inmortalizarse vaya a hacerle recapacitar saber que si acaba cometiendo el atentado pasaría el resto de sus días entre rejas.

Por tanto, en cuanto a la finalidad de la pena, coincido con la argumentación del TS al afirmar que es un conjunto de criterios y fines los que han de ponderarse a la hora de imponer una pena, no solamente el de resocialización, ya que para la mayoría de los destinatarios de la prisión permanente revisable la única forma de prevención especial de delitos sería la inculcación y su segregación de la sociedad. Aunque creo que es evidente que la nueva reforma del CP estaba más orientada a fines electorales que a la prevención de delitos, eso no quita que la misma deje de ser necesaria. Como ya han manifestado diferentes autores, hay determinados sujetos que no tienen posibilidad alguna de reinserción por el mero hecho de que no quieren o no pueden formar parte de esta sociedad, por lo que queda la duda sobre qué hacer con aquellos sujetos difícilmente “curables” (entre los que incluyo a los terroristas islámicos).

Compartiendo la teoría de JAKOBS, considero útil y eficaz en términos de prevención de delitos y de seguridad distinguir entre el *Derecho penal de los ciudadanos* y el *Derecho penal del enemigo*, ya que solamente así se respondería

¹⁹⁷ Como podría ser ETA o el GRAPO en España o el IRA en Irlanda.

¹⁹⁸ Cfr. NÚÑEZ CASTAÑO, LL penal, 37 (2016), 118-119. Esta autora cuestiona que la pena de prisión perpetua revisable, y en general el endurecimiento del CP, sea útil y eficaz para la prevención de delitos.

¹⁹⁹ LUZÓN PEÑA, Indret, 2 (2013), 14-15, comentaba al respecto que tanto la pena capital como la cadena perpetua resultan inanes a la hora de prevenir la realización de atentados terroristas, ya que éstos suelen ser cometidos por terroristas por convicción, a los que no les afecta la llamada prevención general positiva.”

penalmente de forma proporcional ante quien delinque de manera ocasional (ciudadano) frente a quien lo hace por sistema (enemigo). Para los segundos, también llamados delincuentes por convicción, cualquier intento del equipo de tratamiento del centro penitenciario en busca de su arrepentimiento y realización profesional resultaría en vano.

Por tanto, en estos casos perfectamente identificados ¿no sería conveniente “restringir” los DDFF y libertades de un grupo reducidísimo de individuos en aras de garantizar la seguridad y las garantías constitucionales de la mayoría?²⁰⁰ O dicho de otra forma, ¿qué perderíamos por dejar a un sujeto de por vida en prisión, si no ha superado la revisión pertinente y queda acreditado que presenta un alto grado de peligrosidad y riesgo de reincidencia? No podríamos presumir de ser el país más progresista o políticamente correcto de Europa, pero eso no resulta lo prioritario en comparación con la evitación de posibles delitos y la seguridad jurídica.

Con el terrorismo, así como en todo el Derecho penal y en los casos más sangrantes o violentos no valen las medias tintas. Pero por desgracia, es así: en ciertas materias somos un país acomplejado como insinuaba NISTAL BURÓN. Algunos juristas criticaban que con la dureza de las últimas modificaciones penales parecía que “o estabas contra el terrorismo, o formas parte de él”. Yo suscribo completamente esa frase, ya que la lucha contra el terrorismo no es (o no debería ser) una cuestión ideológica donde cada uno pueda tener la suya y mostrarla abiertamente. Solo tenemos que ver como actúan otros países europeos frente a las atrocidades recientes del terrorismo islámico (Francia, Bélgica,...) mostrando una unidad nacional por encima de todo, mientras aquí estaríamos buscando a quien echar las culpas para obtener un posterior beneficio en las urnas.

Ya comenté que para tratar materias fundamentales como la educación o la sanidad, los diferentes partidos políticos deberían dejar a un lado sus diferencias ideológicas en aras de una mayor estabilidad y mirando siempre por el interés general de la nación. De igual modo incluyo a la lucha contra el terrorismo entre estos asuntos en los que no debería haber discrepancias, aunque lamentablemente parece que sí las hay. De hecho, algunos autores catalogan como “injustificable e intolerable” que la emisión de una opinión de apoyo expreso o tácito (o simplemente de no condena del terrorismo) pueda ser susceptible de criminalización con la nueva reforma. Lo que yo catalogo como injustificable e intolerable es que terroristas o simpatizantes de los mismos, ya no solamente estén libres tras haber pasado en prisión el tiempo de condena estimado (bastante breve por la legislación existente en ese momento como ya se ha

²⁰⁰ Obviamente cuando se habla de “restringir” los DDFF y libertades de ese grupo de individuos que representan el 0,01% de la población no se refiere a la comisión de cualquier acto de tortura o tratos denigrantes sino que en supuestos excepcionales se deje a un lado la literalidad del art. 25.2 de la CE frente al interés general del 99,99% restante.

visto), sino que encima estén sentados en los Parlamentos de ciertas Comunidades Autónomas o en los Ayuntamientos de varios municipios, sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento hacía las víctimas o a la sociedad en general.

Hay que concienciarse que no se puede estar modificando el Código Penal cada vez que hay un nuevo gobierno, salvo en los casos que sean estrictamente necesario. Da una completa sensación de inseguridad jurídica para la ciudadana ver que la normativa que debía ser unánime y que englobase a todos los españoles se modifique cada dos por tres por objetivos electorales y populistas, o simplemente por eliminar todo lo que el anterior ejecutivo hubiese llevado a cabo en su legislatura (que algo estaría bien y no haría falta derogar, digo yo). Esto es algo que lleva produciéndose años e incluso siglos en nuestro país, puesto que como hemos visto en el repaso histórico a los Códigos penales desde 1822, la tónica general suele ser legislar en materia penal en función del “bando” político en el poder.

Mi valoración final es de aprobación a la prisión permanente revisable, pero como todo en Derecho, es matizable en varios aspectos. En primer lugar, creo en la “teoría mixta” de la función de la pena privativa de libertad, siendo una combinación de la finalidad retributiva en el inicio de la pena, de la preventiva durante el cumplimiento principal, y de la reeducativa en los últimos años de la misma. En este sentido, entiendo que para garantizar que se cumpla estos objetivos hay que invertir en medios y recursos materiales y personales en los centros penitenciarios, habilitándolos para que los reos puedan vivir en dignidad y que si no logran alcanzar la revisión de la condena sea exclusivamente por una decisión de ellos mismos, no por falta de apoyo de la Administración de Justicia.

En segundo lugar, considero que la prisión permanente revisable cumple por un lado la función preventiva e intimidatoria pensada en evitar la comisión de nuevos delitos graves, como la reeducativa, siempre que se prevea expresa y legalmente el procedimiento para acceder a la revisión y tener garantías suficientes para poder lograrla. Y además, me parece coherente en aras del principio de proporcionalidad castigar de la forma más severa las condenas más rechazables moralmente. Aunque insisto que lo prioritario para “generar confianza” en la Administración de Justicia y en el sistema penal es garantizar el cumplimiento íntegro de las condenas impuestas y ser estrictamente riguroso en la aplicación de beneficios penitenciarios a fin de evitar casos de reincidencia en crímenes especialmente graves para la ciudadanía.

Dicho todo lo anterior, no encuentro mejor manera para cerrar el presente estudio que citando al Subdirector General de Tratamiento y Gestión penitenciaria en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Javier NISTAL BURÓN:²⁰¹

“El legislador está obligado a poner sobre la mesa otras alternativas, aunque sean más controvertidas, un mecanismo que permita concretar la duración de la misma al pronóstico de peligrosidad del autor del hecho delictivo, lo que se puede hacer a través de una pena indeterminada sujeta a una posible revisión-reducción de la misma a partir de determinados plazos. El fracaso de una forma doctrinal y voluntarista de entender, hasta ahora, la sanción de los delitos, debe dar paso a una solución que priorice la defensa de la víctima, la protección de la sociedad y el castigo efectivo del delincuente, dejando de lado un pseudo-progresismo que impide cuestionar el valor absoluto de la rehabilitación como fin de la pena, lo que no hace más que beneficiar al reo y desproteger a la víctima. Y todo ello para dotar de mayor seguridad a los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos”.

²⁰¹ NISTAL BURÓN, LL Penal, 68, (2010), 36-37.

Anexo

1. Jurisprudencia citada

Sentencias del TEDH

STEDH, de 28 de mayo de 2002, caso *Stafford c. Reino Unido*.

STEDH, de 11 de abril de 2006, caso *Leger c. Francia*.

STEDH, Gran Sala, de 4 de diciembre de 2007, caso *Dickson c. Reino Unido*.

STEDH, de 12 de febrero de 2008, caso *Kafkaris c. Chipre*.

STEDH, de 3 de noviembre de 2009, caso *Meixner c. Alemania*.

STEDH, de 2 de septiembre de 2010, caso *Iorgow (II) c. Bulgaria*.

STEDH, Gran Sala, de 9 de julio de 2013, caso *Vinter y otros c. Reino Unido*.

STEDH, de 21 octubre de 2013, caso *Del Río c. España*.

STEDH, de 10 de diciembre de 2013, caso *Murray c. Países Bajos*.

STEDH, de 13 de noviembre de 2014, caso *Bodein c. Francia*.

STEDH, de 3 de febrero de 2015, caso *Hutchinson c. Reino Unido*.

Sentencias del TC español

STC 150/1991, de 4 de julio.

STC 112/1994, de 24 de junio.

STC 34/1996, de 11 de marzo.

STC 81/1997, de 22 de abril

STC 91/2000, de 30 de marzo.

STC 25/2002, de 11 de febrero.

STC 100/2003, de 2 de junio.

STC 115/2003, de 16 de junio.

STC 181/2004, de 2 de noviembre.

STC 236/2007, de 7 de noviembre.

STC 34/2008, de 25 de febrero.

STC 59/2008, de 14 de mayo.

STC 22/2010, de 27 de abril.

Sentencias del TS español

STS 2/1987, de 21 de enero.

STS 28/1988, de 23 de febrero.

STS 1822/1994, de 20 de octubre.

STS 55/1996, de 28 de enero.

STS 75/1998, de 31 de marzo.

Otra jurisprudencia utilizada

STC italiano, número 161, de 4 de junio de 1997.

R. v Offen [2001] WLR 253.

STC alemán (BVerfGE), del 21 de junio de 1977.

Bibliografía²⁰²

ARMAZA ARMAZA, Emilio José, **El tratamiento penal** del delincuente peligroso, Granada, Comares, 2013.

ASUA BATARRITA, Adela, El discurso del enemigo y su infiltración en el Derecho penal. **Delitos de terrorismo**, “finalidades terroristas” y conductas periféricas, en Derecho penal del enemigo: el discurso penal de la exclusión (coord. CANCIO MELIÁ, Manuel / GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos), Vol. 1, Madrid, 1.ª Ed., Edisofer, 239-276.

CÁMARA ARROLLO, Sergio, La prisión permanente revisable en los Anteproyectos de reforma del Código penal II, en: UNIR Revista, 25-07-2013.

CANCIO MELIÁ, Manuel, La pena de cadena perpetua (“prisión permanente revisable”) en el Proyecto de reforma del Código Penal, en: Diario LL, 8175 (2013), 1-11.

CAPITA REMEZAL, Mario, Análisis de la **legislación penal antiterrorista**, Madrid, Colex, 2008.

CEREZO MIR, José, Estudios sobre la **reforma penal** española, Madrid, Tecnos, 1993.

CEREZO MIR, José, Curso en **PGI**, Madrid, 6.ª Ed., Tecnos, 2004.

CERVELLÓ DONDERIS, Vicenta, El sentido actual del principio de constitucionalidad de reeducación y reinserción social, en: Presente y futuro de la Constitución española de 1978, Universidad de Valencia, 2005, 217-233.

CID MOLINÉ, José, ¿Es la prisión criminógena? (un análisis comparativa de reincidencia entre la pena de prisión y la suspensión de la pena), en RDPC, 19 (2007), 427-456.

CID MOLINÉ, José, El incremento de la población reclusa en España entre 1996-2006. Diagnóstico y remedios, en: REIC, 6 (2008), 1-31.

CÓRDOBA LÓPEZ, Francisco, BLASCO RECIO, Juan, Cuatro páginas acerca de la **pena de muerte** y la cadena perpetua, Madrid, 1856.

CUERDA RIEZU, Antonio, La cadena perpetua y las **penas muy largas** de prisión: porqué son inconstitucionales en España, Barcelona, Atelier, 2011.

²⁰² En negrita las abreviaturas de los títulos de los libros indicados en las diferentes notas al pie de página del trabajo.

CUERDA RIEZU, Antonio, Inconstitucionalidad de la prisión permanente revisable y de las penas muy largas de prisión, en Otrosí, Revista del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 12 (2012), 29-33.

DAUNIS RODRÍGUEZ, Alberto, La prisión perpetua. Principales argumentos en contra de su incorporación al acervo punitivo español, en: RDPC, 10 (2013), 65-114.

DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis, El nuevo modelo penal de seguridad ciudadana, en RECPC, 6 (2004), 1-34.

DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis, **Delitos y penas** en España, Madrid, Catarata, 2015.

DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo, ¿Necesitamos **endurecer las penas**?, en Diario La Vanguardia, 15-04-2009.

FARALDO CABANA, Patricia, **Nuevos retos** del Derecho penal en la era de la globalización, Valencia, Tirant lo Blanch, 2004.

FERNÁNDEZ BERMEJO, Daniel, Una propuesta revisable: la prisión permanente, en: LL Penal, 110 (2014), 75-87.

FERRAJOLI, Luigi, **Ergastolo** y derechos fundamentales (HURTADO POZO, coord.), en El sistema de penas del nuevo Código Penal, traducción de HURTADO POZO, Madrid, Asociación Peruana de Derecho Penal, 1999, 295-306.

FUENTES OSORIO, Juan Luis, ¿La botella medio llena o medio vacía? La prisión permanente: el modelo vigente y la propuesta de reforma, en: ReDCE, 21 (2014), 309-345.

GARLAND, David, **La cultura del control**. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea (Traducción de SOZZO, M), Barcelona, Gedisa, 2005.

GIMBERNAT ORDEIG, Enrique, **Prólogo** a la segunda edición, en su 16.^a Ed. del Código Penal, Madrid, Tecnos, 2010.

GONZÁLEZ COLLANTES, Tàlia, ¿Sería inconstitucional la pena de prisión permanente revisable, en: ReCRIM: Revista de l'Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals de la UV, 9 (2013), 6-23.

GROIZARD Y GÓMEZ DE LA SERNA, Alejandro, **El Código penal de 1870** concordado y comentado, Tomo I, Madrid, 2.^a Ed., 1903.

JAÉN VALLEJO, Manuel, Prisión permanente revisable, en El Cronista, 35 (2013), 44-50.

JAKOBS, Günther, CANCIÓ MELIÁ, Manuel, **Derecho penal del enemigo**, Navarra, 2.^a Ed., Civitas, 2006.

JUANATEY DORADO, Carmen, Política criminal, reinserción y prisión permanente revisable, en: ADPCP, 65 (2012), 127-153.

KANT, Immanuel, **Crítica de la razón** práctica, traducción de GARCÍA MORENTE y MIÑANA, Madrid, Espasa Calpe, 1975.

HIDALGO BLANCO, Sara, Estudio jurídico-social sobre la prisión permanente revisable en España, *La Toga*, 187 (2013), 18-20.

LAMARCA PÉREZ, Carmen, Legislación penal antiterrorista: análisis crítico y propuestas, en: *Azpilcueta*, 20 (2008), 199-214.

LANDROVE DÍAZ, Gerardo, El derecho penal “de la seguridad”, en: *LL*, 2003-4, 1923-1932.

LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio, **Los males** de la cadena perpetua revisable, en diario *El Mundo*, 10-06-2010.

LARRAURI PIJOAN, Elena, La economía política del castigo, en: *RECPC*, 11-06 (2009), 1-22.

LEGANÉS GÓMEZ, Santiago, La prisión permanente revisable y los “beneficios penitenciarios”, en: *LL Penal*, 110 (2014), 20-31.

LLOBET ANGLÍ, Mariona, La ficticia realidad modificada por la ley de cumplimiento íntegro y efectivo de las penas y sus perversas consecuencias, en: *InDret*, 1 (2007), 1-36.

LÓPEZ PEREGRÍN, Carmen, ¿Lucha contra la criminalidad mediante el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas?, en: *REIC*, 1 (2004), 1-20.

LUCCHINI Laura, **Antes morir** que cadena perpetua, en diario *El País*, 01-06-2007.

LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel, Actuación en conciencia y objeción de conciencia como causa de justificación y como causa de exculpación frente a la punición del delincuente por convicción, en: *InDret*, 2 (2013), 1649-1666.

MANZANARES SAMANIEGO, José Luis, El artículo 78 del nuevo Código Penal, en: *AP*, 30 (1997), 659-673.

MAPELLI CAFFARENA, Borja, **Las consecuencias jurídicas** del delito, Madrid, 4.^a Ed., Civitas, 2005.

MUÑOZ CONDE, Francisco José, La generalización del Derecho penal de excepción: Tendencias legislativas doctrinales: entre la tolerancia cero y el derecho penal del enemigo, en: *Ciencia jurídica*, 1 (2012), 113-142.

MUÑOZ GONZÁLEZ, Alberto, **Los españoles rechazan** la cadena perpetua al saber lo que cuesta, en diario *El Mundo*, 25-03-2015.

NISTAL BURÓN, Javier, ¿Es viable en nuestro ordenamiento jurídico la pena de “cadena perpetua” como solución de determinados tipo de delincuentes difícilmente reinsertables?, en: LL Penal, 68 (2010), 31-37.

NÚÑEZ CASTAÑO, Elena, Tendencias político criminales en materia de terrorismo tras la LO 2/2015, de 30 de marzo. La implantación de la normativa europea e internacional, en: RP, 37 (2016), 110-136.

NÚÑEZ FERNÁNDEZ, José, Análisis crítico de la libertad condicional en el Proyecto de Reforma del Código Penal de 20 de septiembre de 2013: especial referencia a la prisión permanente revisable, en: LL penal, 110 (2014), 50-74.

PASCUAL MATELLÁN, Laura, La prisión permanente revisable. Un acercamiento a un derecho penal deshumanizado, en: Clivatge. Estudis i testimonis sobre el conflicte i el canvi socials, 3 (2015), 51-65.

POZUELO PÉREZ, Laura, La **política criminal mediática**: génesis, desarrollo y costes, Madrid, Marcial Pons, 2013.

QUERALT JIMÉNEZ, Joan Josep, ¿Redoblar las penas?, en diario El País, 09-11-2000.

RÍOS MARTÍN, Julián Carlos, La **prisión perpetua en España**. Razones de su ilegitimidad ética y de su inconstitucionalidad, San Sebastián, Gakoa, 2013.

ROIG TORRES, Margarita, La cadena perpetua. Los modelos inglés y alemán. Análisis de la STEDH de 9 de julio de 2013. La “prisión permanente revisable” a examen, en: CPC, 111 (2013), 97-144.

ROIG TORRES, Margarita, **La cadena perpetua** en el Derecho Alemán y Británico. La prisión permanente revisable, Madrid, 1.ª Ed., Iustel, 2016.

ROXIN, Claus, **DPPGI**. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito, traducción de: Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo, Javier de Vicente Remesal, Madrid, Civitas, 1997.

ROXIN, CLAUDIUS, Cambios en la teoría de los **finés de la pena** (Teoría del delito en la discusión actual), Lima, Grijley, 2007.

SÁEZ MALCEÑIDO, Emilio, Sobre la prisión permanente, en: Diario LL, 8082 (2013), 1-19.

SÁEZ VALCÁRCEL, Ramón, **Prólogo. Prisión perpetua** y dignidad humana, en RÍOS MARTÍN, Julián, La **prisión perpetua en España**. Razones de su ilegitimidad ética y de su inconstitucionalidad, San Sebastián, Gakoa, 2013.

SALAT PAISAL, Marc, Análisis del instituto de la libertad condicional en la reforma del CP de 2015, en: AFDUC, 19 (2015), 415-436.

SÁNCHEZ ROBERT, María José, La prisión permanente revisable en las legislaciones española y alemana. Análisis comparativo, en: AdD, 1 (2016), 1-50.

SILVA SÁNCHEZ, Jesús María, **La expansión** del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales, Madrid, 2.^a Ed., Civitas, 2001.

SILVA SÁNCHEZ, Jesús María, **Una primera lección** de Derecho Penal, en Derecho Penal del Estado Social y Democrático: Libro homenaje a Santiago MIR PUIG, (Dir. LUZÓN PEÑA, Diego Manuel), Madrid, LL, 2010, 61-84.

TÉLLEZ AGUILERA, Abel, **Derecho Penal** Parte General (adaptado a las reformas del Código penal de 2015). *Un estudio crítico desde la práctica judicial*, Madrid, EDISOFER, 2015.

VILAPLANA RUÍZ, Javier, Legislación líquida, en: Diario LL, 7980 (2012), 1-15.

VIVES ANTÓN, Tomás S., **La injerencia**, el error y el derecho, en diario El País, 01-04-2010.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl / ALAGIA, Alejandro / SLOKAR, Alejandro, **Manual de Derecho Penal**, Parte General, Buenos Aires, Ediar, 2006.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl, La filosofía del sistema penitenciario en el mundo contemporáneo, en: THEIMS, Revista de Derecho, 35 (1997), 179-191.